



Publicación del Centro de Investigaciones en
Administración Pública de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires



Editado con la colaboración de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y
la participación del Rectorado de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Raúl Dargoltz, Oscar Gerez y Horacio Cao
El Santiagueño: cambio político y régimen
caudillista. - 1a. ed. - Buenos Aires: Biblos, 2006.
127 pp.; 23x16 cm.

ISBN 10: 950-786-564-0
ISBN 13: 978-950-786-564-0

1. Historia Política Argentina.
CDD 320.982

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.
Armado: Hernán Díaz
Coordinación: Mónica Urrestarazu

© Los autores, 2006
© Editorial Biblos, 2006
Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires
editorialbiblos@editorialbiblos.com / www.editorialbiblos.com
Hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Impreso en la Argentina

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Esta primera edición de 1.200 ejemplares
fue impresa en Indugraf S.A.,
Sánchez de Loria 2251, Buenos Aires,
República Argentina,
en noviembre de 2006.

Índice

Prólogo, por Alejandro Rofman	9
Introducción	
Santiago del Estero, entre la farsa y el horror	11
Capítulo 1	
La construcción de una periferia: Santiago del Estero	15
Los orígenes promisorios	15
Cuando Santiago perdió el tren.....	17
Un perfil diferente para la actividad forestal	24
Capítulo 2	
La llegada del peronismo al poder	27
El peronismo en las provincias pobres	27
La carambola que entronizó a Carlos Juárez	31
¿Qué fue el juanismo?	32
Entre la inestabilidad y los usurpadores milliares	36
Capítulo 3	
Hacia el estallido: recuperación democrática, santiagueño y primera intervención federal	41
El retorno de la democracia en Santiago del Estero	41
Carlos Mujica, "el hombre de Mailín"	44
Beliz y Menem apoyaron el pacto Mujica-Juárez	47
Hacia el Santiagueño	48
El 16 de diciembre de 1993. La comedia y la tragedia	51
La intervención federal de "los mediterráneos"	53
Resurgiendo como el Ave Fénix	55
Capítulo 4	
La caída	57
Otra vez Juárez	57
Persecuciones y amenazas	61

La palabra de don Víctorio	64
Un Juárez golpeado	66
Los errores	67
La Gestapo santiagueña	73

Capítulo 5

La intervención federal (primera parte): cuando los federales se propusieron cambiar el mundo	77
El desembarco	77
Los primeros pasos	79
El nuevo gobierno y la política provincial	83
Los actores políticos provinciales	85
La reforma constitucional	87
La política de vivienda	89
El problema de la tierra	93

Capítulo 6

La intervención federal (segunda parte): la retirada	97
Las crisis sucesivas: cuando la historia cambia de rumbo	97
El canto del cisne del movimiento social	104
Hacia las elecciones normalizadoras	105
El triunfo de Zamora	109

Epílogo	113
De cara al futuro	113
La maldición del santo	113
Las grandes paradojas: "Pobre de Santiago por su estupenda riqueza"	116

Bibliografía	121
--------------------	-----

Apéndice fotográfico	123
----------------------------	-----

Prólogo

Este prólogo fue escrito sobre el borde del proceso de armado e impresión del libro, debido a la muy amable y afectuosa insistencia de los autores del libro. Esta última circunstancia hizo que aceptara redactarlo, con enorme gusto aunque, quizá, con insuficiente calidad, atributo que el texto merece.

El libro que el lector va a tener oportunidad de leer a continuación es una apretada pero muy rica y valiosa historia social, política y económica de una provincia periférica de la Argentina. Los trabajos de historia social regional son escasos en nuestro país y este texto contribuye muy adecuadamente a esta bibliografía, reducida, pero merecedora de un enriquecimiento mayor.

El lector de este libro va a transitarlo sin despegarse de él. Es apasionante en todo el amplio sentido de la palabra. La metódica y detallada reconstrucción de la historia de Santiago del Estero permite recorrer las atribulaciones, los desencuentros y las agresiones que el pueblo santiagueño recogió a través de su extenso devenir histórico y, comprender, a cabalidad el origen, el desarrollo y la caída del "juarismo". Como en el proverbio bíblico: "Aquellos polvos trajeron estos lodos", el libro nos permite entender muy bien cómo una estructura económica y social provincial, promisorio hasta bien entrado el siglo XIX, se frustra y se retrasa estructuralmente para convertirse, en gran parte del siglo XX, en un sistema prebendario, clientelístico y plagado de personajes funestos para la salud económica, social y política provincial.

Como en pocos otros textos tan sintéticos pero valiosos, des-

cubrimos el origen histórico de los males contemporáneos y reconocemos en los nombres y apellidos de los más encumbrados personajes del poder en Santiago las desventuras y los retrocesos que tan bien se puntualizan. Aquí, en páginas que atrapan e ilustran, se reconoce el porqué del sistema clientelístico tradicional (en las palabras de Cao), que pudo florecer tantos años al calor de intereses económicos y políticos espurios, que tal sistema logró hacer perdurar.

Las páginas finales son un despliegue de apelaciones a la transformación del modelo santiagueño impuesto por el juarismo signado por el control policial, el poder económico en pocas manos y la miseria del interior, que no pudo desterrar del todo la intervención federal de pocos años atrás.

Creemos que para todo estudioso de la realidad nacional y regional, la lectura de este texto es indispensable y alentadora. Lo primero, porque va a encontrar, con meridiana claridad, el porqué de las desventuras pasadas y presentes de la sufrida población santiagueña. Lo segundo, porque los autores presentan, en breves líneas, una apelación a la construcción de un nuevo derrotero, alumbrado por la participación popular y la satisfacción de las necesidades de la mayoría del querido pueblo de Santiago del Estero.

Las ideas expuestas pueden florecer si la población provincial las hace propias y las pone en marcha, sin claudicaciones ni debilidades.

Dr. ALEJANDRO ROFMAN
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2006
Investigador principal del Conicet
Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Santiago del Estero, entre la farsa y el horror

El teléfono sonó en la sala de redacción del diario de Santiago del Estero.

Una voz de mujer dijo: "Hola, llamo para preguntarte si sabés cómo sigue tu madre... espero que esté bien de salud, deberías cuidarla más...". Y antes de que el sorprendido periodista pudiera reaccionar, la comunicación se había cortado.

Era el lunes 22 de mayo de 2000. Habían pasado tres días desde que el periódico publicara una investigación que puso al descubierto la existencia de un sistema de espionaje contra la oposición política, social y cultural, a cuya cabeza aparecía el comisario Musa Azar, ex represor de la dictadura militar de los años 70 y, por entonces, subsecretario de Informaciones y mano derecha del gobernador, el interminable Carlos Arturo Juárez.

El periodista les contó a sus compañeros sobre la extraña llamada. Habían tomado la decisión de no amilanarse ante las presiones del "juarismo", como le llaman a la expresión política que el caudillo lideraba en la provincia del norte argentino. Pero el temor pudo más.

El hombre tomó de nuevo el teléfono y llamó a su madre. Durante el corto lapso que demoró en atender, el corazón del periodista parecía a punto de salirse del pecho, su respiración remaba entrecortada y las manos le temblaban irremediablemente.

"Hijo, suerte que llamaste, me quedé preocupada", le dijo su madre. "Acabo de recibir una llamada horrible, una mujer me preguntó por vos, y me pidió que te cuidara, me pareció un mensaje extraño, no he podido reconocer esa voz ¿Estás

bien, hijo? ¿Qué está pasando...?”. El hombre no supo qué decirle, pero una helada sensación de vulnerabilidad le recorrió el cuerpo.

Las amenazas y los aprietos a la oposición política, así como el seguimiento a universitarios, sacerdotes y periodistas, fueron moneda corriente en la provincia de Santiago del Estero durante los sucesivos gobiernos de Juárez.

Estas prácticas se alternaban con situaciones ridículas que solían ser reflejadas en notas de color en periódicos nacionales y regionales. “La obra El cartero contiene escenas obscenas [...] que alteran las hormonas de las mujeres”, afirmó una vez el caudillo, y obligó a bajar de cartel a la internacionalmente premiada pieza de Antonio Skármeta. Una manifestación de empleados públicos, la mayoría mujeres, se congregó luego para agradecerle la protección de la moral provincial.

Salir de lo anecdótico e intentar explicar por qué los últimos años de Santiago discurrieron entre la farsa y el horror nos lleva a mirar mucho más atrás, cuando fracasa el proyecto agroindustrial del azúcar. En la debacle del que era el primer fabricante de azúcar del país —que se lanzó al trapiche para conjurar con su sangre el fracaso de la zafra— y en el predominio de una clase parasitaria que vivió de vender millones de hectáreas fiscales de bosque de quebracho, comenzó a escribirse una historia que el sacrificio de Leyla y Patricia —otra vez la sangre— pareció empezar a cerrar.

Entre aquel pasado y este presente, pasarían muchas cosas. Desfilarian frente a Juan Domingo Perón los hacheros organizados en un sindicato. En medio del desierto surgiría un oasis de turismo social, que demostraría que el trabajo humano puede superar todas las contingencias. Santiago del Estero vería nacer al último guevarista y cobijaría al primer obispo que se enfrentó al poder feudal de las provincias.

Como en un calidoscopio, fragmentarios relatos fueron asignando a Santiago del Estero el papel de feudo político por autonomasía. Juárez armando una red infinita de punteros, invocando a su protectora Evita, hablando con los Montoneros, arreglando con José López Rega, cercano a Raúl Alfonsín, aliado a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde, entronizando como gobernador a César Iturre, cooptando al gobernador Carlos Mujica. Pactando con los radicales, con la Democracia Cristia-

na. Utilizando el Estado de manera inverosímil para favorecer a sus amigos, maestros sin la primaria terminada, inspectores de escuela analfabetos pero juaristas de alma, y eso basta.

Luego el sistema se descontrola y queda expuesta la violencia. Al azar, contra opositores, campesinos, intelectuales o simplemente gente que se cruzaba en el camino.

Como a Raúl Dargoltz; cuando a alguien en el poder no le gustó su libro *El Santiagueñazo*. Gestación y crónica de una poblada argentina, tuvo que soportar un juicio penal por calumnias e injurias, donde la parte acusadora solicitó una pena de tres a seis años de cumplimiento efectivo y una onerosa indemnización contra el autor y la editorial.¹

No sólo hubo violencia política. También se mató con la desidia, con la concentración económica, con la red hospitalaria colapsada, con el sistema de ayuda social que sólo llegaba a los “del palo”. Y a los que sobrevivieron se los llevó a una muerte en vida, condenándolos a condiciones de existencia miserable. Ellos sabían que mataban, y por eso adulteraban estadísticas.² En el calidoscopio ocupan cada vez más lugar los que se rebelan y empiezan a marchar. Ya no sólo es farsa y horror; es también la lucha de las Madres del Dolor, de los obispos Gerardo Sueldo y Juan Carlos Maccarone, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), de gente suelta que se arriesga a enfrentar a un poder que parecía eterno y omnipotente. Y finalmente, la intervención federal, la apertura a una nueva etapa, tan diferente como para que artistas populares cantaran su defensa de la democracia y de los derechos humanos en la Casa de Gobierno —otrora fortaleza de los Juárez— iluminada y llena de flores, llena de pueblo.

En derredor de esta historia de muerte y magia y esperanzados con la resistencia a tanta miseria y horror es que se escribió este libro, como forma de conjurar los fantasmas de un retorno y empezar a soñar con un futuro diferente.

1. Luego de un largo proceso, y gracias a una amplia solidaridad provincial, nacional e internacional, Raúl Dargoltz fue sobreesido.

2. Veremos cómo, durante la intervención federal, salieron a la luz la distorsión que el juarismo hacía de las estadísticas sociales y económicas.

CAPÍTULO 1

La construcción de una periferia: Santiago del Estero

Los orígenes promisorios

Santiago del Estero, la vieja ciudad del Barco, fundada en 1553 como el primer poblamiento estable de lo que luego sería la República Argentina, comparte con muchos otros pueblos de América Latina un pasado prometedor y un presente de desesperanza.

De aquella legendaria “madre de ciudades”, avanzada del proceso de consolidación de la organización colonial española y punto de partida de las expediciones fundadoras de la mayoría de las poblaciones más importantes del país colonial, poco queda hoy, convertida en uno de los puntos más pobres de todo el país.

En sus primeros pasos, nada hacía prever este futuro. Como parte de la Gobernación de Salta del Tucumán su desarrollo estuvo ligado al abastecimiento del complejo minero del Potosí, por ese entonces una de las áreas más pobladas y dinámicas del mundo. En esta línea, Santiago del Estero se especializó en la producción de textiles elaborados con el algodón cultivado en las provincias norteñas.¹

La llamada “ropa del Tucumán” se exportaba a todo el virreinato del Perú para abastecer de indumentaria de trabajo a la numerosa población minera. El alto valor comercial del teji-

1. También, como ocurría con toda la economía colonial, con la explotación de la mano de obra indígena.

do de algodón le permitió ser el oro y la plata de la que carecía la región. Tanto es así que no sólo fue utilizado como vestimenta sino que con el correr del tiempo fue convirtiéndose en un factor de intercambio muy aceptado por la población. Hasta el salario del gobernador se pagaba con “ropa del Tucumán”.

El negocio de los tejidos de algodón era tan fructífero que fue pionero de lo que sería el comercio internacional argentino. El obispo Victoria inauguró las exportaciones de ropa del Tucumán con una partida de estos productos que viajó desde Santiago del Estero a Brasil, un 2 de septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo como el día de la industria nacional.

Pero no sólo había algodón en Santiago del Estero. También existieron molinos harineros, atahonas a tracción animal que aprovechaban la excelente cosecha agrícola de la zona de regadío del río Dulce, cría de ganado, producción de carretas y toda una incipiente red de artesanos de las más variadas ocupaciones que abastecían la demanda de la ciudad.

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, Buenos Aires y la región pampeana estaban dentro de lo que era el área más retrasada de lo que sería el territorio argentino. Es que no estaban dadas las condiciones para el despliegue de la agricultura y la ganadería de zona templada, emprendimientos para los que la pampa húmeda era particularmente apta. Asimismo, desde Lima —capital del virreinato del Perú del que dependía todo lo que hoy es el territorio argentino— se habían impuesto disposiciones que prohibían casi todo el comercio por el puerto de Buenos Aires, hecho que además de frenar su desarrollo había servido como protección de las industrias del interior contra los productos europeos.

Este escenario promisorio recibe una proyección impensada cuando es creado el virreinato del Río de la Plata. Esta nueva unidad política —tal vez el elemento más importante de las reformas que los Borbones diseñaron para las colonias americanas— unía el hinterland del Potosí con el puerto de Buenos Aires.

De esta forma, el tradicional complejo minero dio un salto productivo al sacarse de encima la parasitaria aristocracia limeña. Por su parte, Buenos Aires, que ya había comenzado su despegue alrededor del comercio ilegal y la producción de cue-

ros, recibe también los beneficios de su apertura como puerto de primer orden en la organización colonial y por el nuevo status de capital virreinal.

Santiago del Estero y lo que hoy es la región del noroeste argentino parecían llamados a tener un futuro brillante en la nueva estructura. En efecto, su estratégica ubicación en la ruta de la plata alto peruana le permitió, durante los casi cuarenta años que se mantuvo la integridad territorial del virreinato, tener un desarrollo vertiginoso.

Pero todo lo positivo de esta organización se revirtió cuando, al inicio del proceso independentista, el hinterland alto peruano, que fuera por centurias su mercado tradicional, quedó fuera del país en formación. Además, los gobiernos revolucionarios impulsaron un librecambismo que enriqueció a la “Pandilla del Barranco”, nombre con el que se conocía a la burguesía comercial porteña surgida al calor del contrabando. Para rematar este contexto desfavorable, hasta la segunda mitad del siglo XIX Europa se retrajo ocupada en su propia crisis, y las nuevas repúblicas hispánicas tuvieron serias dificultades para captar capitales y abrir líneas de exportación, con lo que el comercio de ultramar sólo sirvió para exponer a las débiles industrias del interior a una ruinoso competencia que no pudieron soportar.

Como respuesta a la degradación del interior surgen los caudillos, viejos oficiales de la independencia como Pancho Ramírez, Juan Felipe Ibarra, Juan Bautista Bustos, José Gervasio Artigas, que al mando de sus tropas irregulares defendieron como podían los intereses provinciales frente al librecambismo porteño. Más allá de las razones o sinrazones de su lucha —discusión que se ha convertido en una reiterada batalla entre la historia oficial y el revisionismo—, lo que interesa destacar aquí es que como resultado del nuevo estado de situación lo que por esa época empezaba a conocerse como “interior” se hizo pobre.

Quando Santiago perdió el tren...

Pasada la mitad del siglo XIX ya es claro que en el naciente país existían dos clases de territorios: por un lado, la pampa

húmeda, lanzada a una veloz modernización y progreso socioeconómico; por el otro, el resto del país, que va quedando cada vez más rezagado. Así, Juan Bautista Alberdi podrá decir que "las provincias del interior no son nada, son mera entidad moral, poder en el nombre. El verdadero poder, el centro de vida y de acción dirigente en la República Argentina, está en las cuatro provincias litorales. Son el proscenio de nuestro gran teatro, allí se desempeña el drama".² Para soldar estos dos pedazos –y superar las contradicciones que había hacia el interior de cada uno de ellos– se precisó casi medio siglo de guerras civiles. Suele considerarse la llegada del general Julio A. Roca a la presidencia de la Nación en 1880 –la llamada "Organización Nacional"– como el hito que da por finalizada la cruenta guerra civil. Es que a partir de este hecho se terminó de perfeccionar un acuerdo implícito entre los territorios que venían siguiendo historias paralelas.

En lo político, este acuerdo significó el reconocimiento de Buenos Aires como epicentro político del país. Como contrapartida, la Nación dejó de lado proyectos unitarios o de exterminio y pactó con las clases dominantes tradicionales del interior.

En lo económico, implicó el reconocimiento de Buenos Aires como principal centro consumidor y exportador de un mercado único nacional y, consecuentemente, el aislamiento de las regiones derrotadas de sus articulaciones históricas (el noroeste con el Alto Perú, el oeste con Chile, el este con Brasil y Paraguay). Como compensación, se acordaron políticas crediticias, de fomento de las vías de comunicación, de promoción productiva, que permitieron el surgimiento de las llamadas "economías regionales", cuyos ejemplos más emblemáticos fueron el azúcar tucumana y la vitivinicultura en Mendoza y San Juan.

Pero no todas las provincias de la periferia desarrollaron economías regionales y, de las que pudieron llevarlas adelante, no todas lo hicieron en condiciones similares. En cada jurisdicción la situación se dirimió en términos de la capacidad para reconvertir sus respectivas estructuras productivas y de las

alianzas políticas que en esa etapa crucial de la historia nacional pudieron realizar.

En este último aspecto, la situación de Santiago del Estero era muy delicada, ya que los Taboada lideraban la influencia de la corriente mitrista en el norte del país. En la medida en que el presidente Bartolomé Mitre al finalizar su mandato no pudo imponer un sucesor de su misma línea política y que sus partidarios llevaron adelante intentos revolucionarios contra los sucesivos presidentes, los Taboada y Santiago del Estero quedaron fuera de los círculos nacionales donde se definían las políticas regionales.

Ello tendrá consecuencias muy importantes en la manera en que se insertó la provincia en la división regional del trabajo que se estaba definiendo por aquellas épocas.

En los primeros pasos de este proceso Santiago del Estero apostó al desarrollo de la industria azucarera. De esta forma, hacia 1880 había una docena de ingenios funcionando en la provincia, dentro de los cuales se destacaba el Contrera, del industrial francés Pedro San Germes, del que, se decía, producía "la mejor azúcar del país". Articulada a estos establecimientos, se había desplegado una amplia zona de abastecimiento de caña en la tradicional zona de riego del Dulce (departamentos de Capital, Banda y Robles).

Pero esta industria creció con una debilidad congénita, un verdadero talón de Aquiles que la llevaría a su desaparición: la producción azucarera santiagueña competía con la tucumana en un mercado que rápidamente se saturaría y quedaría expuesto a cíclicas crisis de sobreproducción. Peor aún, la conexión ferroviaria –que era un punto crítico en el funcionamiento de esta industria– sólo llegaba a la "madre de ciudades" a través de una vía conectada perpendicularmente al trazado directo Córdoba-Tucumán. ¿Cómo había ocurrido esto?

Para entender esta historia debemos retrotraernos a 1869, cuando se comenzaron a hacer los estudios de un ferrocarril –el Central Norte, de propiedad estatal– que tenía por objetivo ligar a las provincias septentrionales con el resto del país. Una vez resuelto técnicamente el itinerario, se modificó el trayecto original hecho sobre la base del camino real de origen colonial, desviándolo por las salinas cordobesas y el límite entre las provincias de Santiago y Catamarca (Alén Lascano, 1996: 378).

2. Carta a Félix Frías del 14 de noviembre de 1852 (Alberdi, 1953: 264).

Santiago del Estero debió contentarse con una vía secundaria y sólo tuvo su conexión directa cuando la guerra del azúcar estuvo terminada.

No es difícil conjeturar que detrás de estos hechos estaba la enésima pelea del presidente Domingo Faustino Sarmiento con Mitre y los Taboada. Tampoco es complejo deducir el alivio que esta medida debe haber generado en los productores azucareros tucumanos, pues habían logrado colocar a sus competidores santiagueños en una situación de fragilidad estructural. De los primeros, además, es justo decir que tuvieron una notoria capacidad para articular alianzas políticas y económicas. Esto no sólo es notorio porque dos presidentes de la etapa fueron de origen tucumano (Avellaneda y Roca) sino también porque alrededor de su industria azucarera lograron que se articularan terratenientes tucumanos, capitales europeos, el ferrocarril inglés y sectores de la oligarquía porteña.

La caña tenía una primera elaboración en la provincia y luego el azúcar cruda atravesaba medio país en ferrocarriles británicos hasta llegar a Rosario, donde funcionaba una industria refinadora que concentraba casi toda la producción tucumana. Este ingenio era propiedad de la familia Tornquist, representante emblemática de la alianza de Europa con los intereses del puerto de Buenos Aires. La combinación de intereses era imbatible, tanto que el presidente Miguel Juárez Celman, que hacía del librecambio y la no intervención del Estado casi una religión, dio garantía estatal a su instalación (Balán, 1978).

En la enésima crisis de sobreproducción, las tarifas ferroviarias diferenciales que debían pagar los productores santiagueños hicieron que los ingenios de este origen fueran quebrando uno tras otro. San Germes, a quien popularmente se conocía como "el más grande industrial de la provincia", se suicidó arrojándose al trapiche de su propio establecimiento.

Pero no sólo fueron las circunstancias externas; en la provincia las opiniones estaban divididas en cuanto a la defensa de la producción azucarera. Es que muchos en Santiago apostaban a una nueva especialización productiva: proveer durmientes para el trazado ferroviario y para los postes que iban a alambra las grandes estancias de la pampa húmeda.

De esta forma, Santiago del Estero pasó a cumplir un rol

decisivo, y muchas veces olvidado, en la economía nacional. Esta inserción no fue gratuita; entre otras cosas, implicó la devastación de más de once millones de hectáreas de bosques.

La nueva especialización iba a producir grandes cambios. Uno de ellos fue la desarticulación de su equilibrio territorial: la mesopotamia santiagueña, enmarcada por los ríos Dulce y Salado, base territorial tradicional de la política y la economía provincial, ya no sería el escenario del principal factor de articulación con el sistema económico nacional.

En su lugar, una región totalmente ignorada del territorio provincial, el Chaco santiagueño, pasaría a ocupar el centro del escenario productivo, aunque no político. Esta situación descentrada ayudó a que se produjera la irresponsable venta de tierras públicas que albergaban extraordinarias reservas forestales: se trataba de territorios poco conocidos en los hoy departamentos Moreno, Ibarra, Copo, Taboada y Figueroa. Allí estaba el "bosque sin fin", donde reinaba majestuoso el quebracho colorado, el príncipe de las especies, cuya madera es inalterable a la acción del fuego y a la humedad.

En esta zona se produjo la mayor venta en bloque de tierras fiscales que se haya hecho en la Argentina: se transfirieron cuatro millones de hectáreas al precio de 0,23 centavos por hectárea, cuando el valor que pagaba el ferrocarril inglés por cada durmiente de quebracho era de 1,50 pesos. Tornquist es el símbolo de un gran latifundio forestal, dueño de más de 800 mil hectáreas donde trabajaban cinco mil haceros y donde, en un solo día de 1913, se cargaron al ferrocarril 400 mil durmientes de quebracho colorado (Dargoltz, 1991: 94).

Para posibilitar este emprendimiento surgieron nuevos trazados ferroviarios que llegaron al corazón del monte santiagueño, cuyas estaciones sirvieron como espacios donde se concentraba la abundante mano de obra que se necesitaba para esta actividad. Veremos cómo, con el correr del tiempo, estos centros se convertirán en ciudades.

Las promesas de buenos salarios y condiciones de vida digna, los "ríos de dinero" que iba a traer aparejada la explotación

3. Tornquist, otra vez el símbolo emblemático de la articulación de intereses locales, ferrocarril inglés y capitales europeos y porteños.

forestal, cautivaron a miles de familias que migraron desde el resto de la provincia y también desde regiones vecinas.

Siguiendo las promesas, las familias abandonaban "temporalmente" sus pertenencias y eran trasladadas a muchos kilómetros de su población de origen para incorporarse al obraje y a una continua trashumancia. El viejo obraje textil de la época colonial, instrumentado alrededor de la mano de obra servil de los indígenas, pasó a convertirse en el nuevo obraje forestal que se estableció sobre la base del trabajo semiesclavo de los hacheros y su grupo familiar.

En 1937, cuando ya había pasado el furor de la explotación del quebracho, el senador socialista Alfredo Palacios, acompañado por Bernardo Canal Feijóo, recorrió la campaña y los obrajes santiagueños y recogió datos estremecedores: "Familias de seis, ocho y hasta diez personas viven hacinadas en ranchos sin puertas ni ventanas, de tres o cuatro metros, contruidos con quinchas, palos y lonas; tienen piso de tierra y techo cubierto de ramas, se parecen a cuevas primitivas, verdaderos focos de promiscuidad, de infecciones y de abandono moral [...] apenas un 10 por ciento acude a la escuela; ante esta situación deplorable se levanta la perspectiva pavorosa: la del porvenir de innumerables pequeños argentinos tarados por las enfermedades que engendra la miseria y condenados a una existencia estéril, deleznable y dolorosa" (Palacios, 1944). Palacios recogió cuarenta y seis ejemplares de vinchucas en un solo enfermo santiagueño.

La paga era a destajo, casi siempre con vales que debían ser cambiados forzosamente en proveedurías de la empresa, hecho que generaba un creciente endeudamiento que hacía que el hachero nunca pudiera escaparse de la prisión del obraje. Un periodista de la época contaba con indudable elocuencia la situación: "Un contratista, cuyo nombre no hace al caso, firmó un pagaré por treinta pesos comprometiéndose, si no se cumplía con el pago, a entregar el peón de quien era la cuenta. En resumen, era la plata o al peón, si no se cumplía con el compromiso monetario, subsistía el pagaré por el peón" (González Trilla, 1918: 145).

Vista la situación, no es extraño que el director de Trabajo de la provincia, Amalio Olmos Castro, hablara de una "esclavitud blanca" comparable a la "esclavitud negra" de los trabaja-

dores de los algodones del sur de Estados Unidos (Olmos Castro, 1943: 35).

El dueño del obraje tenía un poder omnímodo sobre el hachero y su familia, sea en forma directa o a través de sus capataces o administradores. Si algo fallaba, la presencia del Estado a través de la policía –cuyos salarios eran pagados por las compañías forestales– cerraba el círculo de explotación.

Juan Bialet Massé, en su célebre informe El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo, exclamó ante la vista de los obrajes del Gran Chaco: "¡El obraje no es una industria como la agricultura, es una razzia!". Y no sólo las condiciones de trabajo eran extremas; los pueblos donde se embarcaban los productos forestales y adonde llegaban los hacheros luego de semanas y hasta meses perdidos en la selva estaban "dotados de noches capaces de dar cuenta de todas sus ganancias". En estos miserables caseríos la prostitución, el juego y las orgías terminaban definitivamente con su salud moral y física (Bialet Massé, 1985: 46 ss.).

Es que, además, en la lógica de las compañías no estaba la idea de construir poblaciones estables. Se talaba el bosque circundante a un sitio de reunión armado alrededor del obraje forestal y una estación de tren. Cuando se llegaba a un punto en el que la distancia que debían recorrer los hacheros hacia la producción antieconómica, el pueblo se establecía en el próximo sitio de reunión, arrastrando en su trashumancia al hachero y su familia. Este continuo peregrinar hacía imposible pensar en viviendas dignas e infraestructura social (agua corriente, luz eléctrica, escuelas, etc.), ya que los poblamientos eran vistos como centros ocasionales que una vez extinguido el bosque serían levantados para ser trasladados a otra zona de producción forestal.

Y, entonces, los boliches, fondas y prostíbulos o "solterías" se iban con la peonada. Y los largos convoyes cargados de cerveza en sustitución del agua que, como nos cuenta Orestes Di Lullo, solía ser más cara, desviaban sus rumbos siguiendo al obraje.⁴

4. Di Lullo (1937) comenta que en los obrajes se pagaba un impuesto a la batea para los que desearan lavar sus ropas.

Sólo cuando el bosque de una región estaba totalmente arrasado la compañía loteaba el pueblo y permitía la instalación de quienes ya no podían seguir trabajando. Esta es la historia de Alhuampa, Roversi, Tintina, Girardet y todos los pueblos forestales del Chaco santiaguense. Es la historia de Quimilí, antes llamado Tomquinst, principal accionario de la Compañía Forestal Quebrachales y viejo conocido de este relato.

Un perfil diferente para la actividad forestal

No todo fue igual en la producción forestal santiaguense. Hubo dos interesantísimos experimentos de integración vertical que permitieron dibujar un perfil ostensiblemente distinto en términos de la situación social y económica.

Se trató del establecimiento de fábricas de tanino por parte de la firma Weisburd y Cia., en el departamento Mariano Moreno, y de la Compañía Taninera Sociedad Anónima (COTAN) de Monte Quemado, en el departamento Copo. Ambas fábricas fueron fundadas en la década del 40 y sobrevivieron durante más de veinte años como islas de austeridad pero notoria dignidad social en el marco del mar de miseria en que la actividad forestal sumergía a la provincia.

Ambas fábricas dieron vida a los pueblos de Weisburd y Monte Quemado, los que se caracterizaron –sobre todo el primero– por permitir que los trabajadores pudieran acceder a viviendas de material, agua corriente, luz eléctrica, hospitales, salarios dignos y lugares de esparcimiento (clubes deportivos, cine, etcétera).

Weisburd era un enorme latifundio, un enclave que dependía de la célebre Forestal que operaba en el norte de Santa Fe, pero que tenía características totalmente distintas de las que se observaban en la provincia vecina. Fue el primer pueblo forestal estable donde no reinaban las fondas y la “soltería”. Se caracterizaba, además, por tener comercios de particulares, con precios libres y con plena competencia con la proveeduría de la compañía. Y no se conocían los vales o monedas o fichas tan usuales en los obrajes.

También la salud y la educación del trabajador y su familia eran prioritarias para don Israel Weisburd, quien a pesar de ser un judío practicante mandó construir una iglesia católica porque no quería un pueblo sin fe. “Si no hay fe se dedica al vicio...”, acostumbraba decir (Dargoltz, 1983: 56).

Los trabajadores de la empresa contaron con una total libertad para afiliarse a los nuevos sindicatos forestales que comenzaban a nacer. En 1953 Israel Weisburd facilitó a sus obreros los camiones de la empresa para trasladarse a la ciudad capital para participar en el desfile en homenaje al general Perón, cuando éste visitó Santiago del Estero en ocasión de los cuatrocientos años de su fundación.

La acción de la Facultad de Ciencias Forestales en 1958 y, a partir de ella, la creación de los distritos forestales⁵ unos años después podrían haberse articulado con estos enclaves industriales en la búsqueda de terminar con el drama del obraje, de la depredación irracional del medio ambiente y de la explotación del hombre.

Veremos cuál fue la suerte de este último intento de dotar de un sentido más noble a la explotación de los bosques provinciales. Pero antes haremos un sucinto análisis de lo que significó el advenimiento del peronismo a la provincia.

5. En Weisburd estaba instalado un hospital al que llegaban para su atención médica enfermos de todos los lugares vecinos. En 1943 en los departamentos Atamisqui, Figueroa, Guasayán, Mitre, Pellegrini y Río Hondo (con excepción de Las Termas), con una extensión de 40 mil kilómetros cuadrados, no había un solo médico y en varios de ellos ninguna farmacia.

6. Los distritos forestales fueron polos de desarrollo creados por el gobierno provincial alrededor de la industrialización de la madera con métodos conservacionistas. Bajo su lógica, se levantaron modernos establecimientos fabriles en Los Tigres, Los Pirpintos y El Caburé, que produjeron parquet, paneles de madera, muebles y diferentes cerramientos y carpinterías.

La llegada del peronismo al poder

El peronismo en las provincias pobres

La larga y cambiante saga del peronismo involucra muchos de los procesos políticos más sobresalientes de la segunda mitad del siglo xx. Estos procesos, que vagamente son agrupados bajo el nombre de “nacional-populismo”, tuvieron un significado muy distinto en las provincias de la periferia, como Santiago del Estero, que el que tuvieron en las áreas centrales.

En este sentido, no es ocioso recordar que radicales y peronistas –y en especial estos últimos– adecuaron sus respectivas secciones provinciales a las características de cada sociedad regional. En términos generales puede decirse que el peronismo de las zonas más avanzadas del país, emblemáticamente el del Gran Buenos Aires, tuvo en sus orígenes una composición principalmente obrera, asimilable a la de un partido laborista de cualquier sociedad industrial. Mientras tanto, el Partido Justicialista de las áreas rezagadas mostró perfiles de clase menos homogéneos, con importante peso de lo rural, más parecido a la típica conformación de los partidos populistas de las sociedades poco industrializadas.

Muchos de los principales dirigentes justicialistas de la periferia venían del viejo conservadurismo y, consecuentemente, en la medida en que fueron accediendo al poder, no generaron la ruptura que en ese momento se estaba produciendo en las grandes aglomeraciones urbanas de la pampa húmeda.

Mientras que el ala laborista movilizó y organizó a los obreros en pos de conquistas sociales, el ala conservadora promo-

vió una estructura que se aprovechaba de la escasez de bienes básicos, de la rigidez del mercado de trabajo, de la falta de tierras, de las migraciones y el éxodo rural. La incapacidad de garantizar para todos derechos y bienes teóricamente universales y gratuitos —la gran tarea que se propuso el justicialismo en las zonas más avanzadas— volvía relevante la intermediación política en la distribución de bienes públicos y generaba las posibilidades del patronazgo.

La conformación del peronismo en lo que se conoce como la periferia argentina tuvo una doble vía. Por un lado, el interés de Perón de construir una base electoral propia en estas provincias, por lo que debió adaptarse a las condiciones que en ellas imperaban. Simétricamente, las clases dominantes de las sociedades periféricas se incorporaron al Partido Justicialista priorizando los valores de orden que este movimiento encarnaba y tras la idea de influir en un proceso político que podría desmadrarse y atentar contra su preeminencia regional.

No debe perderse de vista que aunque en cada espacio provincial regional funciona un complejo sistema sociopolítico con sus correspondientes tensiones, intrigas, acuerdos y alianzas, sus clases dirigentes —como ocurre en todas las sociedades— tienden a unirse cuando alguna amenaza externa hace peligrar su poder.

Este doble perfil del justicialismo generó tensiones entre las políticas que se promueven desde los representantes territoriales de las diferentes regiones que conforman el país, hecho al que no siempre se le ha dado la justa atención para comprender el funcionamiento de los diferentes gobiernos justicialistas o de su posicionamiento frente a ciertos temas o coyunturas.

Más allá de esto, lo que interesa destacar aquí es la pertenencia de Santiago del Estero al modelo de peronismo periférico, lo que era obvio de esperar si se observan los datos provinciales referidos a los niveles de ingreso, el porcentaje de población urbana o los índices de desarrollo industrial.

En particular, en Santiago del Estero tuvieron mucho peso las características de un proletariado rural conformado en su mayor parte por hacheros del obraje. Como vimos, estos trabajadores estaban expuestos a un alto grado de aislamiento y eran sometidos por empresarios y terratenientes a una situación de semiesclavitud. Incluso, procesos modernizadores que

tuvieron relativa importancia en el resto de la periferia, por ejemplo la creciente urbanización o la presencia de algunas industrias que por efecto “derrame” de la dinámica industrial del centro llegaban al interior, tuvieron un recorrido menos extendido en esta provincia. Mientras que otros mecanismos de consecuencias demoledoras sobre la sociedad, como las migraciones hacia la pampa húmeda, alcanzaron dimensiones extraordinarias.

Del análisis de esta configuración social surge con claridad la inexistencia de un sujeto social que protagonizara una avanzada laborista.

No se quiere dar una imagen de inmovilismo absoluto; no ocurrió tal cosa en ningún lugar del país. Tampoco sostenemos que el peronismo tuvo un efecto neutro en la realidad santiagueña. Aun en el marco de un gobierno tan emblemáticamente “conservador-popular” como, según veremos, fue el de Juárez, se observaron mejores condiciones para los trabajadores, una importante inversión en obra pública y la llegada de la asistencia social a los lugares más recónditos de la provincia.

También el peronismo fue el catalizador para que se conformaran los primeros sindicatos forestales. El primero de ellos se organizó en Suncho Corral en 1945. A este primer experimento le siguieron los de Garza, Sumampa, Loreto y Lavalle y, en 1946, la ola de sindicalización llega a Monte Quemado, Campo Gallo y Los Pirpintos.

De la unión de estos sindicatos nació la Federación de Obreros Santiagueños de la Industria Forestal (FOSIF), el 5 de octubre de 1947, y al año siguiente se firmó el primer convenio colectivo de trabajo, que por lo menos en teoría significó un gran avance para los hacheros santiagueños. Decimos “en teoría” porque los obrajes funcionaban en grandes latifundios, enclaves apartados de la civilización y de las leyes, y siguió siendo imposible escapar del régimen feudal de las proveedurías, de la persecución del juez de paz y del comisario al servicio de las compañías.

1. Durante buena parte del siglo xx vivían más santiagueños en el resto de la Argentina que en la propia provincia.

De ahí que no registramos huelgas o levantamientos populares de importancia en los sectores rurales. Pero sí rastreamos algunos signos de que algo estaba cambiando, por ejemplo, el gran desfile de la FOSIF que se realizó en julio de 1953 con motivo del cuarto centenario de la fundación de Santiago del Estero y en el que estuvo presente el general Perón. Citamos largamente la conmovedora descripción realizada por Luis Alén Lascano:

Perón presidía los actos oficiales conmemorativos. Un gran desfile militar por la avenida Hipólito Yrigoyen [...] llegaba a su término, cuando irrumpieron en columnas interminables con sus modestas alpargatas, sus rostros barbudos y renegridos, sus gritos al aire como en un desafío, los obreros forestales convocados a la celebración por la FOSIF. Su presencia en la ciudad era insólita y amedrentadora, aunque hubieran sido traídos disciplinadamente y por los medios oficiales acostumbrados: trenes, camiones, colectivos, puestos a su servicio. Muchos conocían la ciudad por vez primera. Ninguno había llegado antes de sus abras rurales con tanta plata en los bolsillos, ni había circulado por las pulcras aceras de la capital engalanada, respetado como un hombre libre, digno. Parecía mentira ver aquel conglomerado tumultuoso e informe por la marcha sobre la avenida. Verlos ahí cerca en su brutal realidad social, en el ulular de sus voces, en su paso campesino y torpe, era como un golpe del ramaje en pleno rostro, como la gruesa rama caída sobre las espaldas que asusta y sorprende a la vez. Y sin embargo allí estaban. Marchaban... marchaban... y al llegar frente al palco, al pasar frente a aquel Perón, su dios, su mito hecho realidad a pocos metros, brotaban un grito ronco y fuerte a manera de saludo mientras levantaban las hachas a manera de demostración. ¡Ahora sí, cantaban las hachas! Quince mil hombres desfilaban salidos de la montaña misma de la tierra. Un jirón de la raza morena salidos con perfiles aindiados, y las manos callosas, hacía un alto de esa manera a sus rudos trabajos para invadir la ciudad; poseerla, sentirse dueños de ella aunque fuese por unas horas. Algunos sallan de las filas y se acercaban ante Perón para dejarle, casi de rodillas, el modesto regalo traído de la selva. Una chuchería hecha de la corte-

za del árbol, cualquiera de esas cosas simples que representaban su mundo primario y que querían ofrendar al líder de sus amores. Otro insistía en dejarle un cachorro de puma, cazado con su habilidad, porque así expresaba mejor la fuerza del símbolo en la mitología de su devoción al caudillo fuerte como esa bestia. (Alén Lascano, 1996)

Estos rudos hacheros habían conocido a Perón a través de sus mensajes radiofónicos, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. “Por supuesto que lo votamos a Perón y el no nos defraudó...”, nos diría Zenobio Campos, quien fuera uno de los fundadores del sindicato de Tintina. Ellos no tuvieron su 17 de octubre pero allí habían estado sus hijos y sus nietos, convertidos en los “cabecitas negras” que, al migrar e incorporarse a la civilización industrial, fueron la savia que gestó una nueva etapa del destino argentino.

La carambola que entronizó a Carlos Juárez ²

Como en otras provincias, el carácter aluvional de la génesis peronista en Santiago del Estero provocó una serie de reacomodamientos luego del triunfo electoral de 1946. Es así como el gobierno de Aristóbulo Mittelbach es intervenido en 1948 por Roman Subiza que, a su vez, luego de unos meses es desplazado por Almerindo Di Bernardo.

Dentro de este panorama, donde no lograba hacer pie un liderazgo dentro del peronismo santiagueño, comenzó a abrirse paso la figura de Orestes Di Lullo, quien todavía hoy es reconocido como uno de los intelectuales más potentes de la provincia. Pronto una comedia de enredos terminaría con la incipiente candidatura de Di Lullo a gobernador y con su presencia liderazgo.

Como decíamos, en los primeros años de su presidencia, el general Perón se abocó a ordenar y verticalizar alrededor de

2. Este apartado toma elementos de Carreras (2004), Tasso (2003) y Alén Lascano (1996).

su figura los diferentes segmentos que le habían permitido obtener la sorprendente victoria electoral en los comicios presidenciales de febrero de 1946. En el caso que nos ocupa, los desencuentros entre el general Perón y Orestes Di Lullo ocurrieron alrededor de la candidatura a diputado nacional de Carlos Juárez, un joven militante que venía de la Acción Católica y que hasta hacía poco se había hecho notar por su enconado antiperonismo.

Di Lullo se opuso terminantemente a tal candidatura; tal vez haya sobreactuado, pero es muy probable que considerara que lo mejor era hacer algún gesto de autoridad, sobre todo para marcar algunos límites a la injerencia que venía desde Buenos Aires. Fue una mala jugada; Perón no podía aceptar —en esta etapa de ordenamiento— devaneos autonomistas y, previsiblemente, fuerza la renuncia de Di Lullo. Como señal de autoridad, lo reemplaza por quien sería durante cincuenta años el principal protagonista de la historia santiagueña.

Carlos Juárez tenía una arrogante oratoria y una gran labiosidad juvenil que pronto lo hicieron el preferido de Eva Perón. Según relata Alén Lascano, fue esta relación directa, que Juárez se encargaba de recordar permanentemente, la que le permitió conseguir generosas partidas para obras públicas y asistencia social con las cuales consolidó su liderazgo.

Con estos elementos comenzó a gestarse el poder omnímodo de uno de los caudillos más permanentes de cuantos ha dado el país. Juárez fue seis veces electo gobernador, superando en ese récord histórico al propio Juan F. Ibarra. El "elegido" Carlos Juárez sobrevivió a todas las desgracias, maleficios y traiciones. Fue derrocado de su segundo mandato por la dictadura militar de 1976 para volver a ser gobernador en 1983. Al fin de ese mandato fue traicionado por su elegido César Iturre, quien intentó independizarse. Y pudo volver a ser gobernador, todavía, tres veces más.

¿Qué fue el juarismo?

Tanto tiempo en el poder, tantas veces resurgido a pesar de haber sido dado por muerto... ¿Cuáles fueron las razones de tan prolongada y profunda vigencia? ¿En qué elementos se basaba

para volver siempre al gobierno? ¿Qué alianza de intereses y actores lo hacían imbatible?

El modelo juarista, del que pueden encontrarse ejemplos similares en otras provincias periféricas, se caracterizó por utilizar al Estado provincial para organizar una alianza entre los sectores más pobres y los más ricos de la sociedad. No es una configuración política atípica: los llamados gobiernos conservadores populares justamente se caracterizan por esta articulación entre la cúspide y la base de la pirámide social.

Lo más relevante de la base electoral juarista provenía de los sectores empobrecidos del interior provincial y de los pobladores de los barrios periféricos del conglomerado Santiago-La Banda, la mayoría migrantes rurales desocupados o subocupados. A estos sectores se llegaba a través de una red clientelar que, gestionada por un tropel de punteros políticos, se extendía hasta el infinito. Todos los carriles de acceso a la administración pública estaban permeados por esta red; quien no tenía un contacto o una forma de llegar "recomendado" al Estado no tenía posibilidades de acceder a alimentación, vivienda, salud, en fin, a ninguna de las actividades que realizaba el sector público.

La inserción del juarismo en segmentos pobres no marginales y en las clases medias se realizaba principalmente a partir de la gestión de las plantas de personal del Estado provincial. Al ser exigua la oferta de puestos de trabajo que realizan los emprendimientos privados, el peso del empleo público dentro del mercado laboral cobra dimensiones descomunales.³ Debe resaltarse que estos empleos tuvieron (y tienen) una brecha cada vez mayor con los del sector privado, donde rigen reglas "salvajes" de precarización y sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Mientras tanto, en el sector público, mal que mal, se respetan las condiciones laborales fijadas por la ley y, en los segmentos menos calificados, se pagan salarios ostensiblemente superiores a los de mercado. Puede decirse que para

3. El empleo público concentra más del 36,5 por ciento de la población económicamente activa, guarismo que da una idea del impacto de este tipo de trabajo en la provincia, casi 40 por ciento superior al valor que este mismo registro tiene en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que Santiago del Estero posee una tasa de actividad menor (datos del censo nacional de 2001).

buena parte de la población conseguir un empleo público es la única vía para acceder (o mantenerse) dentro de lo que es, para los patrones culturales y de consumo provincial, un estándar de clase media.

Alcanzar esta verdadera tabla de salvación personal y familiar es decisión discrecional del funcionario político de turno ya que desde hace décadas no hay concursos ni selección en el ingreso a la administración provincial. En casi todos los casos, el puesto de trabajo se recibe como premio a la militancia con el dirigente adecuado quien, dentro de las prerrogativas del cargo, tiene un cupo de empleados que puede contratar para retribuir la mano de obra que utiliza en su vida política.

Esta capacidad de sumar a la casi totalidad de los sectores más empobrecidos a los que, por el sistema descripto, articulaba con un sector de clase media, hacía del juarismo una fuerza imbatible siempre y cuando tuviera las riendas de la administración provincial. Cuando no fue el principal favorecido por el Estado, Juárez fue reiteradamente derrotado en las urnas, incluso en las propias internas del Partido Justicialista.

Pero, como vimos, el juarismo no sólo tenía como base de sustentación a los estratos bajos y medios, sino que una parte muy relevante de esta fuerza política estaba compuesta por las clases dominantes provinciales. Con ella conformó un polo de poder que mezclaba los intereses comerciales con el poder político a partir de un manejo amañado de los contratos del Estado y las licitaciones públicas. Como en el resto del país, en Santiago estos mecanismos tuvieron dos etapas bien diferenciadas; la primera de ellas, que dura hasta principios de los 90, está ligada a la obra pública. De ahí en más, los servicios ocupan el centro de la escena. La eficacia de este polo de acumulación es tal que es posible comprobar que las grandes fortunas santiagueñas del presente han nacido al amparo del Estado (Zurita, 1994).

El régimen juarista fue particularmente estable en virtud de articular por un lado a los sectores bajos y medios, que le daban una amplia preeminencia electoral, y por otro a las clases dominantes, que garantizaban la estabilidad de la política cotidiana.

Esta alianza era posible porque ninguno de los participantes pagaba la cuenta: casi todo el accionar de la administra-

ción provincial, que como vimos era la piedra angular del pacto de gobernabilidad, provenía de fondos nacionales. Esto es, no había presiones de ningún actor provincial en el sentido de establecer hacia qué fines se dirigían los recursos que aportaba con su propio esfuerzo.

Al ser financiada con partidas financieras provenientes del gobierno nacional, no por los productores ni los consumidores locales, los recursos eran presentados como patrimonio de la gestión del caudillo que las negoció en Buenos Aires y que, por lo tanto, tenía el "derecho" de manejarlas a su antojo.

Si bien eficaz para mantenerse en el gobierno, la doble red de esta estructura política –clientelar hacia las bases populares y mafiosa hacia los contratistas del Estado– constituye el sistema más regresivo de cuantos se desplegaron en la provincia en los últimos cincuenta años.

En primer término, porque el lugar de "botín" que ocupa el Estado generó una administración superpoblada, onerosa, de gran peso en la economía provincial pero, asimismo, de una ineficiencia ridícula y con una incapacidad asombrosa para enfrentar mínimos problemas operativos.

En segundo término, al favorecer la fragmentación del poder entre clientelas en competencia, se constituyó una forma conservadora de organización del proceso político. No se pensaba en alternativas productivas o en políticas de desarrollo: la única discusión relevante giraba alrededor de cómo repartir los ingresos fiscales.

Por último, pero no menos importante, al colocar en el centro de la vida política y económica los circuitos basados en el amiguismo, desalentó las conductas productivas, debilitando la ya endeble economía provincial. Es que para el éxito de los negocios en Santiago del Estero fue más importante alcanzar el contacto clave que ser un empresario hábil o incorporar la tecnología más adecuada.

En resumen, no es una casualidad ni una maldición bíblica que Santiago del Estero sea una de las provincias de menor desarrollo económico y presente los mayores índices nacionales de pobreza y marginalidad social. Resulta la consecuencia lógica de una construcción que es muy eficaz para mantener el poder político pero incapaz de garantizar un nivel de vida decoroso para sus habitantes.

Entre la inestabilidad y los usurpadores militares

Si bien es imprescindible pensar en Carlos Juárez y el sistema juarista a la hora de analizar el período que se despliega entre la caída del primer gobierno peronista y el fin de la última dictadura militar (1955-1983), hubo momentos en que, tímidamente, buscaron desarrollarse proyectos políticos alternativos.

Muchos de estos proyectos crecieron en importancia en la medida en que la primera etapa de la sustitución de importaciones entró en crisis y comenzaron a desplegarse políticas desarrollistas, que en la periferia implicaron la ejecución de grandes obras de infraestructura y la implementación de planes de desarrollo regional articulados con la inversión externa.

Si bien la experiencia histórica mostró las limitaciones de este tipo de políticas, desde lo económico tuvo una matriz menos perversa que la construida alrededor del régimen juarista. En este sentido, es paradójico que, muchas veces, las políticas desarrollistas más audaces fueran asumidas por varios de los gobiernos de facto que los militares impusieron en Santiago del Estero. Por supuesto, esto no justifica ni perdona que en estos regímenes militares hubiera, en diferente grado, persecución de los opositores, violaciones a los derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión.

Dicho esquemáticamente, durante este ciclo, tanto en la provincia como en el país se produce la proscripción del peronismo, persecuciones políticas, cesantías en cargos públicos y cercenamiento de las libertades públicas. Pero también en esta etapa se crea en Santiago del Estero la carrera de Ciencias Forestales, la primera del país y una de las primeras en América Latina, así como también se inicia un proyecto estratégico para la provincia: la monumental represa de Río Hondo.

La orientación desarrollista se profundiza con el gobierno de Benjamin Zavalía (1963-1966), que significó el retorno del radicalismo al poder en Santiago del Estero después de treinta y tres años. «El gobierno de Zavalía dictó la ley 3.363 de la

Corporación del Río Dulce, primer planificador económico y ente empresarial del Estado provincial dedicado a llevar a cabo uno de los más importantes proyectos de desarrollo de América Latina.

También durante este gobierno se creó el Instituto Forestal de Administración e Industrialización (IFIA), surgido de la Facultad de Ciencias Forestales y llamado a preservar lo que había sobrevivido del bosque santiagueño. Las gestiones de este gobernador permitieron que las obras de Río Hondo tuvieran un fuerte impulso y que fueron inauguradas durante la dictadura militar de la Revolución Argentina en julio de 1967.

Finalmente, en 1973 se produce la primera elección en la cual el peronismo puede participar luego de dieciocho años. En Santiago del Estero ocurre otro episodio de la leyenda juarista: el triunfo del caudillo, aun enfrentando las órdenes del propio Perón.

La cosa ocurrió así: desde el exilio Perón había designado como su candidato a Francisco López Bustos, pero Juárez desconoció esta orden del líder y se presentó por "fuera" de la estructura nacional. Eso sí, recibió una ayuda fundamental del Juzgado Federal de la provincia, hasta el día de hoy sumiso a sus órdenes: la exclusividad en el uso del nombre Frejuli y de los símbolos del peronismo. Juárez hizo campaña leyendo supuestos telegramas firmados por Juan Domingo Perón que incitaban a votarlo, confundiendo a un electorado que, en buena parte, no accedía a los medios masivos de comunicación.

Pero no sólo esto; todo el aparato del Estado provincial jugó a su favor, dado que había hecho un acuerdo con el gobernador de la dictadura, el democristiano Carlos Jensen Viano. Juárez logra el triunfo en la segunda vuelta sobre el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de López Bustos, candidato de Perón y Cámpora.

Durante el período de gobierno, Carlos Juárez apenas tuvo tiempo para mostrar su pragmatismo, acercándose primero a Montoneros cuando éstos aparecían como la fuerza dominante en la interna peronista y luego pasando sin escalas a ser un defensor acérrimo de la derecha justicialista. Su mandato es interrumpido por el golpe militar de 1976 que lo lleva a un largo exilio. Su segunda esposa, Mercedes Marina Aragonés,

4. Aunque este triunfo radical se produjo en una elección con 52 mil votos en blanco, debido a la proscripción del peronismo.

"Nina", no tuvo la misma suerte: estuvo dos años detenida en una prisión provincial.⁵

Toma la Casa de Ibarra el coronel Daniel Correa Aldana, jefe de la guarnición militar local, para, pocos días después, entregar el usurpado gobierno provincial al general de brigada César Fermín Ochoa, santiagueño oriundo de Atamisqui.

En Santiago del Estero, como en el resto del país, ocurrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de las personas. Hubo decenas de desaparecidos y asesinados, y hasta la actualidad no se realizó un registro completo de las víctimas de la represión,⁶ así como tampoco de las apropiaciones ilegítimas de bienes. El gobernador militar César Ochoa fue, sin ninguna duda, partícipe y cómplice de estos hechos.

Sin embargo, también debe reconocerse que su gobierno tuvo una política de desarrollo económico, bajo un modelo que tiene puntos de contacto con la dictadura brasileña cuya cruzada contra el populismo y el comunismo involucraba también un capitulo en lo productivo.

Por ejemplo, Ochoa impulsó los distritos forestales, luego convertidos en cooperativas. Estas organizaciones, cuya base de sustentación era la producción de cerramientos de madera para la construcción, tenían todas las condiciones para trascender el mercado local y nacional, utilizando industrialmente los bosques santiagueños. Se buscaba con estos intentos debilitar a las empresas contratistas provinciales, principales beneficiarias de los planes de vivienda y de la obra pública en la provincia, aliados permanentes del anciano caudillo. De igual forma los canales de Dios y del Alto y sus derivaciones fueron construidos por ejecución directa del Estado provincial, sin beneficiar a las empresas de obras públicas que, como dijimos, eran uno de los pilares del sistema juarista.

Asimismo Ochoa, nacido en el interior santiagueño, deseaba con esta política paliar las condiciones de extrema penuria que vivían los obreros rurales a los que veía como potencial-

5. Hay quienes dicen que este "abandono" de Juárez marcó a fuego su relación futura; ella nunca perdonaría la huida de su marido.

6. Dandán et al. (2004: 204) hablan de ciento tres víctimas entre asesinados y desaparecidos dentro de los límites de la provincia.

mente proclives a incorporarse a la insurrección armada. No debe olvidarse el origen santiagueño de Roberto "Robi" Santucho, líder máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y sus teorizaciones acerca del potencial revolucionario de los sectores rurales de la periferia.⁷

Cuando ya la dictadura entraba en su ocaso, nuevamente Carlos Jensen Viano es designado gobernador de facto. Como había ocurrido una década atrás, el sepulturero de la dictadura preparó todo para que con el regreso del caudillo nada cambiara.

Más aún, en la apertura política del último tramo del "proceso" se tomaron medidas de típico corte juarista, quitando el apoyo del Estado provincial a las cooperativas forestales y redireccionándolo hacia las empresas contratistas que, como vimos, eran sus aliados. De igual forma fue abandonado el proyecto del río Dulce, iniciado por Zavallía y continuado por Ochoa, que posibilitaría la canalización, colonización agraria y transformación de una gran área agrícola de la provincia.

Pero esto era sólo el inicio. Juárez retornaría para llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto económico y político.

7. Véase Mario Roberto Santucho, "Cuatro tesis sobre el norte argentino" (en FRIP, 1964). Sobre el papel del proletariado rural de la periferia para el ERP-PR, véase también el documento del IV Congreso del PRT (PRT, 1968: 51 ss.).

Hacia el estallido:
recuperación democrática, Santiagueño
y primera intervención federal

El retorno de la democracia en Santiago

Diez de diciembre de 1983: veinticinco años después de su primer gobierno y siete luego del golpe que lo mandó al exilio, vuelve al gobierno Carlos Juárez. Santiago del Estero se convierte así en una de las catorce provincias donde triunfa el justicialismo a pesar del aluvión alfonsinista.

El perfil de los cuatro años de gobierno de Carlos Juárez –como el del resto de las administraciones de la periferia– estuvo signado por las crecientes partidas financieras que bajaban desde un gobierno nacional siempre jaqueado por el fantasma de la gobernabilidad. Estos recursos no se dirigieron a paliar las devastadoras consecuencias que en la provincia tuvo el patrón económico inaugurado en 1976 sino que se aplicaron a organizar un aparato electoral imbatible detrás del caudillo.

Por supuesto que volcar tal cantidad de dinero tuvo su impacto, pues la contratación de personal y la realización de obra pública permitieron garantizar un cierto nivel de actividad y empleo en la economía provincial. Pero tales recursos, aplicados bajo el criterio de recomponer la doble red clientelar y de empresas contratistas, no cambiaron la situación de la base productiva que, por el contrario, se fue haciendo cada vez más dependiente de las transferencias nacionales.

La Nación jugó un papel fundamental y nada inocente en este esquema: a cambio de las partidas financieras obtuvo el alineamiento provincial en el Parlamento nacional y una reducción del nivel de enfrentamiento interpartidario. Tanto Santiago del Estero como el resto de las provincias periféricas

dieron apoyo a un gobierno que precisaba aliados para fortalecerse, cumpliendo una regla no escrita pero siempre verificable: por encima del partido político de pertenencia y más allá de las declamaciones federalistas, el Poder Ejecutivo Nacional cuenta siempre con el apoyo de las provincias pobres.

Razones de espacio nos impiden agregar datos sobre este segundo retorno de Juárez que, de todas formas, tiene siempre su impronta característica: centralización del poder en su figura, manejo clientelar hasta de la última partida gubernamental, alianza estratégica con empresas constructoras en general y con las de Victorio Curi; en particular. Si hubiera que destacar un hecho en especial, fue la persecución y condena a la definitiva decadencia de las cooperativas forestales.

En 1987, y siguiendo una constante en la política santiagueña y en la argentina, Carlos Juárez garantiza la elección de gobernador para su hombre de confianza y ministro de Gobierno, el ingeniero César Iturre. Se reserva para sí un lugar en esa suerte de casa de retiro dorada de ex gobernadores que es el Senado de la Nación, desde donde pensaba seguir manejando los hilos de la provincia.¹

César Iturre era un gris dirigente, quien como todo "juarista" rendía devoción y obsecuencia al veterano caudillo y a su esposa Nina. En su mensaje de asunción comparó la grandeza de Juárez con la de Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra: "Un ejemplo de ello es la figura del doctor Carlos Arturo Juárez, estadista, orgullo de nuestro movimiento, que asumió en sus tres gestiones de gobierno, con gran responsabilidad, las necesidades humanas del pueblo y que se plasmaron en obras de justicia social aún hoy, en medio del drama económico social. Continuaremos su obra de gobierno...".

1. El empresario Victorio Curi fue el principal aliado económico de Juárez, alianza que se hizo más estrecha luego de que el primero fuera la única fuente de ingresos del caudillo en el exilio español. Con el retorno de la democracia apareció como el hombre fuerte de las finanzas del gobierno, pero luego sería desplazado de tal lugar por el grupo Ick. En el capítulo 5 tratamos con detalle estos temas.

2. Debe recordarse que no había ocurrido la reforma constitucional de 1994 y que los senadores santiagueños, como era también el caso de muchas otras provincias, eran elegidos por la Legislatura provincial.

Poco tiempo iba a durarle a César Iturre su adhesión incondicional. Traiciona a Juárez dándole la clásica "patada" histórica, seguido por una legión de dirigentes "juaristas" que abjuran del autoritarismo de los Juárez y se vuelven fanáticos iturristas, entusiasmados por el "nuevo estilo". Además, la mayoría de ellos proclamaba a los cuatro vientos la muerte política del veterano caudillo ahora que habían logrado alejarlo de las arcas públicas.

El nuevo gobernador conquistó el apoyo de sectores peronistas e independientes por el trato afable, su permanente sonrisa y tranquilidad provinciana, su prédica contra el autoritarismo y el llamado a la unidad provincial; todos estos atributos fueron reunidos en un nuevo estilo al que él llamó "la santiagueñidad". Las cuentas cerraban y con orgullo el "Chavo", como se lo llamaba, proclamaba, siguiendo las enseñanzas de su maestro, que Santiago del Estero era la provincia mejor administrada, alabada por los ministros de Economía de los gobiernos de Alfonsín y de Menem.

El "nuevo estilo" se diferenciaba del viejo solamente en la forma menos autoritaria, pero indudablemente Iturre pertenecía a la escuela de su maestro. El núcleo de la acción de gobierno estaba dado por el clientelismo, las prebendas, la compra de dirigentes y de conciencias. A su vez, todas las obras públicas tenían una amplia cobertura publicitaria, aunque fuera la apertura de un simple grifo público en una barriada humillada por la pobreza. Santiago del Estero era reiteradamente nombrada como una "provincia única en el país", y efectivamente era única, pero no por lo que decía el gobernador sino por las tasas de analfabetismo, la desnutrición infantil, el mal de Chagas, el saqueo de los bosques.

La "santiagueñidad" iba a atraer a José Zavallía, hijo del ex gobernador Benjamín Zavallía, joven intendente radical de la Municipalidad de la capital y candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical. El gobernador firmaría con el "jinete del zaino"³ y otros dirigentes provinciales un acuerdo de "unidad

3. Bautizado así por las marchas que protagonizó montado a caballo y seguido por una enorme multitud denunciando el fraude electoral en las elecciones a gobernador de 1991.

provincial” en mayo de 1991 para procurar derrotar la aceitada maquinaria juarista que conservaba la conducción del Partido Justicialista.

Las relaciones entre Iturre y Zavalía eran muy cordiales, especialmente porque el gobernador no discriminaba a las intenciones radicales, contrariamente a la política sostenida por el juarismo que las ahogaba económicamente demorándoles o cortándoles las transferencias que les correspondían. Uno de los principales operadores de este pacto de unidad y de la posterior Ley de Lemas fue el joven Gerardo Zamora, en ese entonces presidente de la Juventud Radical.

Zavalía e Iturre acuerdan sumar los votos de sus diputados adictos y aumentar el número del Superior Tribunal de Justicia de siete a nueve integrantes, para tener una Justicia sumisa, tal como la que había actuado hasta entonces al servicio del juarismo. Uno de los más entusiastas propulsores de este pacto fue el diputado radical Héctor “Chabay” Ruiz.

Pero la “unidad provincial” que iba a terminar con cuarenta años de desencuentros no pudo plasmarse electoralmente, puesto que ninguno de los dos máximos referentes quiso “bajarse del caballo” de la gobernación.

La Ley de Lemas fue aprobada por el voto mayoritario de los diputados iturristas y juaristas unidos gracias a la gestión del entonces ministro del Interior José Luis Manzano, que mientras era tapa de revistas por sus operaciones de glúteos, se puso a la tarea de mantener la provincia bajo gobierno justicialista. La Ley de Lemas fue un verdadero boomerang en contra de Zavalía al juntar los votos disgregados del justicialismo y, en la sumatoria, negarle una gobernación que el creía tener segura.

“Una obra por día”, rezaba la propaganda electoral de Juárez para apoyar a su delfín Iturre en las elecciones a gobernador de la provincia en 1987. “Para continuar el nuevo estilo”, fue el eslogan utilizado por el “Chavo” para levantar la fórmula Mujica-Lobo, que triunfaría en las elecciones de 1991.

Carlos Mujica, “el hombre de Mailín”

Carlos “Cacho” Mujica, elegido por Iturre para “consolidar el nuevo estilo”, tenía muchas similitudes con su antecesor.

Ambos eran del interior, uno de Sumampa y el otro de Mailín,⁴ y habían pasado por la universidad nacional como rectores, lo que supuestamente era una demostración de sus capacidades intelectuales. Ambos se mostraban humildes, no autoritarios y ex juaristas, y los dos repetirían, como calcados, la famosa “patada” histórica.

Mujica no dejaba de reconocer con gran obsecuencia a su íntimo amigo. “Estoy al servicio de mi partido... y las decisiones que se tomen no se deben a la voluntad del candidato sino a las determinaciones que adopte el ingeniero Iturre, quien irá marcando las pautas y las formas de llegar a la unidad.”

En el segundo lugar de la fórmula, como vicegobernador, Iturre eligió a otro “incondicional”, Fernando Lobo, presidente de la bancada adicta en la Legislatura. La fórmula Mujica-Lobo triunfó en las elecciones del 27 de octubre de 1991 que a través de la Ley de Lemas permitió la suma de los votos de la Corriente Renovadora Iturrista con la del Frente Justicialista de Carlos Juárez y del lema de la Revolución Productiva de William Otrera, secretario de Obras Públicas de la Nación y candidato de Domingo Felipe Cavallo.

José Zavalía, si bien consiguió triunfar en la capital provincial y en La Banda, fue el gran derrotado en los cómputos generales. Juárez, perdedor por sólo cinco mil votos ante Mujica, se alió con Zavalía en la desgracia y juntos cuestionaron por fraudulentas las elecciones, en medio de un clima de gran efervescencia popular. Contribuyeron a crear ese clima la demora en el suministro de los cómputos oficiales por parte del Juzgado Federal y los escrutinios provisorios que, a cargo del correo, no coincidían con los datos que tenían los fiscales de los partidos.

En fallo dividido, el Tribunal Electoral Federal convalidó las elecciones provinciales y el triunfo de Mujica-Lobo, pese a las pruebas del fraude presentadas por Zavalía y por Juárez (doble juego de documentos de identidad, votos de fallecidos, de policías en ejercicio, etc.), que la mayoría del tribunal consi-

4. Villa Mailín es el nombre de una población del interior donde se realiza una imponente manifestación de religiosidad popular saludando al santo patrono de Mailín.

deró insuficientes. Hay que señalar que las anomalías recriminadas no fueron muy distintas de las que, elección tras elección, son denunciadas en muchas otras provincias.

La tradicional tranquilidad santiagueña se vio quebrada impensadamente por una multitud que salió a protestar a las calles. Este fue el primer paso de las masivas movilizaciones que se harían famosas por las marchas a caballo del derrotado candidato radical.⁵

La fórmula ganadora Mujica-Lobo y sus ministros asumieron a escondidas en la medianoche del 9 de diciembre de 1991, en un acto vergonzoso y sin precedentes en la historia provincial.

Mujica se rodeó de reconocidos militantes de la gestión de Iturre, pero no pudo evitar que la crisis avanzase de manera incontenible: no sólo por el aislamiento político del ex gobernador, sino también porque las cuentas financieras de la provincia comenzaban a hacer agua.

A sólo cinco meses de gestión, Mujica decide cambiar abruptamente de aliado traicionando a su amigo Iturre y pactando con el juarismo. Decía que buscaba la "unidad provincial", y para ello designaba a los "arabians boys", como se llamó a los funcionarios cercanos a Víctorio Curi —un conocido de los lectores— que nombró en el equipo económico.

El caos comenzó a reinar en la provincia ya que el "santo de Mailín" no tomaba ninguna determinación de fondo, escondiéndose de los múltiples problemas en la casa del vocero gubernamental, Miguel Brevetta Rodríguez. Su flamante ministro de Economía Antonio Asseph sólo atinaba a pagar puntualmente los intereses a los contratistas del Estado y a gestionar otro préstamo ante los bancos nacionales para poner al día los sueldos de la administración pública provincial. Finalmente,

5. En una de esas marchas convocó a sus partidarios a "levantarse en armas", expresión que provocó grandes reacciones en su propio partido, en la oposición menemista y en la prensa nacional, que lo acusó de "golpista". Zavallía aclaró que se refería a las "armas de la democracia". Pese a esta gaffe, el prestigio de Zavallía se acrecentó y era entrevistado por todos los medios de comunicación, sobre todo a partir de sus cruces mediáticos con el en ese entonces ministro del Interior Gustavo Beliz y con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

Asseph renunció ante la imposibilidad de "concretar reformas" que aliviaran la situación fiscal y el gobierno nacional comenzó a pensar en un castigo para tanta irresponsabilidad.

Beliz y Menem apoyaron el pacto Mujica-Juárez

La provincia seguía convulsionada y era llamada "capital de la burrolandia" porque todas las escuelas permanecían cerradas por la huelga general de los maestros. También los jubilados y los empleados públicos protestaban en la calle por los atrasos en el pago de sus míseros salarios.

El round electoral de octubre de 1993 y las aspiraciones de Menem de una reforma constitucional que permitiera la reelección reabrieron el diálogo de la Nación con la provincia. Desde el ministerio del Interior, a cargo de Gustavo Beliz, se instrumentó otra estrategia salvadora para la provincia en crisis. "El gobernador Carlos Mujica está respaldado a fondo políticamente desde el gobierno nacional al igual que el senador Carlos Arturo Juárez, quien entendemos es un pilar para esta nueva etapa que tiene que iniciar la provincia", declaraba Beliz a la prensa nacional.

Claro, Carlos Juárez era el presidente de la Comisión de Reforma de la Constitución en el Senado y jugaba un rol preponderante en la redacción y el tratamiento del proyecto de reelección presidencial. La "nueva etapa" consistió entonces en el acuerdo Mujica-Juárez y en el desplazamiento definitivo de Iturre del centro de la política provincial.

El anciano caudillo recuperaba de esta forma el control del gobierno santiagueño, colocando a sus hombres en el gabinete de Mujica con la crucial misión de conducir la campaña electoral de octubre de 1993.

Desde el gobierno de Mujica el juarismo realizó lo único que estaba acostumbrado a hacer: repartir dádivas y prebendas, llevando en seis meses la planta de empleados públicos de 31 mil a 40 mil agentes. Para desactivar la conflictividad docente y de los empleados públicos, por los atrasos en los pagos, se anunciaron generosos incrementos salariales, que en algunos casos se prometían, de manera difusa, para los futuros meses.

Esta increíble conducta para un gobierno en quiebra se

justificaba por la necesidad desesperante de legitimidad y por la recurrente apelación al gobierno federal que siempre podía traer la solución mágica (“Ganamos las elecciones y seguro que conseguiremos ayuda de la Nación”, era el razonamiento utilizado).

Nadie mordió el anzuelo de tanta “generosidad” estatal: si no cerraban las cuentas antes de semejante rush del gasto, ¿cómo iban a cerrar después? El radicalismo triunfó en las elecciones de octubre de 1993, Juárez le sacó el apoyo a Carlos Mujica, quien no tardó en caer. Se avecinaba el Santiagueño.

Hacia el Santiagueño

Después de las elecciones Santiago del Estero quedó en estado de conmoción; todos sabían que algo tenía que pasar pero, como veremos, muchos creían que con algún recambio institucional se iba a poder sortear la crisis.

Los docentes seguían de paro, apoyados por padres y alumnos que veían con temor la pérdida del año lectivo. Los jubilados y los empleados de distintas reparticiones públicas se concentraban diariamente frente a la Casa de Gobierno en reclamo del pago de los haberes adeudados. Los neumáticos quemados y los cortes de calles que obstaculizaban el tránsito eran un paisaje cotidiano.

En este escenario, no extrañó que se presentaran pedidos de juicio político al gobernador Mujica, que a esa altura no tenía ninguna capacidad de respuesta. Se sucedieron febriles negociaciones y múltiples viajes a Buenos Aires donde dirigentes de todos los partidos (peronistas de todas las tendencias, radicales y liberales) pedían tiempo para destrabar la situación y así evitar la intervención federal de la provincia.

Finalmente, hacia fines de octubre, hubo un primer acuerdo en Buenos Aires –los dirigentes de la provincia consiguieron una primera promesa de fondos frescos a cambio de realizar un drástico ajuste– y se comenzó la operación que, se esperaba, permitiría zafar de la crisis. La cabeza de turco del negocio era el gobernador Mujica, quien resignadamente presentó su renuncia al presidente de la Legislatura Manuel Bellido. La clase política provincial respiró aliviada: parecía que la pro-

vincia se había salvado de la intervención sin que corriera ni una gota de sangre y sin que ningún dirigente, salvo Mujica, quedara afectado por tanto desmanejo. El Himno Nacional fue cantado en coro celestial por todos los diputados.

Fernando Lobo, el hasta entonces vicegobernador, recibió el bastón de Ibarra y se ciñó sonriente la banda de gobernador.

Fue el último acto de recambio gubernamental que pudo realizarse en la vieja Casa de Gobierno antes de que fuera quemada por el pueblo. Y como tal, tuvo el simbolismo de juntar, tal vez como nunca antes, a toda la clase política santiagueña sin distinción de banderías. Nadie faltó a la cita. Allí estaban en primera fila, muy contentos, todos los representantes del espectro peronista. Sobresalía, a pesar de su escasa estatura, el en ese momento ultramenemista José “Pepe” Figueroa, futuro secretario de Desarrollo Social de la Nación y frustrado candidato a gobernador, que muy sonriente ingresó al recinto del juramento del brazo de Fernando Lobo. Los esperaban no menos sonrientes y distendidos los ministros juaristas del acuerdo Juárez-Mujica, como Ángel Bagli, jefe de la bancada juarista del último tramo del gobierno del caudillo. El propio Juárez se comprometió a “ayudar en esta empresa difícil para sacar a Santiago de su situación”. Todos actuaban como recién invitados a la fiesta y como si no hubieran tenido nada que ver con el ex gobernador mailinense.

Los radicales marcaban su presencia encabezados por Zavalía, “Chabay” Ruiz y Zamora. Se habían olvidado de su acusación sobre el carácter fraudulento de las elecciones y apoyaban como tabla de salvación a Lobo, último dique contra una intervención federal que, tenían, podía cambiar un escenario que parecía llevar a la Unión Cívica Radical a la ansiada gobernación.

El ucedeista Carlos León González Ábalos, pletórico de alegría, confesaba su confianza en el nuevo gobernador, sobre todo porque podía realizar las reformas del menemismo. El mencionado dirigente liberal, adláter de la liquidadora de ENTEL y Somisa, la “ecológica” María Julia y de su padre Alvarito Alsozaray, fue un permanente aliado de Iturre, posteriormente de Mujica y después de Juárez, quien lo ungió diputado provincial. Hoy González Ábalos ha devenido “columnista” de los medios de comunicación del grupo Ick.

Esta unanimidad no conmovió a la Nación, que si bien le dio a Fernando Lobo un apoyo verbal, también le recordó las promesas de ajuste. Nadie sostiene a un perdedor moribundo, y ésa era la imagen que se tenía de la política santiagueña en Buenos Aires.

La única puerta que se abría era la del tenebroso Ministerio de Economía de Cavallo, que aseguraba que no daría fondos a la provincia hasta que "los tres poderes del Estado santiagueño den muestras inobjetables de que están dispuestos a realizar el ajuste del desbarajuste provincial que han producido".

Es decir, un ajuste draconiano por la vía de una ley omnibus, que dejaría cesante a diez mil empleados públicos y reduciría en 50 por ciento el sueldo a los restantes. Adicionalmente, por esta ley se establecía la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación y se desregulaba una larga lista de actividades económicas. Era para ellos la consecuencia del happening de Mujica-Juárez, cuando se daban aumentos a diestra y siniestra y se multiplicaban los puestos en el Estado. Claro que el ajuste no llegaba a la clase política ni empresarial, sino que se ensañaba con los mismos de siempre.

Todos los sectores sociales y gremiales de la provincia se movilaron en contra de esta ley de ajuste y el plan trazado por Cavallo. Bueno, todos no: buena parte del peronismo apoyó la ley con mayor o menor entusiasmo. Los intendentes radicales –Mario Bonacina, de la ciudad capital, y Héctor "Chabay" Ruiz, de La Banda– se mostraron dispuestos a colaborar con los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación.⁶ Así fue como, con el quórum aportado por los diputados del nuevo oficialismo peronista y algunos de los radicales que seguían las órdenes de Zavaglia, la llamada Ley Omnibus fue apro-

6. Por ejemplo, el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La Banda, Fernando Rojo, actualmente gerente de Hamburgo –una de las empresas del grupo Ick–, calificó de "positivas las reuniones que junto con el intendente «Chabay» Ruiz mantuvimos con las autoridades nacionales". Y como para que quedara claro que al perspicaz secretario no se le escapaba nada, reconoció que "con la implementación de la Ley Omnibus que exige el gobierno nacional se tenderá a favorecer una flexibilización en las relaciones entre el Estado y sus agentes".

bada entre bostezos, ronquidos y, según los rumores y la fantasía popular, valijas. Las manifestaciones de protesta en las calles adyacentes terminaron con un saldo de varios heridos entre policías y empleados públicos, que, por supuesto, no perturbaron el merecido descanso de los diputados.

De acuerdo con lo exigido por el ministro de Economía de la Nación, el camino estaba abierto para que se efectivizara el apoyo económico que le permitiría a Fernando Lobo pagar los sueldos y las jubilaciones atrasadas.

Pero pasaron los días, la plata no llegaba y Fernando Lobo no podía cumplir con su promesa de pagar, aunque fuera parcialmente, los sueldos y las jubilaciones. Era un juego de tahúres: la Nación desconfiaba del ajuste, aunque se hubiera aprobado la Ley Omnibus, y la provincia no daba un paso en la racionalización si no llegaban fondos. Fue como tirar leña al fuego de la ya convulsiva protesta social.

Mientras esperaba el libramiento de fondos, el gobernador se tomó cuarenta y cuatro días para designar a sus ministros. Fue el gabinete más esperado y a la vez el más efímero de la historia provincial. Los ministros prácticamente no llegaron a sentarse en sus codiciados escritorios porque al día siguiente de sus juramentos abandonaron en una autobomba de los bomberos la Casa de Gobierno en llamas.

El pueblo de Santiago del Estero con paros y manifestaciones esperaba en las calles, quemando cubiertas. La paciencia estaba colmada.

El 16 de diciembre de 1993: la comedia y la tragedia

El 16 de diciembre de 1993 "ardía" Santiago del Estero, obli-gando al presidente Carlos Menem a decretar la inmediata intervención federal. Los símbolos del poder político y constitucional de la provincia fueron quemados y saqueados los Tribunales, la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno, al igual que una veintena de las residencias particulares de los principales dirigentes políticos y sindicales.

El presidente atribuyó este hecho sin precedentes en la historia de América Latina al desgobierno de una clase dirigente que no supo o no quiso aplicar el "exitoso" plan de ajuste

del ministro Cavallo, que tantos elogios cosechaba en el país y en el extranjero. También, desde la Nación, se adjudicó la ola de violencia a la presencia de “activistas”, que aprovecharon el descontento de los empleados públicos y una corrupta administración provincial para prender la mecha del polvorín.

Lo cierto es que estas interpretaciones no pudieron ocultar que las razones de la bronca y el odio provenían de años de continuas frustraciones, de sometimiento y de humillación.

Como toda gesta histórica, si uno escapa de versiones librescas y acartonadas, el 16 de diciembre fue como una gran obra teatral, mezcla de comedia picaresca y tragedia griega.

Fue calificada como tragedia por el ministro del Interior Carlos Ruckauf cuando aseveró que el estallido social había cobrado diez víctimas fatales —cuatro de ellas carbonizadas vivas— y centenares de heridos. La versión del ministro propalada en todos los ámbitos nacionales e internacionales fue inmediatamente desmentida por el juez del crimen de turno, Luis Lugones, que esa misma noche liberó a todos los detenidos. Nadie murió, nadie resultó herido, nadie quedó detenido. También se acordó del ministro el saliente gobernador Lobo: “Fui entregado por Ruckauf”, expresó, antes de ser premiado con un juzgado laboral en la ciudad de Buenos Aires.

Fuera de las esferas donde se buscaba encontrar un chivo expiatorio que cargara con el costo político, el Santiagueñoazo contó también con pasos de comedia. Por ejemplo, tuvo este cariz el recorrido de la multitud que, en una especie de “circuito turístico”, visitaba los domicilios de los “notables” provinciales para participar en los saqueos o bien aplaudir como una claque bulliciosa y complaciente. Nadie quería perderse este espectáculo. Y todos los medios de difusión “en vivo y en directo” transmitían y relataban los hechos como un gran evento deportivo e incluso preanunciando el próximo domicilio del político que la multitud “visitaría”.

De todas maneras hacía rato que los principales “referentes” políticos y gremiales se habían “borrado”, de ahí que prácticamente en ningún caso se los encontró en sus casas. Salvo a Zavalía, quien se resistió armado hasta los dientes y disparando contra los camarógrafos de un canal televisivo, al mejor estilo de un filme americano, rodeado por una guardia de corps dispuesta a matar o morir.

También fue de comedia todo lo que se vivió durante los saqueos, especialmente cuando la policía ya se había retirado y los manifestantes actuaban con total libertad. “Nosotros nos quedamos con lo que nos pertenece. Ellos nos robaron y es justo que sus cosas vuelvan al pueblo...”, dijo una maestra, que confesó sin vergüenza que lo único que pudo sacar de la casa de Iturre fue un almohadón y una plantita.

Se pudo ver a un muchachote robusto vestido con una falda de la famosa Nina y mostrando su ropa interior. Otro, cargando un bidet sobre el hombro, concentrado en su trabajo y buscando su bicicleta (sí, aunque parezca mentira) para transportarlo. Y la multitud los aplaudía, mientras los saqueadores, al mejor estilo deportivo, saludaban con las manos, si es que no las tenían ocupadas.

El clima era festivo. Los edificios públicos y las casas desvalijadas se visitaban, se sacaban fotografías de recuerdo, se las admiraba y criticaba por su magnificencia.

Todo eso ocurrió el 16 de diciembre de 1993, el día del Santiagueñoazo, cuando ardió la provincia más antigua y la más empobrecida.

La intervención federal de “los mediterráneos”

Al mediodía del 17 de diciembre, con un sol abrasador, asumía el interventor federal Juan Schiaretta, al frente de la Casa de Gobierno incendiada, protegido por la Gendarmería nacional. Juraba en medio de la rechifla del pueblo al ex gobernador Lobo y demás dirigentes políticos, que se hicieron presentes como si nada hubiera sucedido.

Schiaretta había dejado en el camino las pretensiones del ex interventor de la provincia de Tucumán “Chiche” Aráoz, a quien se lo involucró en los sucesos del Santiagueñoazo. Lo hizo gracias a que el superministro Cavallo amenazó con renunciar si el presidente Carlos Menem se decidía por el tucumano y no por su delfín.

El nuevo interventor designó un equipo de gobierno con importante presencia de cuadros de la Fundación Mediterránea, pagó inmediatamente los sueldos atrasados para tranquilizar la rebeldía santiagueña y retomó la tradicional política

de la dádiva y el clientelismo que el fuego no había destruido. Estábamos en las vísperas de las elecciones a convencionales nacionales de mayo de 1994 que reformarían la Carta Magna nacional. El menemismo y el Fondo Monetario Internacional debían ganar las elecciones a cualquier precio ya que era muy importante demostrar que el Santiagueñazo había sido sólo una revuelta localizada que no atentaba contra el modelo económico.

La intervención justicialista, remozada con nuevas caras aunque con los mismos métodos, volvió a ganar las elecciones de convencionales constituyentes ante el asombro de los que protagonizaron el Santiagueñazo que, un poco inocentemente, esperaban que la pueblada hubiera enterrado para siempre a los Juárez y el sistema clientelar. El poder podía respirar tranquilo, se volvía a la vieja normalidad provinciana.

El gobierno de la intervención federal "equilibró" las finanzas de la provincia, endeudándola con nuevos préstamos nacionales y comprometiendo futuras transferencias nacionales; privatizó las únicas empresas provinciales que quedaban en pie entregándolas a los nuevos "dueños del poder" (Banco de la Provincia, Empresa Provincial de Energía Eléctrica, Aguas, etc.), transfirió la Caja de Jubilaciones, disolvió la Corporación del Río Dulce e inundó a la "madre de ciudades" de "honestos" funcionarios cordobeses y de otras provincias que deseaban quedarse en nombre de Cavallo y de su proyecto presidencial para 1999.

Schiaretti ideó el proyecto de "intervención de la gente" e impuso como candidato a gobernador de su lema a un ex intendente del interior, ex convencional, su ex ministro de Bienestar Social, el desconocido Enrique Bertolino.

Carlos Juárez, por su parte, aparecía dentro de los lemas del peronismo como el único que podía dar batalla a los cordobeses. Con su tradicional verborragia dirigida a criticar la corrupción de la intervención federal, en nombre de un chovinismo provinciano que tan buenos resultados le había generado en el pasado, "volvió" nuevamente como salvador.⁷ Y lo hizo de

7. No fue ajeno a este triunfo el apoyo de parte del gobierno nacional. Constituyó un episodio más de la interna que Menem y Cavallo jugaban en todo país.

la mano del voto de la ciudad, tradicionalmente con mayoría radical, que siempre le había sido esquivo. Por el contrario, el candidato de la intervención triunfó en el interior provincial.

Resurgiendo como el Ave Fénix

Llegó el anciano caudillo a la gobernación gracias a la Ley de Lemas, con menos del 30 por ciento de los votos, "resurgiendo como el Ave Fénix", como él mismo decía, de las cenizas de su casa quemada por la multitud. Juárez asumía su cuarto mandato en una provincia saqueada por la corrupción y endeudada por la intervención en cerca de 240 millones de dólares.

Su primer acto será nombrar nuevamente como secretario de Seguridad a su hombre de confianza, el represor de la dictadura militar Musa Azar, denunciado por la Conadep en el libro Nunca más. La Legislatura provincial captó rápidamente el clima de época y, con la complacencia de la débil oposición, impidió la asunción del diputado Carlos Scrimini, del partido Memoria y Participación. Este diputado, que hacía del Santiagueñazo su principal bandera política, fue arbitrariamente privado de sus fueros parlamentarios.

El gobierno juarista recortó más del 20 por ciento de los salarios de los empleados públicos con el argumento de equilibrar las finanzas y evitar los despidos de los numerosos contratados. No hubo ninguna reacción: pudo más el miedo, por no decir el terror, de perder lo poco que aún conservaban. La provincia protagonista de una revuelta popular que había tenido eco en toda América Latina aparecía de pronto inmovilizada.

La nueva fase del régimen juarista se propuso silenciar cualquier intento opositor, aunque para lograr tal objetivo debiera bordear el terrorismo de Estado. Para ello tenía la ayuda de la Gendarmería nacional, que se estableció definitivamente en la ciudad capital gracias a la gestión del senador "Pepe" Figueroa.

Y cuando parecía que nada ni nadie podrían oponerse a los designios del supremo caudillo apareció la voz del obispo Gerardo Sueldo, que mantuvo viva la llama del Santiagueñazo

en la noche juarista. Un extraño accidente automovilístico –tan parecido al que le costara la vida al obispo monseñor Enrique Angelelli durante la dictadura militar– terminó tempranamente con la vida del “sembrador de sueños”. Ese día el juarismo festejó alborozado y con bombas de estruendo. Pero la semilla de la rebelión ya había sido plantada y de ella brotaría un poderoso movimiento social que terminaría volteando al régimen del oprobio.

CAPÍTULO 4

La caída

Otra vez Juárez

Como condenada a repetir su propia historia de sometimiento y de dependencia, Santiago del Estero no se animó –no supo– liberarse de las ataduras del caudillo después de la intervención de Juan Schiaretti, y asistió el 6 de julio 1995 al acostumbrado regreso de Carlos Juárez al poder. El “dotor”, como lo llama aún la gente, derrotó sin atenuantes en las elecciones al candidato de la intervención, Enrique Bertolino.

Pero este nuevo retorno no iba a ser igual a los anteriores. Y hubo un signo que lo denunció inconscientemente y que quizá no pasó inadvertido para los observadores de la política pueblerina, aun cuando nunca se animaron siquiera a comentarlo. En el acto de asunción, por primera vez, Juárez dio una muestra de que ya no era el mismo quebracho de estas tierras; el caudillo juró con voz tenue y enseguida no pudo ocultar las lágrimas ante su corte de vasallos que lo vitorearon largamente en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia.

¿Qué pasaba con el duro e inflexible dueño de Santiago del Estero? Juárez siempre había hecho gala de una impecable capacidad de manejo de la tropa y de las situaciones; acostumbrado al mando y a lo obediencia ciega, hacía y deshacía a su antojo en ámbitos gubernamentales, políticos y sociales; su urgente facilidad para improvisar deslumbra a propios y extraños. Sus tímidos opositores sentían admiración por aquel personaje que era capaz de nombrar hasta con el apodo a viejos o nuevos pobladores de cualquier paraje del interior de la

provincia. Un mes antes de los comicios de 1990, encabezó un mitin en la localidad de Abra Grande, departamento Banda. Como era su costumbre dejó que primero hablaran los punteros de la zona. Mientras tanto, observaba cuidadosamente el escenario, estudiaba los rostros de los asistentes, reparaba en el lugar, en los árboles, en los ranchos, en la tierra, buscando siempre el elemento que pudiera redituarle la admiración de sus interlocutores.

Aquel día se detuvo en la estampa de un hombre bien planchado, que escuchaba en las últimas filas, con atuendo de chacarero, poncho, espuelas y sombrero alado. Juárez se asomó a uno de sus punteros y le ordenó que le dijera el nombre de aquel personaje y lo que había sembrado ese año en su campo. "Viviano Luna. Algodón", le contestaron. Cuando comenzó su discurso no habló de las elecciones, no dijo que había que votarlo; empezó hablando de Abra Grande, de cómo el general Perón "siempre" había tenido una especial consideración con aquel paraje al igual que él y su esposa, a quien nombraba contodos sus nombres y apellidos; luego decía en tercera persona que "Juárez no se olvida de todos los que viven en Abra Grande, como de don Viviano Luna, viejo amigo y compañero peronista que este año va a inundar los campos de algodón en Santiago del Estero...". La gente salía obnubilada, preguntándose cómo era que lo sabía todo. Y es que Juárez estaba en esos detalles, eran parte del doble filo de sus viejas armas: la seducción y el miedo.

Su otra gran espada —que, como se verá enseguida, será clave en la nueva alianza con el empresario Néstor Carlos Ick— era esa especial virtud para interpretar los cambios estructurales de la sociedad, sus instituciones y las tendencias políticas y económicas no sólo del país sino del mundo entero.

Quizá la lectura de las tendencias de cambio en la economía nacional lo impulsaron a abandonar su antigua amistad con el empresario de la construcción, el ingeniero Víctorio Curi, y a inaugurar una nueva con el abogado Néstor Carlos Ick.

"Lo que pasa es que el Tata —padre» en lengua quichua—, no da puntada sin hilo", coincidían las bandas de muchachos de la Juventud Peronista al comando del inefable Carlos Alfredo Anauate, el regordete diputado provincial que con casi cuarenta años comandó la organización hasta que cayó preso, acu-

sado de atentar contra la vida de otro diputado, José Figueroa, enemigo del juarismo, y vinculado al llamado doble crimen de La Dársena.¹

Lo cierto es que la relación que ambos empresarios tuvieron con el poder político fue, con matices, la misma. La diferencia estuvo en el rubro elegido. Cuando Curi operaba, lo hacía en el sector de la obra pública: en la construcción de caminos, de viviendas, de diques, escuelas, etc. Este ámbito, a pesar de su envergadura, siempre tuvo altos costos. Además de la mano de obra, sus insumos eran —y siguen siendo— muy caros y sujetos a las variaciones de la economía. Por lo tanto el beneficio neto es menor al que se puede obtener, por ejemplo, en el sector servicios. Allí no hay grandes costos de materiales, sólo mano de obra y mucho valor agregado. La ganancia es mayor.

En los primeros años de los 90, la Argentina registró un cambio en la composición del poder económico: la crisis hizo que perdieran relevancia justamente las empresas constructoras, y los socios privilegiados del presidente Carlos Menem pasaron a ser los banqueros y otros oferentes de servicios.

Juárez comprendió el cambio. Curi no se adecuó a las nuevas reglas del juego y dejó el terreno abonado para la aparición del nuevo amigo del caudillo, una mente ágil y práctica. Curi se había quedado en el tiempo, el fundamento de su cercanía al poder político fue su fidelidad a los Juárez y a la generación de viviendas que el caudillo usaba para obtener votos; pero Juárez ya no estaba para ello, ganaba elecciones con la voluntad "cautiva" de decenas de miles de empleados públicos y de sus familias; la gente del campo lo votaba porque los planes sociales y la distribución del agua —siempre escasa en las zonas rurales— eran manejados por sus intendentes, comisionados municipales y punteros políticos. Se trataba de un ejército de pequeños cancerberos que custodiaban celosamente las listas de beneficiarios. Como si fuera una maldición, les hacían creer que el "dotor" tenía el poder de enterarse si lo traiciona-

1. Posteriormente, Anauate obtuvo la libertad, aunque aún no fue sobreseído en la causa del doble crimen.

ban en el cuarto oscuro. Cundía la patética mezcla de miedo y ese extraño sentimiento de admiración que a veces parecía amor. En todos los ámbitos se combatía duramente a la oposición y los castigos a los infieles se publicaban con grandes titulares en la prensa dependiente, en cuyas páginas encorsetadas se destilaba el relato de los más pequeños detalles de las ignominiosas venganzas. Juárez ya no necesitaba de la "patria tratista".

Cuando la intervención federal de Pablo Lanusse revisaba los contratos firmados entre el Estado provincial y las firmas privadas, el ex ministro de Economía Miguel Pesce confirmó las razones de aquella alianza entre el Estado juarista y el poder económico ostentado por el grupo Ick:

Hasta la crisis del 93, el liderazgo económico en Santiago del Estero lo tenían los empresarios de la construcción. Vivían del presupuesto del Estado con mucho gasto en obra pública. Con la crisis, ese modelo se rompió: la situación de escasez fiscal impidió realizar emprendimientos sostenidos en la obra pública y allí apareció esta nueva modalidad de relación con el Estado, las prestaciones de servicios que son indispensables para su funcionamiento. Y en ese nuevo modelo de relación empresarial con el Estado, el que lo acapara con exclusividad es el grupo Ick [...] puedo tener la peor crisis del sector público provincial, pero siempre voy a tener un agente financiero, siempre voy a usar seguros, siempre voy a repartir las cartas de Rentas. Ahora, esto en vez de hacerse en una forma extremadamente prolija se hizo con desprolijidades marcadas. (Página 12, 10 de agosto de 2004)

Incapaces de detener el crecimiento del grupo Ick, el resto del reducido conjunto de empresarios santiagueños advirtió que el nuevo rumbo significaba una larga lista de posibilidades de lograr posicionamiento económico, pero que todas ellas iban a terminar inevitablemente en un solo sector. Y se lo dijeron a Juárez. "Pero qué esperan que haga", les respondió el caudillo, "si es el único empresario que me trae buenas ideas, proyectos que le van bien a la provincia; a ver cuántos de ustedes tienen la misma pasta..."; les bramó. No hubo respuestas, todos aga-

charon la cabeza y salieron de Casa de Gobierno masticando bronca. E impotencia.

Las buenas ideas aportadas por Ick se transformaron en estructuras empresariales de primera línea y con niveles de eficacia admirables dentro del estrecho universo organizacional de una provincia como Santiago del Estero, donde todo se hace a medias y sin el celo que estas empresas privadas comenzaron a mostrar a poco tiempo de instaladas. Sus empleados miraban –aún lo hacen– por encima de los hombros al resto de los mortales y puertas afuera de sus oficinas muestran un insólito orgullo de ser parte del grupo, como si el poder que emanaba de éste les perteneciera.

En poco tiempo se construyó una suerte de imperio a partir del que Ick pasó a ser igual o más poderoso que el propio Carlos Juárez. Poco a poco el caudillo se vio invadido; los nuevos "amigos" se entrometían en su rodeo, lo cercaban, le mostraban sólo una parte de la realidad. El entorno de los Juárez se dio cuenta del cambio, pero todos sus miembros aceptaron o se resignaron ante la nueva situación.

Todos menos Curí. Durante años tuvo que asistir a la victoria de su rival ganando espacios impensados, desbancándolo de la confianza de Juárez. Todo ese tiempo soportó el olvido. Pero en ese lapso también afiló una daga que tardó en usar, pero que llegado el momento supo dirigir al centro mismo del corazón de sus enemigos, como se verá más adelante.

Persecuciones y amenazas

La prensa santiagueña había permanecido en silencio respecto de las anomalías que se cometían en esferas del gobierno. Pero entre los medios de comunicación masiva, hubo un diario que se animó a denunciar un aspecto del sistema caudillista sostenido por Carlos Juárez. Periodistas y propietarios del diario El Liberal, el más antiguo de Santiago del Estero, debatieron largamente sobre la misión que le competía al medio frente a la situación de la provincia y los riesgos a los que se enfrentarían si salían a denunciarla. No sin temor, pero con firmeza, se armó un equipo de jóvenes periodistas que trabajaron sin descanso. Buscaron y encontraron testimonios y docu-

mentos. No escribían en la redacción del diario por miedo a ser delatados. Nadie más, excepto el jefe de redacción y el director de la publicación, sabía de la investigación que se preparaba.

El viernes 19 de mayo de 2000, El Liberal reveló un secreto a voces: la red de espionaje político montada por el juarismo bajo el mando del ex represor, sospechado de haber sido el autor de la desaparición de personas durante el proceso militar de los años 70, el comisario mayor retirado Musa Azar. Toda la policía de la provincia trabajaba en estos menesteres. Se intervenían los teléfonos de dirigentes políticos opositores, de jueces, de periodistas, de sacerdotes, de sindicalistas. Hasta los propios integrantes del juarismo eran vigilados. Juárez quería probarlos cada día en su fidelidad. Policías de civil seguían a la gente. "Santiago es fácil", confesó un arrepentido, "somos pocos y a nadie le llama la atención cruzarse con alguien dos o tres veces en el centro, nadie se da cuenta de que lo seguimos" (El Liberal, 15 de mayo de 2004).

Comisarios, subcomisarios, oficiales, agentes, todos producían informes que iban a parar a la oficina de Musa Azar. Y de allí al despacho del gobernador. Había espías infiltrados en las organizaciones de la Iglesia, en las escuelas, en las reparticiones, en los partidos políticos, en los medios de comunicación. El diario denunció que mucha gente perdió su trabajo porque los informes confidenciales de los espías revelaban que había hablado mal de Juárez o que tenía pensamientos contrarios al régimen; muchos quedaron sin su empleo porque eran parientes de opositores, porque tenían amigos "de la contra" o porque se negaban a asistir a los actos de las unidades básicas. A otros tantos se les negaban adjudicaciones de viviendas por no ser juaristas. Otros perdían la casa que les había sido adjudicada, porque cambiaron de preferencia política.

El revuelo que causaron las denuncias del diario provocó la ira de Juárez y de Musa Azar. Durante los días siguientes a la publicación, los periodistas de ese medio tomaron sus recaudos para evitar cualquier tipo de represalias contra ellos y contra los informantes que habían contribuido a destapar el espionaje. Nunca salían solos de la redacción, se llamaban por teléfono al llegar a destino, sus hijos iban y regresaban acompañados al colegio, no intercambiaban datos sino personalmente y siempre dormían encerrados.

Juárez negó todos los cargos, al igual que Musa Azar. Hasta la empresa de teléfonos Telecom salió a negar la posibilidad de que las líneas del diario estuvieran de alguna manera intervenidas, a pesar de que se había instalado en el edificio un sistema de alarma contra interferencias, el que día a día y a toda hora marcaba la existencia de una tercera persona en la línea. El diario publicó además los nombres de los lugartenientes de Musa Azar y sus prontuarios, los cuales por cierto eran escalofriantes.

Pero un hecho vino a golpear con fuerza la voluntad de aquel equipo de periodistas. Uno de los informantes, un policía retirado que había pasado los datos más importantes del informe periodístico, cambió su postura. De repente no quiso seguir ayudando y, por el contrario, sembró terror entre los hombres de prensa. "Dejen ya de joder porque ustedes son los más pichitas...", amenazó. En la jerga santiagueña "pichita" significa fácil de doblegar. El riesgo que se corría era demasiado. Este personaje conocía paso a paso cómo se había producido la investigación, conocía los nombres de todos los periodistas y reporteros gráficos involucrados, sabía también las identidades de los demás informantes. Estas otras fuentes se rebelaron también, por miedo a ser descubiertas. "Hay que parar", coincidieron, "esto ha ido ya muy lejos". Fueron estas mismas personas las que antes de abandonar la lucha confesaron un dato terrible: en la Subsecretaría de Informaciones que dirigía Musa Azar habían aparecido bosquejos dibujados a mano alzada. Eran improvisados planos de las viviendas de algunos de los periodistas de El Liberal. El diario lo denunció en su portada. Pero la situación interna era ya sumamente preocupante porque nadie quería poner en riesgo a su familia.

En esos días, el diario La Voz del Interior de la vecina provincia de Córdoba envió un equipo periodístico para hacer un informe de la situación santiagueña. Luego ese medio publicó un informe en el que llamó "rameras" a las mujeres integrantes de la rama femenina del Partido Justicialista, famosas por su devoción a Nina Juárez y por ser el brazo ejecutor de los escraches en contra de los enemigos del régimen. El Liberal

publicó un facsímil de la página donde salió aquella nota del diario cordobés y entonces Juárez encontró una forma “legal” de contraatacar. Hizo que cuatro mil mujeres de la rama femenina patrocinadas por el abogado Carlos León González Ábalos querellaran al diario —a El Liberal, no a La Voz del Interior— por haberlas llamado “rameras” y exigieron el pago de cinco mil pesos para cada una. La justicia provincial adicta hizo caminar rápidamente las causas y en menos de un mes el diario tenía sus cuentas embargadas y a sus propietarios jaqueados económicamente. Allí terminó la lucha de El Liberal y del equipo de periodistas investigadores. Dos de ellos debieron irse del país: David Beriain —ciudadano español— regresó a su patria y Gustavo Carabajal terminó en el diario Panamá América de ese país de América Central. Los demás, se quedaron, soportaron amenazas telefónicas, seguimientos contra sus personas, y traslados y persecuciones a sus familiares.

La palabra de don Victorio

Don Victorio Curi siguió de cerca la pelea de El Liberal. Cuando lo vio flaquear, entendió que había llegado su hora. El domingo 8 de octubre de 2000, en una entrevista publicada en el mismo diario, el empresario salió con su lanza más eficaz, el conocimiento de los secretos de los Juárez. Y denunció “la traición” de Carlos Juárez y de Mercedes Aragonés de Juárez. “Yo siempre he dado, no he recibido... no tolero las ingratitudes, a él [a Juárez], yo lo ayudaba para vivir cuando estaba en México y luego en España. [...] A ella la saqué de la cárcel; arriesgando mi vida la saqué del país. Les regalé una casa, la que les quemaron en el Santiaguéfiazo, después les regalé otra, la de la calle Alvarado [donde tuvieron arresto domiciliario], y ¿qué me dieron a mí?”, se preguntó Curi.

Sus declaraciones causaron un impacto terrible en los Juárez y en la ciudadanía, que nunca imaginó asistir a esta pelea casi de alcoba entre dos pesos pesado de la vida política de la provincia. Se vivía un ambiente de ciego temor, como si en todos los barrios la gente se apresurara a cerrar las ventanas y trancar las puertas por miedo al estallido de cólera del caudillo.

“Desde hace un tiempo, yo diría entre unos seis u ocho meses, noto un cambio de actitud en el gobierno”, vulteo Curi ante un periodista del diario, “no sé si es por la edad del gobernador o por la influencia de su esposa, que últimamente he visto que se ha incrementado, lo cierto es que prácticamente el hombre es un rehén en su casa y, a su vez, la señora está evidentemente influida...”. Parecía que iba a pronunciar el apellido del que influía a la esposa del caudillo, aquel que lo había desbancado, pero no lo hizo.

“Esas ingratitudes no las tolero”, vibró, “me revuelven las tripas, el peor defecto que puede tener un ser humano es ser ingrato y no estoy enojado con el doctor Carlos Juárez; él ya no puede hacer otra cosa, aunque parece que quiere tener socios y no amigos... así no se puede vivir”, renegó.

Entonces vino la pregunta clave: “¿Usted ha financiado de alguna manera la carrera política del gobernador Carlos Juárez?”. Don Victorio Curi no lo pensó dos veces: “Lo he ayudado, sí, lo ayudé, por influencia mía también la gente de la construcción lo ayudó con apoyo logístico, camiones, camionetas y dinero; él, desde el llano, nunca ganó una elección; la elección que ganó contra Schiaretto también fue obra mía”, osó decir.

Luego Curi le apuntó al bastión juarista, a la supuesta administración económica ordenada y equilibrada. Dijo:

Económicamente, la provincia está muy mal, no es cierto que no tenga deudas, tiene trescientos millones de deuda, todos son bonos de títulos y eso es deuda...

Se pagan los sueldos al día, pero los empleados públicos sólo cobran cuarenta o cincuenta pesos, les descuentan todo, ésta es la única provincia donde es posible el descuento de más del 70 por ciento del sueldo; han secado la plaza, no hay un solo peso.

Enseguida le tocó el turno a la Justicia juarista. “No hay seguridad jurídica en la provincia, aquí la gente tiene miedo, hay una Gestapo femenina y hasta los propios funcionarios y los legisladores tienen temor”.

Las palabras de Curi mostraron imágenes del subsuelo santiaguense, un lugar donde todo era posible, donde se tejían los negociados más inverosímiles, donde la delación y el engaño

convivían con un miedo estructural, fundamental. En la superficie, el iceberg se mostraba resplandeciente, pero en las profundidades, dirigentes y funcionarios pisoteaban las cabezas de la gente, perseguían y controlaban a los opositores y siempre estaban dispuestos a unirse o a clavarse una puñalada por la espalda si las circunstancias lo requerían.

Un Juárez golpeado

Lo de Curi, menos que ira, causó dolor en Carlos Juárez. De pronto se vio solo, sin nadie en quien confiar. Era un gobernador golpeado. Había recibido dos estocadas: la del diario de más llegada a la clase media santiagueña y la de su ex amigo empresario. Había que tomarse un respiro. Además, en el país había comenzado a crecer el reclamo popular en contra de la clase dirigente que poco a poco perdía cada vez más su consideración ante el pueblo. Entonces Juárez y su mujer, la vicegobernadora, decidieron renunciar a sus cargos. Se dijo que por "recomendación" de los médicos, el "doctor" debía tomarse un descanso. Pero no tenía ninguna intención de soltar el timón. Un nuevo plan ya había sido concebido. Pergeñó seguir al mando colocando en el puesto de gobernador al ignoto médico bandedeño Carlos Díaz, que fue elegido por la Legislatura provincial, de entre sus miembros, ante la acefalía del Poder Ejecutivo. El día de la asunción, Díaz sólo habló de su devoción por quienes llamó sus "líderes y conductores", y proclamó su amor incondicional y obediencia para siempre. Pero una nueva traición se estaba preparando.

El horizonte de Carlos Juárez se teñía de signos confusos, pero en él se vislumbraba con cierta firmeza que su tan mentada capacidad de liderazgo estaba sufriendo modificaciones. Corrían rumores de lo más diversos acerca de su estado de salud. Sus inmediatos seguidores habían comenzado a llamarlo, aunque secretamente, "el viejo" y esto lo sabía y le preocupaba. Le hallaba razón a Curi; en cierta forma se sentía aislado. Los problemas habituales de la provincia—la pobreza, la desnutrición infantil, el éxodo de jóvenes y las desprolijidades administrativas— saltaban aquí y allá sin que Díaz tuviera la cintura necesaria siquiera para ocultarlos.

Fue cuando el caudillo ahondó en el análisis de sus posibilidades. Hizo una rápida lectura de su situación personal. Con ochenta y dos años y la salud deteriorada, una provincia totalmente dependiente de su mano y sumida en múltiples problemas que durante años él había podido apaciguar (aunque sin darle una solución definitiva), y sin ayuda del gobierno de la Nación, el futuro se le presentó por demás complicado. Por primera vez en muchos años, Carlos Juárez tuvo miedo. Y allí comenzó realmente su caída. Porque aquel hombre, acostumbrado a manejarlo todo, se dio cuenta de que esta vez no podría hacerlo, al menos no solo; que su séquito de cortesanos no tardaría en traicionarlo.

El miedo y su nula tolerancia a quedar en el olvido fueron sus peores consejeros. Juárez cometió gruesos errores porque el pánico a dejar de ser omnipotente le impidió pensar correctamente, lo hizo encaramarse en proyectos con pretendida repercusión nacional—un ámbito que siempre le fue adverso—, lo obligó a ceder espacios políticos, sobre todo a su mujer. En menos de dos años se sucedieron gravísimos hechos que determinaron su derrumbe y el del denominado "juarismo".

Los errores

El primero, el espejismo nacional. Carlos Juárez siempre sintió que a pesar de haber sido varias veces diputado y senador de la Nación, nunca fue tenido en cuenta en el ámbito nacional, donde sin duda le hubiera gustado compartir alguna fórmula presidencial por el Partido Justicialista, que lo tenía como hombre de consulta, pero que jamás le permitió descollar en candidaturas de primera línea a nivel gubernamental, quizá por su afán de cerrar las puertas de la provincia como la de un rodeo en el que sólo él podía disponer.

Por ello, en 2002, cuando la ciudadanía de Buenos Aires pregonaba el "que se vayan todos" con relación a los políticos totalmente desprestigiados, Carlos Juárez, que veía cómo su estrella iba en sostenido cuarto menguante, supuso que aquella era su oportunidad de mostrar que todavía era capaz de posicionarse por encima de toda la dirigencia, aun la del país entero, y pensó que con el control que siempre había tenido

sobre el electorado de Santiago del Estero podía convertirse en el único político a quien el pueblo podía volver a elegir en medio de una profunda crisis nacional de credibilidad.

Hueso duro de roer, sacando energía de donde pudo, puso manos a la obra, instruyó a sus diputados e hizo sancionar la "ley de emergencia política". Con ella reformó la Constitución de la provincia y llamó a las urnas para que toda su dirigencia y él mismo revalidaran sus títulos. "En todo el país se pide que se vayan todos; acá, en Santiago, la gente pedirá que nos quedemos nosotros", instruyó el viejo caudillo a sus lugartenientes. Pero Juárez, ciego con su plan, en esta oportunidad no tuvo miramientos de ninguna índole y por primera vez dejó varios cabos sueltos en su afán de lograr su cometido. La más notable irregularidad es haber otorgado a aquella ley facultades constituyentes y haber usado esa norma para hacer caducar mandatos de diputados, intendentes y concejales, muchos de los cuales, al verse despojados y fuera de las nuevas listas de candidatos, reclamaron ante los estrados judiciales. En algunos casos fueron reincorporados en sus puestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y debieron compartir mandato junto a los nuevos funcionarios, hecho que originó una situación por demás patética, con recintos cubiertos de legisladores donde hubo que agregar sillas y mesas para que sesionaran todos: los avasallados restituidos y los nuevos elegidos.

Y para colmo el caudillo no pudo salirse con la suya, aun ganando la elección, porque la fórmula integrada por Carlos Ricardo Díaz y Mercedes Marina Aragonés de Juárez se impuso con el 70 por ciento de los votos, pero el hecho no tuvo la repercusión esperada porque no participó ni el 50 por ciento del padrón electoral: los había votado alrededor del 35 por ciento del total de sufragantes. El gobierno de Díaz estaba condenado al fracaso. Lo sabían todos, salvo el propio Díaz, que pensó que podía desconocer a su hacedor. Los informes del servicio de inteligencia comandado por Musa Azar lo mostraron como un traidor a punto de dar el zarpazo.

La vicegobernadora electa no quería hacerse cargo, montó en cólera y se mantuvo alejada de Díaz —incluso fijó residencia en el barrio porteño de Belgrano—, sin importarle el hecho de que toda la opinión pública ya rumoreaba el papelón.

Se negó a regresar a Santiago esta último momento. Juárez

rez supo entonces que fue un error la designación de ambos en la fórmula. Había que sacar del medio a Díaz para propiciar la asunción de ella como gobernadora. Y para lograrlo tuvo un golpe de suerte. Un cuñado de Díaz regenteaba un prostíbulo de mala muerte en el barrio Huaico Hondo, en la periferia de la ciudad. Allí hallaron sin vida a una de las menores que el pariente del gobernador hacía trabajar atendiendo las necesidades sexuales de los clientes. El caso le vino de maravillas. Culparon a Díaz de haber encubierto a su pariente, lo acusaron de haber influido sobre los jueces y haber ordenado que se cajoneara el expediente judicial. Totalmente desprestigiado, con la amenaza de la destitución, Díaz renunció. Más tarde, con los Juárez presos, admitiría que nunca tuvo poder de decisión, que no manejaba nada desde el Ejecutivo y que sólo llevaba a cabo las órdenes de Juárez.

El segundo error, Nina al poder. El 12 de diciembre asumió Mercedes Aragonés como gobernadora, y permitir este hecho fue la equivocación de la que más se arrepintió el caudillo. Le cedió espacios políticos increíbles. Ella, impulsiva, inexperta, nunca dócil con el caudillo, sin carisma de líder y sin la capacidad de su marido, pronto incurrió en yerros que comenzaron a trascender y la imagen de la pareja se tornó cada vez más gris. Nina era una gobernadora fantasma. Nunca aparecía; se sabía que estaba en el despacho del segundo piso de la Casa de Gobierno porque sus mujeres entraban y salían dejando o llevando chismes para castigar a tal o cual funcionario, tal o cual dirigente, tal o cual periodista. Pero nadie podía hablar con ella, salvo los nuevos amigos del poder.

Nina llamaba a las integrantes de la rama femenina "mis quijetas con faldas". Eran su brazo ejecutor de sentencias, de condenas. Más parecidas a Aldonza Lorenzo que a Dulcinea, las quijetas eran capaces de las injurias más soeces como de las acciones más arriesgadas. Y estaban por todas partes, pero el Poder Judicial y el Consejo General de Educación eran sus molinos de viento más preciados. Detrás de una jueza, de una ordenanza, de una maestra, una supervisora o una instructora había una miembro de la rama femenina, una quijeta con faldas. Todos les temían. Varias de ellas se hicieron famosas porque abandonaban sus juzgados para pasar oficina por oficina en Tribunales recolectando los diez pesos que todos los miem-

bros del Poder Judicial debían aportar para los actos de las unidades básicas. Amenaza de por medio, todos, empleados y funcionarios judiciales, debían aportar para la causa, y para los regalos que Nina y sus más estrechas colaboradoras gustaban de recibir, sobre todo para el día de la mujer y el de la Virgen de la Merced.

Las mujeres de Nina “gobernaban” en cierta forma. Mercedes Aragonés llegaba a las cinco de la mañana a su despacho y allí había ya quijotas con faldas. Carlos Juárez nunca pudo dar una contraorden cuando la rama femenina había recibido instrucciones de su esposa. Pronto descubrió que Nina rivalizaba con él. Seguramente recordó las palabras de Curi, pero ya era tarde.

María Rosa Juárez, hija del caudillo y de su primera esposa, Luz Medrano, denunció públicamente que su padre era un rehén de Nina y que tenía datos de que era maltratado por ella. Al margen de que esto fuera real o no, lo cierto es que la creciente rivalidad de Nina con su marido lo colocó en una situación desventajosa porque aquella mujer era imposible de contradecir y porque en los peores momentos daba rienda suelta a su impulsividad y tozudez sin límites. Los mismos atributos que exhibió cuando fue cercada por las denuncias que llevaron a la provincia a la intervención federal. Se negó a renunciar para buscar una salida institucional y obligó a utilizar el remedio federal en la provincia.

El tercer error, la apuesta—aunque secreta— por Menem. Juárez tomó partido en la interna nacional a favor de Carlos Menem y dejó de lado al candidato de Eduardo Duhalde, a la sazón futuro presidente de la Nación, Néstor Kirchner. El caudillo tenía sus razones. En primer lugar, y a pesar de no congeniar con su colega riojano, se dejó llevar por las encuestas que favorecían a Menem; en segundo lugar, había un hecho fundamental que lo separaba de Kirchner: en 1973, el santacruzense había formado parte de aquella Juventud Peronista que acompañó a Héctor Cámpora y que en Santiago del Estero apoyó a Francisco López Bustos, un dirigente que, como vimos, compitió con Juárez y para el cual sólo guardaba odio y resentimiento.

¿Por qué decimos que fue una apuesta secreta? Porque en Santiago del Estero, el candidato natural de Menem era el en-

tonces senador José Oscar Figueroa, un enemigo de Juárez, a quien no le iba a permitir quedarse con los votos de un electorado que entendía se iba a manifestar a favor de Menem. Entonces Juárez jugó a dos puntas y esto le trajo el peor de los dolores de cabeza porque, si bien hizo una manifestación pública a favor de Kirchner, secretamente mandó a votar al candidato José María Cantos, cuyo sublema sumaba votos para Menem, con el fin de neutralizar a José Figueroa. El incipiente kirchnerismo lo supo. Carlos Menem renunció a la segunda vuelta, Kirchner se convirtió en el presidente de los argentinos y Juárez tomó nota de su gravísimo error.

El cuarto error, la impunidad del doble crimen de La Dársena. El 25 de febrero de 2003 ocurrió el hecho que dispararía las movilizaciones populares más importantes que se recuerden en la provincia de Santiago del Estero. Ese día aparecieron en la localidad de La Dársena, departamento Banda, a unos 50 kilómetros de la capital santiagueña, los cuerpos de dos jovencitas. Esos asesinatos conmocionarían de tal forma al país entero que de repente los ojos de todos los argentinos se posaron en la provincia. Y el kirchnerismo entendió que había llegado la hora del caudillo.

Los innumerables desaciertos cometidos durante la instrucción policial y judicial de los homicidios de Leyla Bshier Nazar y de Patricia Villalba facilitaron las cosas. El Poder Judicial, que se movía al ritmo del Ejecutivo, no tuvo reacción y la gobernadora tampoco supo manejar los hechos. La familia Villalba organizó, con ayuda y participación de la Iglesia, del Foro de Entidades Intermedias y de las distintas asociaciones de derechos humanos (sobre todo la Asamblea Permanente y la Asociación de Familiares por la Memoria y Justicia), marchas de silencio que lograron congregarse a cerca de veinte mil personas que ya sin miedo a nada marchaban cada viernes por las calles de la ciudad, exigiendo justicia y dejando al descubierto que también el pueblo había comenzado a advertir que el poder de los Juárez había menguado. Los viejos y solitarios luchadores en contra del régimen se sumaron al reclamo, y pronto hubo un sentimiento generalizado de repudio al caudillo que mantenía sometida a la provincia.

Nina rivalizaba con Juárez, a quien le impedía tomar decisiones. Era, “sin duda, un escenario que mezclaba limitacio-

nes, inexperiencia e ineptitudes políticas y que encaminó al gobierno hacia el descontrol, la descomposición y un cúmulo de errores", escribió el diario *El Liberal* (30 de abril de 2004).

Quedó al desnudo el andamiaje caudillista porque, sin el líder y conductor al frente, nadie fue capaz de pensar estrategias válidas para ponerse al hombro la situación. Ni funcionarios, ni legisladores, ni jueces ni policías fueron competentes. En un principio la gobernadora prefirió no reconocer el problema que le empezaba a quemar las manos, luego intentó tapar todo denostando a las víctimas; enseguida quiso arreglar su falta de reacción anunciando una recompensa para el que aportara datos sobre los asesinos.

La familia de Patricia Villalba, una de las víctimas, nombró al abogado Luis Santucho como uno de su patrocinantes. Entonces aparecieron en Santiago del Estero importantes figuras del Ministerio de Justicia: el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y Pablo Lanusse, subsecretario de Justicia.

Se tejieron media docena de hipótesis sobre la muerte de las chicas, pero pronto los cañones apuntaron a la figura de Musa Azar porque la joven Villalba tenía huellas de haber sido torturada. Azar gozaba del aprecio y de la extrema confianza de los Juárez. La gobernadora no supo qué hacer. Terminó, tardíamente, desamparándolo, y Musa fue preso.

El gobierno de la mujer de Juárez hacía agua por todos lados, las marchas eran cada vez más numerosas y señalaban ya no sólo a Musa sino también a diputados, funcionarios gubernamentales y empresarios amigos del poder político. Poco a poco fueron cayendo el primer juez de la causa, Mario Castillo Solá, el diputado "Pololo" Anauate (el líder de la Juventud Peronista), el temido Musa Azar, cinco de sus mejores policías, el propio hijo de Musa ("Musita"), entre otros.

Cuando nadie lo esperaba, la oficina de la Administración Nacional de Seguros Sociales local denunció a la gobernadora junto a una decena de legisladores justicialistas y funcionarios

3. Nombramiento cargado de simbolismo, ya que se trataba de un miembro de una reconocida familia de luchadores diezmada por las desapariciones y del sobrino del líder del PRT-ERP, "Robi" Santucho.

judiciales de cobro indebido de haberes. Carlos Juárez salió en defensa de su esposa aduciendo que ésta había renunciado a cobrar su jubilación cuando se hizo cargo del Ejecutivo.

La gobernadora desoyó todos los reclamos y, a causa de la denuncia en su contra, decidió no presentarse a declarar ante el juez federal Ángel Toledo, un amigo de la casa, quizá acosada a la impunidad con la que se habían venido manejando durante años. Amigo o no, a Toledo —con la totalidad de los medios de comunicación nacionales encima— no le quedó otra que solicitar su desafuero y allí Nina incurrió en otro grosero error: se instruyó a los diputados provinciales para rechazar el pedido del juez.

La opinión pública nacional ya miraba a los Juárez como los malos del norte del país y asociaban la muerte de Leyla y Patricia con la de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, donde ese hecho —intervención federal mediante— terminó cortando la hegemonía de los Saadi, otra familia de caudillos que había reinado por décadas.

La Gestapo santiagueña

Para dar una idea de cambios, sobre todo en el Poder Judicial, se "maquilló" el Superior Tribunal de Justicia, adepto a los Juárez. De esta manera, fueron incorporados Carlos Oliveira, ex apoderado y conocido dirigente del radicalismo, y Lucía Amin de Lavaisse, ex opositora del juarismo desde el Colegio de Abogados. Ernesto Kozameh renunció a la presidencia y el vocal Carlos Leoni Pinto fue destituido por un jury.

Este remozado Superior Tribunal, defendido con orgullo por el propio Juárez por su imparcialidad y sabiduría, se negó a otorgar un recurso de hábeas data presentado por sacerdotes del Obispado de Santiago del Estero, pero sorpresivamente, un par de meses después, un juez de instrucción "quebrado", el doctor Juan Carlos Achával, se lo concedió a tres ciudadanos "marchistas". De esta forma se abrió el archivo del Departamento de Informaciones (D-2) de la policía provincial, lo que puso al descubierto la existencia de más de cuarenta mil carpetas del espionaje que durante años se había perpetrado contra políticos amigos y opositores, periodistas, empresarios, sa-

cerdotes, artistas, profesionales, etc. Las denuncias del diario El Liberal recobraron vigencia.

En aquellas carpetas estaba la historia diaria de los enemigos de los Juárez. Desde la hora en que salían de sus casas hasta un listado de con quiénes había hablado y adónde. Había desgrabaciones de conversaciones telefónicas y fotos por doquier. La "miserable" vida de los santiagueños se expuso a todo un país que no alcanzaba a creer que aquello podía haber sido posible en este siglo. "Juárez tenía una Gestapo a su servicio", sentenció el doctor Eduardo Luis Duhalde al conocer la noticia.

Las marchas, como elemento de presión, llegaron a su máxima fuerza porque la indignación de la población ya no reparaba en temores y a viva voz comenzó a pedir —a exigir— la intervención de los tres poderes en la provincia y que los Juárez fueran presos por tanta violación a los derechos de los ciudadanos.

Tozudamente, la gobernadora Nina salió en conferencia de prensa a confirmar que no renunciaría a su cargo y desafió temerariamente al presidente de la Nación a tomar la decisión de intervenir la provincia.

Musa Azar, desde su lugar de detención, rompió el silencio y dirigió sus cañones contra sus ex amos. Denunció que los Juárez lo entregaron para tratar de salvar la situación, pero que, en realidad, "ella es la culpable de todo". Sus palabras se acompañaron con detalles que arrojaron sospechas sobre Juárez como supuesto autor ideológico de la muerte de varios dirigentes políticos, incluido el del propio ex gobernador César Eusebio Iturre (El Liberal, 15 de noviembre de 2003).

El diputado José Figueroa, un menemista enemigo de Juárez, le sumó leña al fuego: acusó al caudillo de haber intentado matarlo durante un escrache a su vivienda que terminó en un violento saqueo. Por esta causa había sido detenido Carlos Anauate, quien no tardó en vincular a Juárez y su esposa con la autoría ideológica de los hechos de aquella ignominiosa jornada.

Un par de días antes del comienzo de abril, y después de muchas cavilaciones, el presidente Néstor Kirchner decidió intervenir la provincia.

El ex fiscal Pablo Lanusse fue designado interventor fede-

ral. Los Juárez fueron encarcelados acusados de crímenes de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, del doble cobro de haberes por la Administración Nacional de Seguridad Social, del ataque y saqueo a la vivienda del diputado nacional José Figueroa, de desvío de fondos destinados a la salud, de haber cometido irregularidades en contratos con el empresariado privado.

La intervención federal (primera parte):
cuando los federales se propusieron
cambiar el mundo

El desembarco

Finalmente, después de tantas idas y vueltas, la intervención ya estaba en la provincia.

En una jornada de calor bochornoso, un micro recogió en el aeropuerto al reducido grupo de funcionarios federales y recorrió pesadamente los largos cinco kilómetros hasta la Casa de Gobierno, aquella que fuera incendiada durante el Santiagueñazo y que Juárez siempre considerara como una posesión propia.

Ese 1 de abril una multitud se había abierto camino y se acercaba al edificio siempre vallado para los opositores durante el largo gobierno juarista. A unas pocas cuadras, el matrimonio "protector ilustre" permanecía detenido en su domicilio. Increíble... pero real.

El Himno Nacional fue coreado con fuerza por el gentío, y cuando pronunciaron la añorada palabra "libertad" se vieron ojos rojos y lágrimas de emoción. Las Madres del Dolor, los parientes de Leyla y Patricia, los familiares de los detenidos y desaparecidos de la atroz dictadura militar, los militantes de derechos humanos, los miembros de la Multisectorial y de las combativas instituciones intermedias, los artistas censurados, los campesinos desalojados, los profesionales comprometidos, los jóvenes estudiantes, los que marchaban sin descanso todos los viernes desde hacía un año; todos, absolutamente todos, estaban allí.

También una enorme muchedumbre había cantado emocio-

nada el himno patrio, en ese mismo lugar, durante las jornadas del 16 de diciembre de 1993. Pero ahora, se prometieron, todo iba a ser diferente.

Después del himno, la multitud, en silencio respetuoso, levantó la mirada esperanzada hacia el primer piso de la Casa de Gobierno esperando ver la delgada figura del interventor Pablo Lanusse. Pero en su lugar aparecieron en el balcón de la Casa de Gobierno manifestantes que habían conseguido filtrarse en la ceremonia del juramento. Entre ellos estaba el padre de Leyla, el palestino Younnes Bshier, que muy sonriente y feliz abrió ambos brazos para saludar a la multitud. Un "iiiiiiiioooooo" (yo) imitando al caudillo depuesto salió de la garganta del palestino y estallaron las risas y los aplausos.

Como mostrarían las encuestas, la intervención se iniciaba con un amplio crédito —llegó con una imagen positiva del orden del 80 por ciento— que tenía como uno de sus puntos más altos la figura del interventor, cuyo perfil (padre de familia, católico apostólico romano, sin pertenencia partidaria, con antecedentes "heroicos" en la lucha contra la mafia del oro, acostumbrado participante y orador de las marchas provinciales por el esclarecimiento de los asesinatos de Leyla y Patricia) encajaba con las aspiraciones de buena parte de la sociedad provincial.

Para mantener esta imagen favorable era necesario desterrar definitivamente los métodos políticos del juarismo, así como también empezar el camino del despegue socioeconómico.

No era un desafío menor. Se enfrentaba a una estructura política que se había retirado intacta y que pervivía en innumerables redes informales de soporte y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del Poder Ejecutivo, en los municipios, en la prensa, en una red de negocios que si bien tenía un socio claramente mayoritario, reunía por mil y un caminos capilares a empresarios locales que participaban de negocios, siempre ilegítimos, muchas veces ilegales.

También se debía lidiar con un estado de cosas que muchos pensaban era inmutable, y que les hacía pensar que Juárez era eterno y que no importaba lo que se hiciera, igual iba a volver. "Santiago siempre fue y será así, es imposible cambiarlo", decían.

Pero ahora, también estaban los que respondían al cerrado fatalismo: "Sea como fuere, no es opción dejar las cosas como

están", y explicaban que abortar el proceso de cambio político implicaba, también, eternizar a Santiago del Estero como una de las provincias más pobres del país. Y luego enumeraban los múltiples y dolorosos registros de la realidad provincial: analfabetismo, pobreza generalizada, subdesarrollo económico.

De hecho, un episodio digno de la magia juarista fue la manipulación de las estadísticas, en particular las referidas a la mortalidad infantil, un número clave para tomar la temperatura de la situación sanitaria y social que era sistemáticamente falseado. Así, los informes oficiales hablaban de un 12,4 por mil de mortalidad infantil, pero la intervención federal, a tres días de haber llegado, comprobó con sorpresa que los datos eran erróneos y que tal tasa era de aproximadamente el doble de lo dado a conocer. Lo mismo ocurría con el mal de Chagas, el hidroarsenicismo, y toda una serie de enfermedades ligadas a la pobreza que entre la falta de documentación, la indolencia y el interés por ocultar la realidad prácticamente no eran informadas.

En suma, como sostienen todos los estudios sobre el desarrollo regional en la Argentina, Santiago del Estero es una de las provincias menos dinámicas y más pobres del país.² Visto esto, ¿podía haber equívocos acerca de la herencia que dejaban décadas de hegemonía de los Juárez? ¿Alguien podía dudar de la gigantesca tarea que quedaba por delante?

Los primeros pasos

El desembarco de los nuevos funcionarios se desarrolló en un escenario de marcada incertidumbre. Era una situación compleja, sobre todo en el área de seguridad, con una policía provincial que no era confiable y sólo un puñado de hombres del Sistema Penitenciario Federal como personal leal. Frente a ellos ha-

1. Enfermedad causada por la ingesta de agua con altas concentraciones de arsénico.

2. Un trabajo que hace un recuento de las diferentes clasificaciones de provincias muestra el consenso que hay al respecto (Cao, Rubins y Vaca, 2003).

bía un terreno minado por el juarismo, cuya máxima expresión fue la oleada de usurpaciones de las viviendas construidas por el Estado, impulsadas por ex diputados y funcionarios juaristas, y un virulento motín que se desarrolló en la cárcel provincial. En el peor escenario, una pueblada o hecho de violencia podía signar —e incluso abortar— todo el proceso en marcha.

En este contexto, las primeras acciones del flamante gobierno se dirigieron a contrastar simbólica y prácticamente con el régimen depuesto. Una línea de trabajo se dirigió a desmontar, ipso facto, el aparato represivo de Musa Azar y compañía. Para esto se trabajó en dos aspectos; por un lado removiendo una gran parte de la Justicia (entre ella, el Superior Tribunal), cómplice decisivo del poder juarista y, por otro, desarticulando los núcleos terroristas ligados a la policía de Santiago del Estero que pervivían desde las épocas anteriores al golpe militar de 1976.

Se buscaba que el Estado recuperara su carácter de garante de un ámbito público donde todos los ciudadanos pudieran relacionarse como libres e iguales; que dejara de ser el encargado de dividir entre ciudadanos de primera —los militantes, funcionarios y empresarios amigos—, ciudadanos de segunda —quienes no participaban del proceso político— y ciudadanos de tercera —los opositores—, para los cuales no existía ningún derecho o garantía.

De igual forma, en una provincia donde el gasto del Estado era vital para el funcionamiento de la prensa, el nuevo gobierno se propuso terminar con el uso sesgado de la publicidad oficial, así como también con el más común caso de amenazas e intimidaciones a periodistas y el secuestro de periódicos y material periodístico sin orden judicial o por contravenciones menores. Estaban frescas en la memoria las amenazas a periodistas, las querellas a El Liberal, el secuestro del diario La Verdad de las Madres del Dolor, las denuncias de ADEPA, de la SIP, del relator oficial de Naciones Unidas.

Paralelamente se tomaron una serie de medidas simbólicas, como la derogación del absurdo nombramiento de Nina Aragonés y Carlos Juárez como “protectores ilustres de la provincia”. Más importante aún fue la transformación de la Casa de Gobierno de coto cerrado del gobernador a epicentro de hechos político-culturales abiertos a toda la ciudadanía.

En la etapa juarista, el acceso a la Casa de Gobierno —situada frente a la plaza San Martín, a unas cinco cuadras de la plaza Libertad, donde se erigen la Catedral y el Cabildo— estaba fuertemente restringido y sólo unos pocos elegidos, todos pertenecientes al partido en el gobierno, podían ingresar a ella. Particularmente, la presencia femenina estaba muy limitada y, cuenta la leyenda, la guardia no dejaba ingresar a las damas que llevaban pantalones. Los funcionarios varones que trabajaban en el lugar tenían prohibido recibir mujeres; los secretarios personales de todos ellos eran hombres. Un edicto policial prohibía la llegada de concentraciones opositoras a todo el perímetro de la plaza San Martín, resguardada por un vallado de metal y la nutrida presencia de personal de seguridad fuertemente armado.

Con la llegada de la intervención todo cambió. Se derogó el edicto policial y cotidianamente hubieron manifestaciones, concentraciones, pedidos, que llegaban hasta la misma puerta del palacio gubernamental. Hubo protestas por el desorden, pero la intervención contestó que eran producto del juego de la democracia y de años de inquietudes reprimidas... y al poco tiempo la gran mayoría de la población lo comenzó a aceptar como un hecho cotidiano.

Se lanzó el programa Puertas Abiertas que, de la mano de visitas guiadas o de asistencia a actividades culturales, permitió a muchos santiagueños entrar por primera vez a la mítica Casa de Gobierno. En un abarrotado salón de conferencias se presentó Hacha y quebracho, un clásico del teatro provincial de fuerte contenido crítico, tantas veces censurada y prohibida en ámbitos oficiales y educacionales. Otra vez, la banda de la policía acompañó a cantantes populares que, entre otros, interpretaron temas de... León Gieco y Víctor Heredia (!). Sí, la misma banda que Musa Azar utilizaba para adornar actos partidarios o para homenajear a los “protectores ilustres”, se dedicó a interpretar temas de cantautores populares explícitamente.

3. No deja de ser curioso este descentramiento de la Casa de Gobierno. Pero más extraño (¿simbólico?) aún es que el edificio del Cabildo histórico esté ocupado por la Jefatura Central de la policía de la provincia. Hay un proyecto para mudar la policía y convertir al Cabildo en un espacio turístico-cultural.

te identificados con los movimientos defensores de los derechos humanos. Era el mundo del revés. Éste fue el puntapié inicial para una política cultural como no se recordaba en la provincia. Lideradas por el folclorista "Peteco" Carabajal y por Juan Cruz Guillén, todas las artes provinciales recibieron un sostenido impulso. Se desató una primavera santiagueña que sacudió la provincia: en las plazas sonaban chacareras, las paredes se vistieron con pinturas de plásticos santiagueños, el recuperado cinemóvil recorría los caminos del interior. El centro de esta revolución fue el teatro 25 de Mayo, principal sala provincial que hasta ese momento había sido ocupada por la rama femenina y el juarismo, que abrió sus puertas al pueblo santiagueño y comenzó a recibir brillantes expresiones artísticas de la provincia y el país.

Una última línea de trabajo estuvo dirigida a dar publicidad a algunos –graves– hechos de corrupción. Un caso de amplio impacto mediático fue la recuperación de elementos robados en el Ministerio de Salud en los últimos días del gobierno depuesto. Los allanamientos de la policía permitieron recuperar comestibles, frazadas, electrodomésticos, colchones, que habían sido sustraídos de depósitos de Bienestar Social. Entre los detenidos por estos hechos había dos ex diputadas y una ex funcionaria juarista (El Liberal, 6 de abril de 2004).

Con el correr de los días se vio que la intervención había logrado superar la primera prueba que era la de estabilizarse en el poder. Desde esta posición –lograda sin pactar con los factores locales de poder y sin tener que hacer alardes de fuerza contradictorios con su perfil– tuvo las manos libres para lanzarse a realizar una acción de gobierno centrada en la re-

4. Debe recordarse que Juan Schiaretto había demorado su asunción para permitir la llegada de cientos de gendarmes, mientras que Lanusse llegó con sólo dos oficiales y diez suboficiales del Servicio Penitenciario Federal. Si bien esto dio nitidez al perfil defensor de los derechos humanos, muchos criticaron esta decisión; por un lado se tomaron riesgos exagerados (¿qué podían hacer doce hombres ante una eventual conjura del juarismo, con la policía provincial que jugaba en contra?); por otro, obligó a negociar y dar signos de debilidad en los frentes de conflictividad callejera, por ejemplo, en su relación con los usurpadores de viviendas, lo que luego le generaría al gobierno continuos dolores de cabeza.

forma institucional y la desarticulación de la alianza perversa entre el Estado y el poder económico. Había empezado el tiempo político de la intervención.

El nuevo gobierno y la política provincial

Estaba en la mente de todos los funcionarios federales desplegar un ambicioso proceso de cambio político, que pudiera ser tomado como modelo en el país.

Si bien todos acordaban en este objetivo, desde un principio hubo matices diferenciados que sirvieron para aglutinar a los diferentes referentes políticos que eran parte del gobierno interventor. Se configuraron así, básicamente, dos núcleos, cuyo origen puede rastrearse en la forma en que se había conformado un plantel de gobierno que, si bien presentaba una preeminencia del Ministerio de Justicia, tenía representantes de casi todas las jurisdicciones del gabinete nacional.

Formaban parte del primer núcleo el interventor federal y las personas que comprendían su esfera de relaciones más estrecha, muchos de ellos de perfil juricista y casi todos con escasa experiencia político-partidaria.

Un segundo núcleo se organizó alrededor de los funcionarios con trayectoria en el Partido Justicialista o que tenían relaciones con organizaciones de la sociedad civil (movimientos defensores de los derechos humanos, grupos piqueteros, etc.). Este grupo tendió a ser más inestable, y sufrió ciclos de dispersión y consolidación al calor de las internas del gobierno nacional y del Partido Justicialista santiagueño.

Los mejores momentos de la intervención ocurrieron cuando el ala más cercana al interventor dio el tono general de trabajo y el sector con mayor experiencia de gestión funcionó como locomotora de todo el Estado.

En este sentido, no debe olvidarse que estaba fresca en la memoria de la ciudadanía la intervención de Schiaretto, de la que se guardaba un pésimo recuerdo por su ostentación, por los notorios excesos en que se habían incurrido y por la sombra de graves hechos de corrupción. Lanusse aparecía como una figura contrapuesta a la del interventor cordobés, y su imagen de administrador moderado, austero y apegado a la ley era un

capital muy valioso de cara a la relación del gobierno con la sociedad.

En aquellos primeros momentos, esta impronta se combinaba de manera casi perfecta con la presencia de varios ministros y secretarios de amplia experiencia y relaciones políticas (Pablo Fontdevila en la jefatura de gabinete, Donato Spaccavento como ministro de Salud, el Vasco Ilarregui en el Ministerio de Gobierno, Luis Alén a cargo del Ministerio de Justicia, entre otros) que garantizaban la necesaria cobertura frente al mosaico en que se había convertido el peronismo. Incluso hubo una cartera —la de Hacienda, a cargo de Miguel Pesce— cuyo origen partidario permitió tener un canal de contacto con la Unión Cívica Radical.

El tercer elemento que cerraba esta conjunción casi perfecta era aportado por una serie de cuadros técnicos que se las arreglaron para poner en marcha una administración pública que tenía infinitas falencias. Al frente de esta tarea estuvo el jefe de gabinete Fontdevila, que hacía las veces de un primer ministro que asistía a todas las áreas y destrababa los problemas de gestión que surgían a cada minuto. En esta tarea la jefatura logró armar una red que contó con contrapartidas muy eficientes en casi todas las áreas: educación, acción social, obras públicas, salud, justicia, etc. Para el funcionamiento de este esquema, sorprendentemente transparente y efectivo, fue clave la tarea de un grupo de administradores gubernamentales que trabajaron en coordinación con Fontdevila en la jefatura de gabinete, la Dirección de Personal, el Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Obras Públicas y la intervención del Poder Legislativo.

Veremos cómo, con el correr del tiempo, los mismos perfiles heterogéneos que habían permitido esta articulación virtuosa fueron convirtiéndose en el fundamento de amargas divisiones... pero no nos adelantemos; por ahora quedémonos en este momento idílico de complementación casi perfecta.

5. Los administradores gubernamentales son funcionarios de carrera de la jefatura de gabinete de la Nación, expertos en temas administrativos y políticas sectoriales. Ocho de ellos trabajaron en la intervención federal.

Los actores políticos provinciales

Uno de los primeros temas que exigió definiciones se dio en relación con el poder municipal que, en su gran mayoría, había sido el canal por el cual se expresaba el poder del juarismo en el territorio.

Por un lado estaban quienes querían intervenir todos los gobiernos locales con el objetivo de romper los hilos donde podía sobrevivir o recomponerse la vieja estructura política. Por otro los que, haciendo el mismo diagnóstico, consideraban que la provincia tenía mil maneras de disciplinar estas estructuras, mientras que la intervención de los municipios sólo lograría que estos aparatos políticos pasaran homogéneamente a la oposición. Además, argüían, era necesario dar seguridad de que se abría el juego político incluso a los opositores, y no que se estaba en presencia de un neojuarismo que sólo permitiría política oficialista.

Ésta fue la tesitura finalmente adoptada, aunque siempre quedaron dudas en las altas esferas sobre si fue una decisión acertada. No tanto sobre la idea de intervenir todos los municipios (apenas había funcionarios para el gobierno provincial, ¿de dónde se sacarían personal de confianza para los veintiseis municipios y el casi medio centenar de comisiones municipales?), sino respecto de que hubiera sido necesario hacer alguna demostración de fuerza sobre los intendentes que hubieran estado más ligados al pasado juarista.⁶

Muchos de los intendentes siguieron el discurso planeado y estuvieron entre las principales espadas de la intervención federal, que así pudo jugar en los diferentes desafíos políticos en los que se involucró. Sin embargo, también es cierto que buena parte de la transformación política llevada a cabo por la intervención no llegó al ámbito local, frenada justamente por estos funcionarios.

Tal vez el caso más notorio fue el de Héctor “Chabay” Ruiz, intendente de La Banda, segunda ciudad de la provincia, quien

6. Sobre el final de la intervención federal se intervendría el municipio de Villa Atamisqui, medida originada en la convulsiva vida política interna de esa comuna.

se presentaba como hombre del presidente Kirchner, pero enfrentaba a muerte a la intervención en sus habituales recorridos por medios de comunicación del grupo Ick.⁷ La situación de Gerardo Zamora, intendente de la Capital y presidente de la Unión Cívica Radical, revestía un carácter particular. Ante la caída de Juárez quedaba como el principal referente institucional provincial, a la vez que sostenía un cierto liderazgo en las encuestas para una eventual elección a gobernador. Estos elementos favorables no lo eximían de una coyuntura que lo tironeaba desde varios lados. Había cierta afinidad con el mensaje de reconstrucción del Estado provincial fomentado por los enviados nacionales, pero ella se veía enturbiada por una serie de hechos, como su necesidad de definir un perfil propio y sostener las presiones de Zavalía, el hombre histórico del partido, que enfrentaba a la intervención y empujaba al partido en tal sentido. Como consecuencia de estos hechos, la posición de Zamora y de la Unión Cívica Radical mezcló apoyos y escepticismos hacia la intervención, incluso en aquellas ocasiones cuando se estaban jugando temas que eran de su propio interés, como fue el caso de la reforma política. Una fórmula que, a la luz de la historia que siguió después, resultó exitosa.

Otro espacio clave y conflictivo de articulación política se constituyó alrededor del justicialismo santiagueño, atomizado a partir de la caída de Juárez. En este aspecto algunos consideraban que había que sumar abiertamente a aquellos dirigentes que habían sido antijuaristas o a los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban “cruzar el Jordán” y apoyar los procesos de cambio. Otros proponían una política de prescindencia: no hacer nada en particular hacia el Partido Justicialista distinto de lo que se hacía con otros partidos. En diferentes momentos y frente a diversas cuestiones prevaleció una u otra línea de trabajo.

Desde el justicialismo hubo posiciones para todos los gustos aunque, en general, los cuadros de mayor peso y el interventor

7. Ruiz fue abucheado por la multitud cuando se “coló” entre los funcionarios federales el día de la llegada de la intervención. A partir de allí, desplegó una enconada oposición.

del partido se perfilaron más bien como opositores. El caso más notable fue el del diputado José María Cantos –aliado de Menem en 2003– que desde el Nuevo Diario y la radio LV11, otrora al servicio del juarismo, desarrolló una dura oposición a la intervención federal.

Quiénes construyeron una relación más cercana con el gobierno fueron la Multisectorial por un Nuevo Santiago y los sectores vinculados a la Universidad Católica de Santiago del Estero, afines al pensamiento del obispo Juan Carlos MacCarrone, que conformaron la llamada Mesa de Diálogo. Ambas organizaciones eran en algún sentido las más directas herederas del movimiento social que había sostenido las movilizaciones que terminaron con Juárez. Sin embargo, la debilidad con que estas organizaciones traducían su poder de movilización al ámbito electoral impidió que lideraran el proceso político y tuvieran una posición más significativa en el escenario cotidiano.

La reforma constitucional

Como ya se ha dicho, uno de los principales objetivos del gobierno de la intervención tenía que ver con producir una profunda reconfiguración de la institucionalidad política de la provincia.

En este ámbito, Lanusse hizo una jugada fuerte: lanzó la idea de que sólo la reforma de la Constitución provincial podría sentar las bases de un nuevo sistema político para la provincia. Fue una decisión arriesgada, ya que el tema podía servir para unir a una oposición que se mostraba desorientada.

La justificación conceptual no era difícil de armar: existía una obvia relación entre la estructura constitucional vigente en ese entonces y el carácter autoritario del régimen político que motivó la intervención federal. Muchos dirigentes políticos, intelectuales y actores sociales habían denunciado, primero, las constituyentes juaristas de 1997 y 2000 y, luego, la necesidad de reformar algunos engendros que estos textos constitucionales contenían.

El punto neurálgico de la reforma se hallaba en una serie de disposiciones constitucionales que reducían la importancia

electoral de las ciudades de Santiago del Estero y de La Banda a la vez que garantizaban un piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior —como era el caso del juarismo— con el 35 por ciento de los votos lograba el 70 por ciento de los diputados provinciales.

El reclamo más común de la sociedad civil era, por su parte, que la nueva Constitución prohibiera, de una vez y para siempre, la Ley de Lemas. Es que tal instrumento estaba fijado en la historia como la manera en que los partidos políticos —concretamente el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical— habían manipulado en su provecho el sistema electoral.

Más allá de estos elementos, se consideraba que todo el proceso constituyente debía funcionar como un hito en la conformación de un nuevo polo de poder donde fueran sumándose aquellos actores sociales comprometidos con el fin de la era del ilustre matrimonio y de sus posibles continuadores.

Enseguida el tema se convirtió en la piedra angular del proceso político, y el escenario se dividió entre quienes lo apoyaban, un grupo que prefirió el perfil bajo y los directamente opositores.

La primera sorpresa vino del lado del interventor del Partido Justicialista, el diputado nacional por el Chaco Rafael González, que por esos días asumía el cargo. González, primero críticamente y luego con mayor claridad, se pronunció en contra de la reforma constitucional

Este posicionamiento causó extrañeza en los mentideros políticos y una comprensible alarma en el gobierno. ¿A qué jugaba el interventor del partido? Era claro que para un cuadro que venía del más crudo pragmatismo las cuestiones doctrinarias del derecho constitucional no eran precisamente una prioridad.

En sus cercanías se justificaron sus posiciones por la necesidad de reunir a un justicialismo totalmente fragmentado, lo que causó más alarma porque si era así, el aglutinamiento sería en contra del gobierno provincial. Más sensatamente, los medios explicaron su accionar a partir de la interna Kirchner-Duhalde y sus múltiples derivaciones.

A este embate se sumaron los opositores de siempre: los restos del juarismo, los medios del grupo Ick, “Chabay” Ruiz,

el diputado José Cantos y el senador radical y ex jinete José Zavalía. De repente todos se habían vuelto filósofos del federalismo y acérrimos defensores de una autonomía supuestamente violada por los federales.

Veremos cómo la intervención federal, a partir de su popularidad, del apoyo de los intendentes y de su capacidad de generar hechos de manera cotidiana, lograba, por momentos, doblegar este frente opositor, para luego caer enredada en sus propias limitaciones y en las necesidades del gobierno nacional. Pero antes de profundizar en el tema, abordaremos muy brevemente dos áreas temáticas sobre las que pueden analizarse las fortalezas y debilidades de la intervención: los programas de construcción de vivienda social y las políticas dirigidas a solucionar el problema de la tenencia de la tierra.

La política de vivienda

En ocasiones ocurre que ciertos tópicos se convierten en emblemáticos, adquiriendo una envergadura muy superior a la que tendrían en otras circunstancias. Esto ocurrió con la temática de la vivienda social que se convirtió, durante varios meses, en un punto neurálgico de la política provincial.

Lo dicho no significa sostener que se trataba de un conflicto instalado sobre la nada, ni mucho menos. Como en casi todo el país, y particularmente en las provincias de la periferia, el déficit de la vivienda es acuciante. Aun dentro del conjunto de las provincias más pobres, Santiago del Estero es una de las jurisdicciones que presenta mayores carencias, pues ostenta los peores resultados en la razón habitantes-vivienda, y el número veintitrés entre veinticuatro jurisdicciones en lo referido a los índices de hacinamiento y de calidad de materiales de la vivienda.⁸

Los problemas habitacionales en la provincia tenían múltiples orígenes. En primer lugar, el Estado fue muy deficiente en su rol de constructor de vivienda social, básicamente por

8. Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001.

el efecto combinado de incompetencia, corrupción y desvío de fondos hacia otros rubros. El tema de la corrupción involucraba varios renglones, como la contratación de empresas a cambio de retornos y la venta de las casas sociales por parte de punteros territoriales que de esta forma financiaban sus actividades.

Denuncias acerca de este tipo de prácticas florecieron una vez que la intervención ya estuvo instalada en la provincia. Por ejemplo, una ciudadana llamada María de los Ángeles Coronel mostró un recibo fechado en enero de 2004 correspondiente a una cuota de 1.500 pesos (a cuenta de un total de 2.500 pesos) que una empleada de la Cámara de Diputados le cobraba a cambio de adjudicarle una casa en el barrio y la ubicación que ella eligiera (El Urbano, año II, N° 27, abril de 2004).

A fines de marzo de 2004, en los últimos momentos del gobierno de Juárez y las primeras horas de la intervención federal, ocurrió una ola de usurpaciones. Más de dos mil viviendas terminadas y en construcción de Capital, La Banda y el interior provincial fueron invadidas y los barrios, bloqueados por los ocupantes ilegales.

Hubo de todo. Desde acciones individuales movidas por la desesperación de familias que vieron la oportunidad (única en virtud de sus ingresos) de poder acceder a una casa, hasta invasiones cuidadosamente planificadas por los punteros políticos del juarismo en retirada. En la primera recorrida por los barrios ocupados, la intervención encontró que entre los “okupas” de la localidad de Termas de Río Hondo se encontraba una ex legisladora provincial juarista (El Liberal, 3 de abril de 2004).

El efecto de las invasiones se combinó con la inmediata agitación obrera de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), ya que las usurpaciones obligaron a detener casi todas las obras en construcción y, consecuentemente, se rescindieron los contratos de miles de trabajadores.

El escenario quedó delineado como un primer test de autoridad. El fantasma de Juárez, enviando su aparato a ocupar viviendas y a desestabilizar el gobierno de la intervención, instalándose como defensor de la autonomía contra los foráneos que venían a ocupar la provincia como anteriormente lo hiciera la intervención de Schiaretta durante 1993, se dibujó en la mente de muchos.

La intervención federal estaba ante un dilema. Si actuaba u operaba sobre los usurpadores, corría el riesgo de quedar enredado en alguna acción violenta y así perder su capital político ligado a su carácter de defensora de los derechos humanos.⁹ Además, en los primeros momentos, cuando desactivar el clima enrarecido del desembarco era la prioridad, Lanusse se fotografió con los usurpadores tomando mate y dándoles seguridades, lo que hizo imposible que, posteriormente, se negociara desde una posición de fuerza.

Además, si no se daba respuesta y permitía que se convalidara de hecho la usurpación, se daría una señal de debilidad que casi toda la sociedad santiagueña hubiera condenado. Además, como dijo un funcionario: “No íbamos a poder construir una pared sin que apareciera alguien a ocuparla”.

Entre las dos opciones, la intervención federal optó por una respuesta intermedia, que implicaba un paciente ejercicio de convencer a la sociedad y a los usurpadores de que el único camino era lograr un acuerdo entre todos los actores en disputa. Así, se generaron maratónicas y múltiples reuniones donde se escuchaban los intereses de todos los implicados y se repetía el discurso: no se convalidarían las usurpaciones, pero tampoco se enviaría a la policía a producir un desalojo compulsivo.

Con este accionar, poco a poco, la tensión fue disminuyendo.

Varios factores confluyeron para que esto ocurriera. En primer lugar, debe considerarse que el propio paso del tiempo fue consolidando al gobierno de la intervención federal y la oposición escogió el espacio institucional para enfrentarla. En particular, se observó un nítido cambio cuando el Partido Justicialista llegó a algunos acuerdos con el gobierno en el ámbito de la reforma constitucional. Con esta decisión, una parte del aparato partidario que apoyaba decisivamente a los usurpadores dejó de participar en el tema.

También ayudó a descomprimir la tensión el nuevo sistema

9. Los que criticaron la debilidad de la política de seguridad—véase el segundo apartado de este capítulo— sostenían que la envergadura que adquirió el tema de las usurpaciones eran directa consecuencia de ella.

de asignación de las viviendas ideado por el gobierno, que se arreglaba para dar a todos un poco y no dejar como perdedor absoluto a ninguno de los sectores en pugna.

Paralelamente, se sacaron a sorteo público y transparente todas las viviendas construidas o en construcción. Fue un evento de mucho impacto en la sociedad, puesto que hacía más de veinte años que no se conocía un caso de asignación de vivienda sin recomendación política. En la etapa juarista, los beneficiarios venían directamente de la oficina del gobernador, que cuotificaba entre sus leales las viviendas a asignar.

Muchos no lo podían creer; la joya más preciada del aparato clientelar se entregaba así, libremente, sin pedir nada a cambio...

Por último, fueron cruciales las respuestas dadas desde la política de obra pública, iniciando de inmediato obras que separaron del problema a la UOCRA y anunciando un explosivo aumento de la inversión en el sector (más del 150 por ciento, hasta los 100 millones de pesos). Este nivel de gasto permitió el inicio de la construcción de casi siete mil viviendas durante 2004, casi quintuplicando las 1.674 que se construyeron durante 2003.

Había otra dimensión del problema, que parecería ridícula si no fuera porque ponía en jaque la organización urbana: la construcción de viviendas durante el juarismo no contemplaba la infraestructura asociada. De esta forma, la intervención federal encontró que casi todos los servicios básicos se encontraban colapsados y debió aplicar a estos temas –saneamiento ambiental, agua, electricidad, gas, etc.– muchos más recursos que los que se hubieran involucrado si sólo hubiera habido que trabajar sobre las viviendas que estaba construyendo.

El resultado final de la política de vivienda social de la intervención federal dejó varios puntos positivos. Se logró dejar instalado un sistema transparente de asignación, así como también quedó vigente un plan de construcción funcionando a todo vapor. En cuanto a los aspectos negativos, es de resaltar que cuando la intervención federal traspasó el gobierno quedaba un remanente de usurpadores que no habían regularizado su situación.

El problema de la tierra

Otro punto crítico que debió enfrentar el gobierno estaba relacionado con la problemática de la tenencia de la tierra, situación que en Santiago plantea conflictos cuya gravedad no guarda similitud con los que tiene provincia alguna. Vaya un primer dato al respecto: mientras que en todo el país el porcentaje de la población rural es del orden del 10 por ciento, esta proporción llega en esta provincia a aproximadamente el 40 por ciento del total de los habitantes.

El tema –que tenía existencia latente– tomó estado público hacia mediados de los 90, cuando en la zona comenzó la producción masiva de soja a favor de un proceso de cambio climático y ciclo húmedo provincial combinado con el desarrollo de variedades genéticas de alto rendimiento con baja humedad. La revalorización de la tierra santiagueña –las mejores superficies rondan los 450 dólares por hectárea, precio comparable al de la pampa húmeda– terminó generando que poblaciones campesinas de bajísimos ingresos quedaran viviendo en espacios de importante renta potencial.

En muchísimos casos, las familias que habían ocupado tierras por generaciones tenían dificultades para documentar su propiedad. Es que para los que no tienen regularizada su situación dominial, la Ley de Prescripción Veinteañal tiene una gestión muy compleja y su utilización requiere de costoso asesoramiento legal y catastral. Esta situación hace que muchas veces los campesinos poseedores de derechos inmemoriales sean injustamente desalojados.

Esto puede ocurrir porque existe toda una serie de dificultades para la defensa de sus derechos por parte de las distintas oficinas del Estado ocupadas en el tema, que en algún punto hacen pensar en complicidad. Los problemas empiezan con un sistema registral y catastral cuya documentación referida a varios millones de hectáreas es controversial y sigue con la policía de la provincia que, al igual que la Justicia, ha sido reiteradamente denunciada por ayudar al desalojo de campesinos.¹⁰

10. Hay decenas de denuncias de pequeños propietarios que recibieron cédu-

Como si todo esto fuera poco, en septiembre de 2000 la mayoría "juarista" de la Legislatura consagró una operatoria que posibilitaba el desalojo inmediato de las familias campesinas acusadas de ser intrusas ante el solo pedido del supuesto dueño y con el único requisito de que el derecho invocado fuera verosímil. Cabe destacar que la urgencia con que fue aprobada la ley no fue ingenua, ya que por esa época se estaban invirtiendo grandes sumas de dinero en la compra de tierras.

Pero el problema de la tierra en Santiago del Estero no tiene una sola dimensión. La reconversión del campo santiaguense implicó el ingreso de agentes económicos con una lógica de maximización de ganancias en el cortísimo plazo, lo que ha significado desmontes indiscriminados e ilegales que han generado un profundo daño ambiental con importantes pérdidas y fragmentaciones del ecosistema local.

De esta manera, la renta potencial de los suelos provinciales puede desvanecerse en menos de cinco años ya que la mayoría de las tierras, una vez producido el desmonte, son muy proclives a irreversibles procesos de desertización.

Otra arista de esta cuestión tiene que ver con el impacto que toda esta situación está teniendo en la estructura demográfica provincial. Es que la falta de resolución del problema campesino termina impactando sobre la situación del llamado "Gran Santiago", principal destino de la población expulsada del campo. Como resultado de estos hechos, durante el tiempo intercensal 1991-2001 la población del Gran Santiago se elevó en más de 25 por ciento, casi el doble del incremento demográfico del resto de la provincia.

Los habitantes que llegaban desde el campo a la capital provincial incrementaron exponencialmente el cinturón de pobreza del Gran Santiago. La labilidad de este núcleo poblacional lo hace el principal objetivo de las prácticas clientelares que, huelga decirlo, eran gestionadas por el aparato político oficialista y ejecutadas por la administración pública. En

las de notificación policiales exigiéndoles su presentación por "motivos que oportunamente se le harán conocer", siendo luego intimidados y hasta detenidos como forma de facilitar la ocupación de sus tierras. Al respecto véase el informe realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Secretaría de Derechos Humanos, 2003).

suma, el fenómeno no sólo tenía consecuencias económicas y sociales sino que afectaba de manera directa el sistema político provincial.

Enfrentar la problemática agrícola era (y todavía es) todo un desafío hacia el futuro. En la peor pesadilla, podría repetirse la maldición del quebracho, con la exhaustiva utilización de campos para el cultivo de soja transgénica y el abandono de tierras inutilizadas por la desertización una vez que han dado una ganancia explosiva.

Uno no puede menos que preguntarse cómo podría hacer un Estado con capacidad de gestión casi nula y colonizado por los grupos de poder provinciales para regular una actividad cuyo epicentro se encontraba a varios cientos de kilómetros de la capital provincial (en la frontera con Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta) y que involucraba a actores que eran verdaderos "pesos pesados" del orden nacional.

A priori, podía pensarse en potenciar al campesinado como actor social, de forma que peleara por incorporar parte de la renta sojera y de esta forma generar un efecto derrame sobre una producción que, de otra manera, casi no tenía impacto sobre el aparato productivo provincial. De igual modo, podía soñarse con un sistema de capacitación y sensibilización que hiciera de este estrato social el custodio de la capacidad ecológica de la tierra provincial, ya que sus intereses como propietarios, en el largo plazo, están en línea con la protección del sistema del monte.

Lo dicho da una idea de las dificultades que se enfrentaron y que todavía se enfrentan. Recuérdese que esta población campesina es de las más pobres con que cuenta el país y que su organización, aun con el representativo MOCASE a la cabeza, es relativamente reciente.

La intervención tomó una serie de medidas que fueron saludadas por los más diversos grupos de defensa de la tierra como acertadas.¹¹ Entre ellas, se destaca la promulgación de la

11. Véase, por ejemplo, "La soberanía alimentaria echa raíces en el corazón de la patria", documento del Grupo de Reflexión Rural, 29 de junio de 2004, www.gr.org.ar.

ley 6.657, que estableció la suspensión de desmontes por seis meses, una nueva zonificación de las áreas autorizadas para desmonte, el control de la reposición de las "cortinas" forestales y la gestación de un cuerpo de guardabosques voluntarios que ya ha incorporado sus primeros cuadros. Adicionalmente, puso en funcionamiento el Observatorio de Derechos de las Comunidades Campesinas, una institución que fomentó la articulación y participación de todos los sectores involucrados en la reivindicación de los derechos del campesinado (MOCASE, mesas de tierras locales y provincial, ONG, técnicos, etcétera).

Todos estos elementos fueron muy alentadores, pero quedaron varias materias pendientes, como la ley de tierras que no pudo terminar de consensuarse.

En resumen, tanto en este tema como en el caso de la vivienda, así como en tantos otros que por razones de espacio no podemos tratar, la intervención federal inauguró líneas de trabajo que dejaron batallas políticas, legislativas, sociales y judiciales pendientes. Es mucho lo que se avanzó, sobre todo tomando en cuenta que el gobierno de Lanusse duró menos de un año. La continuidad de las políticas de cambio está indisolublemente atada al decurso del proceso político de los próximos años.

CAPÍTULO 6

La intervención federal (segunda parte): la retirada

Las crisis sucesivas: cuando la historia
cambia de rumbo

De repente el clima de fiesta que vivían los federales comenzó a enrarecerse. Mientras que en el movimiento social la reforma constitucional generaba una energía desbordante, en el equipo de la intervención campeaba un ambiente de desconfianza y recelo. ¿Qué había pasado?

Todo empezó cuando las diferencias ideológicas y de origen se hicieron notorias a partir de que la interna peronista exigió definiciones a funcionarios que, como vimos, tenían lealtades tironeadas por los distintos ministerios nacionales y las disímiles agrupaciones de donde provenían. De esta forma, se terminó mellando el espíritu de epopeya que en un principio había neutralizado las tensiones que inevitablemente debían surgir en un equipo tan heterogéneo.

Las operaciones cruzadas provocaron una creciente suspicacia, lo que terminó generando que el interventor diera creciente poder a su núcleo más cercano como manera de mantener el control de una situación que parecía irsele de las manos. Rápidamente se vio que este núcleo no tenía capacidad para liderar la tarea conjunta; no tenía ascendiente partidario, ni experiencia en el movimiento social, ni conocimiento técnico o académico; sólo eran eso, personas de confianza del interventor.

En particular, Lanusse se recostó sobre José María Otamendi, secretario general de la gobernación, cuyas continuos

desaciertos hicieron las delicias de la prensa amarilla. Cuando Otamendi se vio en ridículo, tomó la peor decisión: esconder sus limitaciones detrás de una verdadera caza de brujas hacia todos los que, según su opinión, amenazaban el liderazgo del interventor.

La estrategia no sirvió para cambiar la imagen del secretario general; por el contrario, en el rol central en el que fue colocado se hicieron más notorios los fracasos y papelones que no se cansó de recolectar. Pero la ola de renuncias, despidos y traslados que se propiciaron a la sombra de su política de persecución bajó notoriamente la productividad de la administración y debilitó la capacidad de respuesta política en un momento clave del gobierno.

Para muchos, el enemigo dejó de ser el juarismo, la pobreza, el subdesarrollo político, para posicionarse en la oficina de la Secretaría General, del ministro de Gobierno, de Salud o en la Jefatura de Gabinete, según el grupo al que cada funcionario perteneciera. De esta forma fue perdiéndose la mística que solidificaba al conjunto y que hubiera sido esencial para enfrentar los duros momentos que se avecinaban. Como dijo alguien: "Al final, dejo a mi familia, viajo mil kilómetros todas las semanas para pelearme con un tipo que vive a menos de veinte cuadras de mi casa en Buenos Aires ¿Qué sentido tiene?".

Entiéndase bien; el funcionamiento del aparato del Estado siguió siendo apropiado, la intervención federal mantuvo su altísima imagen positiva y la mayoría de la población consideraba preciso que se alargara su mandato en la provincia, a pesar del bombardeo de los medios ligados al grupo Ick. Pero muchos de los que seguimos de cerca todo el proceso político pensamos que en este corto período que no duró más que un par de meses se frustró la posibilidad de alcanzar un giro decisivo en la esfera política provincial.

Claro está que las causas de la déttente en el proceso de transformación no deben buscarse exclusivamente en las dificultades del equipo interventor para procesar las múltiples presiones internas y externas; también fue notorio que en la agenda política del gobierno nacional la reforma institucional que Lanusse había colocado en el centro de su gestión no ocupaba un lugar central. El movimiento social santiagueño, por su parte,

si bien mostró una vitalidad y capacidad de movilización asombrosa, no tuvo la madurez necesaria para liderar la coyuntura política. En suma, la transición democrática quedó en un estadio inferior al que se soñaba alcanzar.

Todas estas especulaciones se harían después. En ese momento nada parecía importar al grueso de la población, que había adoptado como bandera un proceso preconstituyente que avanzaba a paso firme.

No sólo las encuestas arrojaban un notorio apoyo al proyecto reformista; los intendentes peronistas de Santiago del Estero, alineándose con el gobierno, dijeron que se trataba "de una prioridad" y que debía realizarse "antes de las elecciones generales a gobernador, vice y diputados provinciales". Hasta el propio interventor del Partido Justicialista, que había buscado las excusas más inverosímiles para oponerse al proceso reformista, no tuvo más remedio que variar su posición y establecer una estrategia para presentar la lista de constituyentes respectiva.

En este marco, comenzaron a desarrollarse una serie de crisis que cambiarían la correlación de fuerzas en la provincia. Fueron siete u ocho semanas agobiantes que demolieron la capacidad de respuesta de la intervención, ya desgastada por el despiadado juego interno.

No casualmente, la crisis que se desplegaba pari pasu hacía sentir las consecuencias de la retirada de Gustavo Beliz del gabinete nacional. El hasta ese entonces ministro de Justicia había sido el mentor del interventor y su salida dejó a Lanusse a tiro de las internas del gabinete nacional. Si por regla general los gobiernos provinciales registran de manera cotidiana el peso de la Nación, en una intervención federal un cambio como el ocurrido no podía menos que alterar todos los equilibrios internos, máxime cuando se ingresaba en la etapa de las grandes definiciones políticas.¹

1. Sugestivamente, Beliz ya había protagonizado una historia similar. En ocasión de la intervención federal a la provincia de Corrientes en 1992, el en ese entonces ministro de Interior había liderado un intento por sepultar al Pacto Autonomista Liberal como fuerza hegemónica provincial. Expulsado Beliz del gobierno nacional, la intervención cambió de estrategia –tratando de impul-

El paraguas nacional, que había servido para cohesionar al equipo de trabajo, ahora tenía el efecto contrario: multiplicar las diferencias. En este sentido, se escuchaban voces que asignaban a Aníbal Fernández, ministro del Interior, la intención de jugar a mantener la provincia como peronista, mientras que se señalaba al jefe de gabinete, Alberto Fernández, como propenso a apoyar al intendente y candidato radical Gerardo Zamora.²

Como podía esperarse, el primer emergente grave del nuevo escenario tuvo como epicentro la cartera política de la provincia, el Ministerio de Gobierno.

El detonante fue una reunión de trabajo de todo el equipo de la intervención federal en el Club de la Policía de Santiago del Estero (COPSE). En este encuentro hubo un entredicho entre Lanusse —quien planteó que, siguiendo las instrucciones dadas por el presidente, a él no le importaba el color político de quien ganara las elecciones— y las segundas líneas del Ministerio de Gobierno, que replicaron: "A nosotros sí nos importa: somos peronistas y queremos que gane el Partido Justicialista".

El entredicho terminó con la salida del ministro de Gobierno, el Vasco Illarregui, puesto que el interventor consideró que no podía dejar indemne una desautorización a su poder en momentos en que se estaban definiendo los equilibrios internos del gabinete provincial.

Fue una importante pérdida para la intervención, en tanto Illarregui era un rara avis dentro de la militancia política, capaz de tener diálogo con todos en un gabinete tan heterogéneo y también capaz de sumar a los intendentes y de aislar al juarismo dentro del Partido Justicialista.

El siguiente problema se desató hacia el cierre de la presentación de las listas de candidatos a convencionales constituyentes. Las tensiones dentro del justicialismo y las distintas políticas que se proponían desde el ala peronista de la inter-

sar un pacto peronista-radical— para terminar convalidando el triunfo del "Tato" Romero Feris, un emergente del autonomismo liberal aliado de última hora de Menem y de su proyecto de reforma constitucional.

2. Por esa fecha se estaban dando los primeros pasos de la "estrategia K" por acercar al gobierno nacional a un importante sector del radicalismo.

vención y del interventor del partido hicieron que la lista del Partido Justicialista se partiera en dos.

Por un lado quedó la nómina oficial, con mayoría de los sectores abiertamente opositores al gobierno. Por otro, una lista que, en nombre del kirchnerismo, estaba hegemonizada por los intendentes —como se dijo, de pasado juarista pero ahora cooptados por la intervención— y que contaba con la participación de Memoria y Movilización. Ésta era una agrupación que articulaba al partido provincial Memoria y Participación (ver capítulo 4) con sectores ligados al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde. Participaban de Memoria y Movilización Luis Alén y Fernando Rinaldi, respectivamente ministro de Justicia y secretario de Derechos Humanos de la intervención de la provincia.

La lista disidente fue también propiciada por los ministros de la intervención con más juego dentro del justicialismo (Daniel Gurzi, que reemplazó a Illarregui en Gobierno; Donato Spaccavento, en Salud y Acción Social, y Pablo Fontdevila, en la Jefatura de Gabinete) y operada por el viceministro del Interior, Rafael Follonier, que bajó a la provincia a bendecirla. Enseguida el oficialismo del Partido Justicialista acusó a los jefes comunales de traición, quienes se defendieron sosteniendo que la traición la habían consumado que, como el interventor del justicialismo, habían armado la lista oficial con juaristas y allegados al poder económico.

Para algunos fue una jugada maestra, pues aislaba al juarismo y sus aliados y los exponía a una catastrófica derrota electoral. Para otros, entre ellos Lanusse, era un despropósito que sacaba al gobierno provincial de su rol prescindente en las lides partidarias. Así fue como el interventor federal, que estaba en Buenos Aires en ocasión del cierre de listas, regresó para desautorizar toda la operación: "Fue una equivocación que no avalo, no comparto, ni apoyo". Fontdevila debió volver sobre sus pasos y reconocer que "fue un error" y que había actuado sin el consentimiento del gobierno (Nuevo Diario, 16 y 17 de septiembre de 2004).³

3. Cabe acotar que, según diferentes fuentes, la presencia de Lanusse en Buenos Aires el día en que cerraban las listas no fue casual. Estas mismas fuentes

La candidatura de la lista renovadora entró en una situación de inestabilidad cuando ocurrió el affaire del ministro Daniel Gurzi, tercera crisis consecutiva, un verdadero mazazo sobre el gobierno.

Dos de los funcionarios más cercanos del ministro fueron destituidos por Lanusse, acusados de haber pedido “colaboraciones” para la campaña electoral del Partido Justicialista disidente, y se dio instrucciones a la Oficina Anticorrupción para que se investiguen estos hechos (decreto 351/04). Daniel Gurzi se vio forzado a renunciar.⁴

Como consecuencia de lo sucedido, la relación con el Ministerio del Interior de la Nación y con buena parte del aparato del Partido Justicialista —que ya no era buena— se tensó al máximo. El siguiente ministro de Gobierno tardaría largas semanas en hacerse cargo, no tuvo el aval de ninguna cartera nacional y se caracterizó por no poseer como background ningún tipo de relación con los partidos políticos locales.⁵ El golpe que terminaría por transformar el escenario político ocurrió hacia finales de septiembre, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin definirse sobre el fondo de la cuestión, hizo lugar a un amparo presentado por el senador radical José Zavalía para suspender el proceso de reforma constitucional de la provincia.⁶

sostienen que la operación de dividir el Partido Justicialista fue chequeada telefónicamente con el interventor. A su vuelta, fue convencido de que había sido un error y lo denunció diciendo que estaba “sorprendido”.

4. En sus considerandos el decreto expresaba que “funcionarios del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Culto han violado expresas instrucciones” del interventor en cuanto a la prescindencia y que “asimismo se ha tomado conocimiento de la existencia de hechos vinculados con el funcionamiento de dicha Cartera [el Ministerio de Gobierno] que podrían configurar delito de acción pública”. La causa judicial abierta a los efectos de investigar estos hechos sobrepasó a todos los imputados.

5. Asumió el cargo Roberto Azaretto, proveniente del Partido Demócrata de la Capital Federal, un histórico aliado de la Unión de Centro Democrático (Ucedé) capitalina. Su mayor capital era que no iba a generar problemas con el Partido Justicialista.

6. Resolución de la Corte Suprema, autos Zavalía José sobre recurso de amparo contra el gobierno de la intervención federal en Santiago del Estero, 21 de septiembre de 2004.

Fue una verdadera sorpresa, ya que el proyecto reformista parecía recibir el total respaldo del presidente Néstor Kirchner, del Parlamento nacional⁷ y de los principales ministros nacionales. Es difícil considerar que la unánime decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también la seguidilla de hechos que venimos relatando, hubieran ocurrido si la intervención hubiera logrado armar un anclaje en el gabinete nacional.

Pero, por el contrario, la intervención y la Nación iban por carriles cada vez más separados. Recordemos que por esa fecha el gobierno nacional estaba construyendo la estrategia política que lo llevaría al contundente triunfo electoral de octubre de 2005. Esta estrategia comprendía terminar con las políticas de tensión hacia el Partido Justicialista y así aislar al sector del justicialismo bonaerense que era leal al ex presidente Duhalde. En ese marco la reforma institucional no cosechaba muchos adeptos en el gabinete nacional, y sólo podía tener viabilidad si el movimiento social santiagueño lograba consolidar una masa crítica que le diera autonomía del apoyo de Buenos Aires.

El interventor tampoco podía recostarse sobre la Unión Cívica Radical, donde se temía que una candidatura surgida del movimiento social diluyera la preeminencia electoral que las encuestas le daban al intendente capitalino Zamora. Más aún, cuando el gobierno nacional no se mostraba particularmente molesto por un eventual triunfo de este partido en las elecciones de gobernador.

El 26 de octubre, y para demostrar aquello de que las desgracias vienen todas juntas, Lanusse se resbaló en el baño de la habitación que ocupaba en el hotel Centro, y sufrió traumas de cráneo y de tórax. Si bien con el correr de las horas se fue disipando el rumor que le adjudicaba un grave estado de salud, debió guardar reposo durante cuarenta y ocho horas y, en el marco de un escenario erizado de conflicto, ello significó otro sobresalto. Por esos días, también ocurrió un confuso he-

7. Un proyecto de declaración en contra de la reforma constitucional presentado en el Senado de la Nación por el senador radical Zavalía había naufragado con bastante pena y poca gloria.

cho que involucró a la hermana del interventor, quien, se dijo, estuvo secuestrada.

Para completar el panorama, la justicia federal de la provincia —reiteradamente acusada de connivencia con el juarismo— excarceló al “protector ilustre” y múltiples rumores de renuncias en el gabinete y aun del interventor federal recorrían los mentideros políticos.

El canto del cisne del movimiento social

Entonces sucedió un hecho sin precedentes en la historia de Santiago del Estero. Alrededor de veinte mil personas —una de las marchas más masivas que se recuerde— se reunieron espontáneamente el 22 de septiembre en la plaza Libertad.

A diferencia de lo que era acostumbrado en la provincia, la movilización no estuvo sostenida por la leva forzosa de reparticiones públicas, ni por la promesa de planes sociales, ni por amenazas sobre la continuidad en el empleo público. Tampoco se propagandizó con la distribución de bolsones de comida y bebidas alcohólicas. Fue un hecho espontáneo que surgió de una sociedad civil consternada ante la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La marcha, que transitó las calles céntricas y desembocó en la Casa de Gobierno, terminó con reiteradas ovaciones al interventor federal, quien el final del recorrido salió a mezclarse con la multitud. Fue un error, porque dio la imagen de que el gobierno acompañaba al movimiento social en su fuga hacia adelante, cuando en verdad la intervención ya estaba preparando su retirada. Premonitoriamente, alguien que conocía lo asimétrico de la situación aventuró que el gesto de Lanusse iba a ser recordado como las “felices pascuas” de Alfonsín.

Pero el movimiento social no se detuvo: inmediatamente, y sobre la base de una idea del escribano Gustavo Yocca, un activo empresario vinculado a El Liberal y propietario de Radio Exclusiva, organizó de la mano de siete entidades intermedias —Cámara de Comercio e Industria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Pastoral Social de la Iglesia, Federación de Profesionales Universitarios, Círculo Santiagueño de Edu-

cadores, Radio Exclusiva y diario El Liberal— una campaña de recolección de firmas por la reforma de la Constitución. Las 102.632 adhesiones obtenidas en sólo veintidós días —fiscalizadas por la Fundación Poder Ciudadano— sorprendieron a propios y extraños.

Pero toda esta energía ya no tenía forma de torcer los hechos. Los diferentes escenarios donde se desarrollaba el drama de la política santiagueña daban un saldo negativo para el proceso de cambio político. Entre la Nación que estaba en otra cosa y el movimiento social decidido a redoblar la apuesta, la única oportunidad se cifraba en la habilidad del gobierno provincial para encontrar un sendero de salida. Pero las continuas crisis y los desafortunados manejos internos habían demolido su capacidad de respuesta.

No debe perderse de vista que la situación de la intervención federal había cambiado de repente; así como había podido enfrentar sin fisuras al aparato partidario-económico del juarismo porque ninguno de sus miembros era un vocero de peso de la corporación política nacional, en la etapa de crisis no tuvo ningún referente que lograra frenar las múltiples operaciones y agresiones que desde mediados de año se desataron sobre su gobierno.

En los inicios de noviembre hubo una tensa reunión de gabinete donde Lanusse puso en consideración de sus colaboradores la posibilidad de renunciar. Apoyado por la mayoría de sus ministros, optó por quedarse a tratar de preservar algo del proceso de cambio que él había ayudado a desatar, aunque ahora claramente sin la energía como para dar vuelta un escenario armado para detenerlo.

A decir verdad, desde este punto, sólo fue un intento de hacer una retirada lo más ordenada posible.

Hacia las elecciones normalizadoras

Sin aire para aspirar a extender por segunda vez su mandato, la intervención federal ajustó el cronograma electoral al poco tiempo que le quedaba en el gobierno. Esto implicó que, para poder respetar todos los plazos para presentación de candidatos y listas y recuento de votos, las elecciones internas se

planificaron para principios de diciembre de 2004 y las elecciones generales a gobernador y diputados provinciales para el 27 de febrero del año siguiente.

Ante estos anuncios, la reacción fue de incredulidad. ¿La intervención se retiraría sin dar más pelea? Sobraban los rumores; el más escuchado era: "Es todo una cortina de humo, en pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide positivamente sobre el fondo de la cuestión en la reforma constitucional y, con el aval de Kirchner, el gobierno se queda hasta octubre".

No sólo era una expresión de deseos, sino que parecía lo más razonable. ¿El presidente permitiría que se truncara el proceso de cambio que él mismo propiciara, así, como si nada? Si había intervenido, entre otras cosas, como una señal a Eduardo Duhalde y al Partido Justicialista bonaerense, ¿se arriesgaría a lanzar una elección donde sus fuerzas estuvieran desorganizadas? Además, ¿no era un completo desatino desarrollar una campaña electoral durante el verano santiaagueño?

Si tener respuestas a estos interrogantes, pero con la idea de que todavía quedaban batallas por librar, el movimiento social presentó —a través del defensor del pueblo designado por la intervención federal, el ex sacerdote y dirigente de Memoria y Participación Enrique Hissé— un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia Provincial a los fines de que modificara las cláusulas de la Constitución provincial que dividía a la provincia en circunscripciones electorales.

Como vimos, esta cláusula de la vieja Constitución juarista tenía el objetivo de garantizarle una mayoría abrumadora en la Legislatura provincial por la vía de sobrerrepresentar los distritos rurales del interior en detrimento de Capital y Banda, donde el voto al caudillo era minoritario. Pero el recurso presentado tenía el efecto adicional de poner en jaque todo el cronograma electoral, ya que cualquier suspensión relativamente larga no permitiría desarrollar los tiempos legales necesarios para realizar las elecciones sin alargar el mandato de la intervención federal.

El pedido de amparo fue rechazado por los candidatos Gerardo Zamora, "Chabay" Ruiz y José Cantos, y el interventor del Partido Justicialista Rafael González. La intervención, ya

en plena retirada, apareció de pronto alineada con sus históricos enemigos y se opuso de plano al recurso presentado. El propio interventor Lanusse realizó declaraciones periodísticas considerando un "disparate" el planteamiento realizado (Nuevo Diario, 30 de octubre y 3 de noviembre de 2004).

Sin embargo, debió volver sobre sus pasos cuando el Supremo Tribunal, a pesar de la evidente contrariedad del "prescidente" Lanusse, suspendió las elecciones hasta definir la situación. En esa instancia, a despecho de las declaraciones altisonantes, la intervención federal aceptó la medida y se allanó a las pretensiones de inconstitucionalidad planteadas.

Fue una carrera contra reloj donde se sintió la presión del gobierno a fin de obtener una respuesta que no entorpeciera un cronograma electoral que, como vimos, estaba muy ajustado. Finalmente, el Supremo Tribunal se expidió en forma favorable a las pretensiones del defensor del pueblo y de las organizaciones sociales, anulando las circunscripciones e intimando a la intervención a modificar el cronograma electoral y a convocar las elecciones por distrito único y por el sistema D'Hont. La dilación de los plazos dio justo para sostener las elecciones generales, pero obligó a cambiar la fecha para la interna partidaria que quedó para un insólito 9 de enero.

Fue una victoria a medias del movimiento social. Aunque se lograba cambiar uno de los elementos más distorsivos del régimen electoral, ya no habría impedimentos para una normalización que se consideraba prematura pues todavía quedaba en pie lo sustancial del régimen juarista: la estructura política clientelar, la corrupción, la concentración económica. Justamente, los motivos fundamentales de la intervención a la provincia.

En este aspecto, crecía día a día una sensación de desazón porque los candidatos que pugnaban por la gobernación eran viejas figuras que no representaban el cambio soñado y, por el contrario, significaban la vuelta al pasado.

La interna peronista del 9 de enero de 2005, como un regalo de reyes y en medio de un sofocante calor, se dirimió entre Francisco "Pancho" Cavallotti —que levantaba los nombres y las realizaciones del "matrimonio ilustre"—, el diputado José María Cantos, considerado el verdadero heredero de Juárez por la forma de conducción autoritaria que estaba construyendo, y

José “Pepe” Figueroa, viejo conocido por haber sido ministro de Desarrollo Social de Menem y uno de los dueños del fraudulentamente quebrado banco Iguazú. Como pronto estaba por verse, elegir entre estos tres candidatos fue como si el justicialismo se suicidara.

Los comicios internos fueron lo mismo de siempre: una desembrozada pelea de aparatos que traían y llevaban gente que vendía su voto por comida, agua, colchones o directamente dinero. Las encuestas previas daban ganador a Cantos, que incluso sobre el cierre de los comicios, creyéndose ganador, hizo declaraciones acerca de su limpieza. Pero cuando avanzaba el conteo de votos y quedó claro que había perdido por estrecho margen, el “Malevo” Cantos, tal como lo bautizaron por el aludo sombrero que siempre porta, hizo uno de esos papelones que de tanto en tanto nos regala la clase política nacional. Fue similar al ridículo que hizo Domingo Cavallo cuando no aceptó la derrota contra Ibarra o la de Adolfo Rodríguez Súa cuando dio como prueba de su triunfo en las presidenciales de 2003 los resultados de una sola mesa en la costa bonaerense.

Cantos tenía un problema: no podía denunciar el uso del aparato para obtener votos por parte de “Pepe” porque él había hecho exactamente lo mismo. Y en cuanto al recuento de votos, sólo él decía que había ganado ya que todos lo desmentían, incluso sus propios candidatos, que lo fueron abandonando uno a uno. El único apoyo a sus denuncias era el Nuevo Diario... propiedad del mismo candidato. Finalmente Cantos, ofendido, apoyaría subterráneamente a Zamora en las elecciones a gobernador.

Si algo tuvo de bueno la interna peronista fue mostrar que el juarismo sin el Estado detrás es una fuerza política menor. Así, su candidato “Pancho” Cavalloti no llegó a alcanzar el 20 por ciento de los votos de la interna: un fiasco absoluto para quien había ganado las últimas elecciones provinciales con casi el 70 por ciento de los sufragios.

El pleito interno justicialista parecía terminado con el triunfo del menemista Pepe Figueroa, que rápidamente se convirtió en un kirchnerista y fue apoyado por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y algunos ministros de la intervención federal, ante el prescendente Lanusse, que tuvo que mirar muchas veces al costado. La candidatura de Figueroa tenía su

punto fuerte en los principales distritos del interior, donde la red de viejos punteros juaristas, intendentes y comisionados municipales le auguraban el triunfo.

Sin embargo, el favorito era el radical Gerardo Zamora, intendente de la ciudad capital. Su silencio –para los suyos, una actitud prudente– ante las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el juarismo y la concentración económica era mal visto por quienes apostaban al despegue de la provincia. Sin embargo, su imagen joven, prolija, de buen administrador, lo colocaba en primer lugar en todas las encuestas provinciales y nacionales realizadas, situación favorecida por el contraste de su figura con la del viejo conocido Pepe Figueroa, candidato “kitsch(nerista)”. De todas formas, como ya dijimos, el candidato radical tuvo el apoyo de varios sectores peronistas de la provincia y de parte del gobierno nacional.

El tercero con alguna pretensión real, aunque muy lejos de los anteriores, era el intendente de la ciudad de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz. Escindido del viejo tronco radical, ex partidario del Chacho Álvarez, se autotituló “el hombre del presidente” para referirse a su vieja relación con el señor K, deteriorada por su vinculación al poder económico y su oposición frontal a la intervención federal.

Mientras tanto el movimiento social, por falta de experiencia y de tiempo para concretar sus buenas intenciones, no pudo traducir todo su dinamismo en una opción política. Los que quisieron representarlo políticamente se diluyeron entre su incapacidad para reunirse, sus escasos recursos económicos y su dificultad para insertarse en los sectores populares, especialmente en el extendido interior rural.

De la multiplicidad de siglas partidarias, la que se presentaba a priori como con más posibilidades fue Izquierda Unida, compuesta mayoritariamente por los militantes de la agrupación Teresa Vive. Esta organización mostraba una amplia capacidad de movilización urbana y tenía un pasado frontalmente opositor al régimen juarista, lo que le daba plafond para aspirar a un lugar en la Legislatura provincial gracias al nuevo sistema electoral.

El triunfo de Zamora

Luego de una campaña multimillonaria en gastos mediáticos pero pobre en ideas y propuestas, llegó el 27 de febrero de 2005. Si bien Zamora seguía siendo el favorito, en los últimos días se hablaba de que Figueroa venía creciendo fuerte en la preferencia de los votantes.

Para muchos parecía imposible que Pepe tuviera semejante desempeño. Todavía estaban frescas las encuestas que le daban casi 60 por ciento de imagen negativa y una intención de voto de apenas un dígito. ¿Era posible que hubiera ocurrido tal milagro? Más sugestivamente, ¿qué tipo de democracia era ésta que, aparato mediante, podía entronizar a quien tenía tan poco consenso de la ciudadanía?

Los resultados electorales sepultaron, a medias, estos interrogantes. Ganó la fórmula del Frente Cívico —compuesta por Gerardo Zamora y Emilio Rached (intendente de la ciudad de Pinto)— por una diferencia de un poco más de veinte mil votos sobre el binomio integrado por Pepe Figueroa y el intendente de la ciudad de Frías, Humberto Salim. En tercer lugar y con apenas treinta mil votos se ubicó el Movimiento Viable de Héctor “Chabay” Ruiz. Ninguno de los partidos restantes alcanzó los votos necesarios para obtener una banca en la Legislatura; a Izquierda Unida, cuarto partido en la preferencia de la ciudadanía, le faltaron mil quinientos sufragios para llegar a un representante.

Como se esperaba, el triunfo de la fórmula del Frente Cívico fue amplio en todos los barrios de la Capital y de La Banda, muchos de ellos bastiones de las “quijotas con faldas” de Nina Juárez. También ganó, pero en forma más estrecha, en otras ciudades importantes como Añatuya, Las Termas, Quimilí.

Por su parte, Figueroa acortó sensiblemente la diferencia en el interior rural más empobrecido, aunque no de manera tan amplia como pronosticaban los que le daban chances de triunfo. Muchos de los adúlados jefes territoriales, los saltimbanquis intendentes, fueron derrotados por la gente que recibió los bolsones y se subió a los remises del “aparato”, pero votó por Gerardo Zamora.

Figueroa recién reconoció su derrota al día siguiente del acto comicial atribuyéndola a la traición de algunos intenden-

tes y “punteros” justicialistas, y entre ellos mencionó a los intendentes de Clodomira y Las Termas. Algo había de cierto; tanto los sectores que apoyaban a Cantos como los restos del Partido Justicialista que seguían respondiendo a Juárez votaron por Zamora. Sin embargo, no fue ésta la razón de su derrota: todo el espectro justicialista sabía que en tres meses de campaña era muy difícil cambiarle la cara a quien era identificado con los peores valores de los 90.

Y aquello por lo que muchos esforzados militantes radicales habían trabajado, lo que parecía imposible hasta hacía pocos años, ocurrió nomás: después de más de cuarenta años un radical volvía a gobernar Santiago del Estero.

De todas formas, muchos de los santiagueños decidieron conservar, “por las dudas”, las fotos del “matrimonio ilustre”. “Uno nunca sabe lo que puede pasar”, decían, y para justificarse hacían notar que el juez federal Ángel Toledo había otorgado la libertad a Juárez, a su esposa Nina y a todos los políticos juaristas al día siguiente de los comicios. Le quemaron la casa a Pepe Figueroa, obligaron a renunciar al vicegobernador Rubén Darío Moreno, se entregó vilmente el patrimonio provincial, se descubrieron los archivos secretos de Musa Azar con más de cuarenta mil carpetas de espionaje, pero nadie era finalmente culpable pues “todos los políticos santiagueños van al cielo”.

Zamora y Rached asumieron en una ceremonia impactante de cara a la plaza San Martín, en el mismo lugar donde ocurrieran varios de los trascendentales eventos que narramos en este libro. Tenían, tienen, un importante apoyo de la población santiagueña, esperanzada en la construcción de un nuevo Santiago del Estero.

Saben muy bien que los votos que los llevaron al poder y que supieron revalidar en las elecciones de octubre del 2005 no son inmutables ni eternos. Ha terminado, eso esperamos, la época de los largos reinados basados en un electorado leal a un color político: a cada paso el gobierno deberá convalidar sus títulos.

Es evidente que no es fácil el desafío que les espera en este Santiago post default y posjuarista. Y el primer riesgo que corre el gobierno es conformarse con hacer que las cuentas cierran: pagar puntualmente a los numerosos empleados públicos y conseguir fondos nacionales para alguna gran obra pú-

blica. Con esto se podrá –o no– ganar elecciones pero, de cara a la historia, no es suficiente.

Para empezar, tienen el imperativo de terminar de desmontar el régimen juarista y de consolidar la transición democrática de la provincia. Queda claro que no se trata solamente de cambiar los nombres sino de transformar un sistema político contaminado por las lógicas clientelares y prebendarias.

Para ver si se está construyendo una nueva forma de acción política, nada más fácil que observar cuáles son los actores sociales preeminentes. ¿Se está pasando a retiro a la red de punteros y está siendo reemplazada por dirigentes que verdaderamente representan a las bases?

Pero no sólo esto. El cambio en Santiago del Estero, como en toda la periferia argentina, involucra crear casi desde la nada una base productiva ¿Se busca salir de una economía sustancialmente basada, por una parte, en un gasto público financiado por la Nación y, por otra, en una agricultura de enclave?

En este aspecto, ¿cuál es la nueva alianza productiva que se plantea? ¿Se acabaron las fortunas creadas a la sombra del Estado provincial y predominan productores que buscan insertar productos santiagueños en el país y en el mundo? ¿Se tiene un plan de fomento productivo, de obra pública, de incorporación tecnológica?

EPÍLOGO

De cara al futuro

La maldición del santo

Según relata la "maldición de san Francisco Solano", la carreta del santo del violín se habría atascado a la salida de Río Hondo. Molesto por la falta de solidaridad de los pobladores, que no lo ayudaron a desenterrar las ruedas de su vehículo, al salir de la provincia sacudió sus sandalias y manifestó que no quería llevarse ni el polvo del lugar. A partir de este desaire, Santiago del Estero habría sido maldecida y condenada a un largo proceso de empobrecimiento.

La maldición del santo parece haberse cumplido a rajatabla: como ocurre con muchos otros pueblos de América Latina, la miseria, la continua degradación, hace que muchos se dejen tentar emocionalmente por esta "tesis" de una provincia "maldecida". De ahí que en este análisis hemos tratado de no caer en lo que Carlos Zurita llama la "proyección culposa", según la cual "resulta posible asignar todas, o casi todas, las responsabilidades por las penurias y falencias provincianas a la acción de fuerzas extrañas a la región, llámese imperialismo o centralismo portuario. [...] Fue la rapiña cordobesa la que despojó a Santiago de la primera universidad y del primer obispado del país en el siglo XVI, fue el accionar de la Forestal y de los inmigrantes árabes el que produjo la devastación de los bosques nativos, han sido los intereses tucumanos los que provocaron la crisis de los ingenios azucareros santiagueños, fueron los porteños los que conformaron una estructura económica que arruinó a Santiago...". Zurita (1994) señala que en muchos es-

tudios sobre la economía y la sociedad santiagueña se percibe el afán de encontrar atisbos de conspiraciones antiprovincianas y que este comportamiento lleva siempre "al escamoteo del análisis del comportamiento del sistema de estratificación vernáculo".

Alberto Tasso coincide con esta interpretación de Zurita cuando analiza los escritos de los historiadores santiagueños. Para él, Di Lullo y Canal Feijóo atribuyen al destino adverso las crisis contemporáneas que la provincia ha sufrido en este siglo. Y en Alén Lascano y Dargoltz, Tasso observa una visión global semejante:

El "destino" o la "fatalidad" tienen en estos autores una forma histórica más concreta: se trata del imperalismo británico y de la voracidad capitalista que montaron la explotación forestal y permitieron las funestas consecuencias para la provincia. (Tasso, 1999)

Aun tomando en cuenta estas prevenciones, es imposible no considerar la situación contextual desfavorable que tanto Santiago del Estero como el resto del noroeste argentino tuvieron que vivir. De esta forma, el lugar relevante que hasta bien entrado el siglo XIX habían ocupado tanto la provincia como la región se fue desvaneciendo con los cambios producidos a escala mundial —revolución industrial, rebaja de los fletes provocada por la navegación a vapor y el ferrocarril— y nacional, con el triunfo de Buenos Aires en la larga guerra civil.

La región pampeana se convirtió en la vedette de la economía mundial. Dios pasaba a ser argentino y apoyaba las políticas de libre comercio. El comercio, las inmigraciones europeas, las inversiones extranjeras, fueron convirtiendo a Buenos Aires y a las provincias aledañas en un área de rápido desarrollo que iban a prevalecer notablemente sobre el resto del país, al que ya se conocía como "el interior".

Dentro de los límites a las posibilidades de desarrollo que este esquema marcaba a las provincias de la periferia, el "sistema de estratificación vernáculo" que comentaba Zurita se mostró incapaz de desarrollar una "economía regional" agroindustrial como sí lo hizo la mayoría de las provincias del área. Peor aún, Santiago del Estero se insertó en la economía nacional a través de un patrón productivo que implicó la destruc-

ción de más de diez millones de hectáreas de bosques vírgenes y una estructura demográfica caracterizada por la amplia presencia de un campesinado disperso de muy bajos recursos. En suma, esta estrategia de inserción no sólo la retrasaría frente a otras provincias de la región sino que sería una rémora una vez agotada la etapa basada en la actividad forestal.

Ya en los estudios desarrollados en las primeras décadas del siglo XX para analizar las asimetrías entre regiones, Santiago del Estero era una de las provincias más pobres del país.

La crisis de 1930 provocó un profundo reordenamiento de la economía y la sociedad argentina, pero los importantes cambios que se sucedieron no afectaron los equilibrios básicos interregionales, ni el lugar que ocupaba Santiago del Estero en ellos. Es que la industrialización del país, al localizar las fábricas en función de la proximidad a los mercados consumidores por sobre el origen de los insumos, no hizo más que reforzar la preeminencia pampeana.

Hacia los 60, en el apogeo del proceso industrializador, las dos mayores jurisdicciones (Capital Federal y Buenos Aires) concentraban el 73 por ciento del producto manufacturero. Las provincias del norte, en cambio, mantenían un muy bajo producto per cápita y, dentro de ellas, Santiago del Estero representaba solamente el 1,1 por ciento del total nacional.

Hacia mediados de los 70, otra vez bajo el influjo combinado de cambios externos e internos, nuevas transformaciones se sucedieron en la organización económica y social del país. Nuevamente, estos cambios sólo produjeron variaciones de tipo marginal en la división regional del trabajo. Y como ocurre desde hace más de cien años, Santiago del Estero ocupó un lugar poco envidiable, tanto que todas las clasificaciones de provincias la consideran una de las jurisdicciones más retrasadas de la Argentina.¹

1. Con respecto a la situación relativa de Santiago hacia principios del siglo XX, véase Bunge (1928). Los datos de producto bruto de los 60 fueron tomados de Consejo Federal de Inversiones (1963). En Cao, Rubins y Vaca (2003) se recopilan datos referidos a más de veinte clasificaciones de provincias; en todas ellas, Santiago es considerada una de las jurisdicciones con menor desarrollo relativo.

Las grandes paradojas: "Pobre de Santiago por su estupenda riqueza"

Santiago del Estero dejó su marca indeleble al sembrar el suelo argentino de durmientes para el ferrocarril y postes para el alambrado de las grandes estancias de la pampa húmeda. Lo hizo con una materia prima única, el quebracho, con el que se produce una madera que tiene una durabilidad sin parangón dentro de la industria forestal.

Santiago recibió (¿del santo?) la llamada "maldición de los recursos naturales", aquella por la cual las regiones más pobres son, en muchos casos, las que la naturaleza ha provisto de mayores riquezas. La "maldición" se hace efectiva a partir de la codicia que despiertan las ganancias extraordinarias y del poder que tienen las empresas que las explotan frente a una sociedad con menor desarrollo relativo y una clase política local que no tarda en caer presa de la venalidad y la corrupción.

Ya lo dijo Alberdi:

La América que da frutos sin trabajo y sin cultivo será poblada por ociosos y por esclavos, explotada por otros ociosos usurpadores. [...] Dichosos los pueblos que tienen por morada un suelo pobre, ellos serán como la Prusia, como la Holanda, como la vieja Inglaterra en Europa y la nueva Inglaterra en América. Todo está compensado bajo el sol: el suelo pobre produce el hombre rico. (Alberdi, 1977)

Como sucedió en muchos otros puntos de América Latina y el Tercer Mundo, esta fenomenal dotación de materias primas sólo sirvió para empobrecer a la provincia. Como lo expresara Canal Feijóo (1946): "Al fin de cuentas, la provincia resultaba pobre por su estupenda riqueza".

Claro, podría decirse que en el capitalismo industrial y pos-industrial la riqueza no la dan los recursos naturales sino la complejidad productiva, el agregado de tecnología de punta... pero no deja de ser sugestivo que en Estados Unidos, Suecia, Canadá o Noruega la explotación de materias primas no es una maldición sino uno de los elementos que más aportan a su condición de países desarrollados...

Finalmente, el bosque de quebracho se extinguió y la provincia quedó inermes. Prosigue Canal Feijóo:

La imagen verídica de Santiago sería la de una persona con los brazos extendidos hacia algo que se venía derecho a ella, pero que luego resultaba pasando de largo.

La destrucción del bosque, como un súbito despaisamiento, la ruina del paisaje como hogar. Y luego, el eterno presente del juarismo, mientras en el país ocurría un hecho tras otro: el Cordobazo, el retorno de Perón, las idas y vueltas de la institucionalidad democrática, la lucha por los derechos humanos. Pero ya nada de esto quedaba en Santiago; todo "pasaba de largo".

DE LEJOS PARECE UN HUMO,
DE CERCA ALA QUE BROTA

De lejos parece un humo
de cerca una palomita... Si tu virtud no fuese como la
[tuna
que destila y aprieta en su higo toda la miel
pero crucificada;
si tu alegría no se asemejase
a un bailarín que zapatea
con el ojo en la sal
y la mano en el fuego
y el talón en la espina.
Si tu silencio no fuera el cascarón
prudente de tu idioma,
la vaina de tu música.
Si tu pena ¡oh, Santiago! no reventara en flores
igual que tu cardón...
Entonces, ¿qué podemos hacer,
¡oh, Santiago!,
sino evadimos en el ala de la paloma, o en el
[deslizamiento de la serpiente
que aprendió su lección en olvidadas Escrituras?
Y bien ¡transforma en pájaro y leyenda
tu amor blanco y tu odio negro!
¡Monta ya tu cabrito aleccionado,
y repica el llamador de una salamanca!
¡Toca el violín del santo

para que broten azucenas
 en la costilla del desierto!
 ¡Haz que tu mediodía
 sea el puño cerrado de tu magia!
 Santiago del Estero, esta canción
 es una herida que se viste
 con ropas de domingo...
 Yo vuelvo de tu pena,
 y en el oído izquierdo traigo una vidala.
 En el derecho una voz profética
 me dice tu nombre.
 Porque, sobre tu yermo,
 frente a la soledad,
 he visto a un dios arrodillado
 que meditaba tu delicia.
 De lejos parece un humo,
 de cerca un ala que brota.

El gran escritor Leopoldo Marechal presentó en 1953, durante los festejos del cuarto centenario de la fundación de la provincia, esta "Canción libre a Santiago del Estero" que deseamos rescatar como un canto a la esperanza.

Hoy, cuando asistimos a la caída del último caudillo, cinco veces gobernador y durante cincuenta años en el poder, los santiagueños no sabemos aún si estamos a la salida del infierno o una vez más en sus umbrales. Porque el miedo que agobia y paraliza, y la desconfianza que desvaloriza nuestros sueños, siguen vigentes en nuestra sociedad. Porque tenemos demasiados modelos para no imitar y muy pocos para seguir. Porque la cultura del autoritarismo es una huella por donde todavía caminan aquellos, afines al viejo régimen del oprobio, que tratan de reciclarse como representantes del pueblo.

Sin embargo, como muchos otros, consideramos que se abren nuevos tiempos. Desde el Santiagueño la presencia masiva del pueblo en las calles ha funcionado como una bisagra en la historia provincial: el futuro ya no volverá a pasar de largo.

Aparecen voces nuevas y una semilla de esperanza lucha por germinar. Son santiagueños que nunca militaron en partido político alguno, que tienen la voluntad de construir una nueva sociedad. Son gentes que todavía no saben cómo canalizar su energía de cambio, pero que poco a poco se van encon-

trando y uniendo. Con temor, es cierto, pero confiamos en que su firmeza permitirá cambiar esta historia de pobreza y marginación.

Con la esperanza de que el humo levantado en los santiagueños se transforme en el ala que brota.

Con gratitud hacia todos los que comparten nuestra pasión y nos ayudaron a escribir estas páginas.

Santiago del Estero, septiembre de 2006

Bibliografía

- ALBERDI, Juan Bautista (1953), Cartas inéditas de Juan Bautista Alberdi a Juan María Gutiérrez y Félix Frías, Buenos Aires, Luz del Día.
- (1977), Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1885), Buenos Aires, Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad.
- ALÉN LASCANO, Luis (1996), Historia de Santiago del Estero, 2ª ed., Buenos Aires, Plus Ultra.
- BALÁN, Jorge (1978), "Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo agroexportador", Desarrollo Económico, vol. 18, Nº 69, Buenos Aires.
- BIALET MASSE, Juan (1985), Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República (1904), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- BUNGE, Alejandro (1928), La economía argentina, II, Buenos Aires, Agencia General de Librería y Publicaciones.
- CANAL FEIJÓO, Bernardo (1946), De la estructura mediterránea argentina, Santiago del Estero.
- CAO, Horacio (2003), "La especificidad del Estado y la administración pública en las provincias del área periférica de la República Argentina", tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- CAO, Horacio y Josefina VACA (2003), "La otra cara de Santiago del Estero", Le Monde Diplomatique, Nº 51, Buenos Aires.
- CAO, Horacio, Roxana RUBINS y Josefina VACA (2003), "Clasificaciones y agrupamientos de provincias y territorios de la República Argentina", Cuaderno CEPAS, Nº 14, Buenos Aires.
- CARRERAS, Sergio (2004), El reino de los Juárez, Buenos Aires, Aguilar.
- CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (1963), Producto bruto geográfico, Buenos Aires, CFI.
- DANDAN, Alejandra, Silvina HEGUY y Julio RODRÍGUEZ (2004), Los Juárez. Terror, corrupción y caudillos en la política argentina, Buenos Aires, Norma.

- DARGOLTZ, Raúl (1980), Santiago del Estero. El drama de una provincia, Buenos Aires, Castañeda.
- (1983), La alianza anglo-porteña. Historia de la destrucción de una provincia, Buenos Aires, Del Mar Dulce.
 - (1990), Hacha y quebracho (segunda parte), Santiago del Estero, El Liberal.
 - (1991), Hacha y quebracho, Santiago del Estero, Conciencia Nacional.
 - (1994), El Santiagueño. Crónica y gestación de una pueblada argentina, Buenos Aires, SIELA-El Despertador.
 - (1997), "El estallido social de una provincia empobrecida", en I. Antognazzi y R. Ferrer (comps.), Argentina, raíces del presente, Rosario, Facultad de Humanidades y Arte.
- DARGOLTZ, Raúl, Oscar GEREZ, Horacio CAO y Josefina VACA (2005), El ala que brota, Buenos Aires, Utopía y Sueños.
- DI LULLO, Orestes (1937), El bosque sin leyenda. Ensayo económico-social, Santiago del Estero.
- (1952), La agonía de los pueblos, Santiago del Estero.
- FRENTE REVOLUCIONARIO INDOAMERICANISTA POPULAR (FRIP) (1964), "El proletariado rural, detonante de la Revolución Argentina", tesis políticas del FRIP publicadas en el periódico Norte Argentino.
- GONZÁLEZ TRILLA, Casimiro (1918), El chaqueño, Santiago del Estero.
- INTERVENCIÓN FEDERAL (2004), "Informe de la intervención federal al Honorable Congreso de la Nación", N° 1-11, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
- OLMOS CASTRO, Amalio (1943), El trabajo, Santiago del Estero, Dirección General de Estadísticas y Censos.
- PALACIOS, Alfredo (1944), Pueblos desamparados, Buenos Aires, Kraft.
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES (PRT) (1968), "El único camino hacia el poder obrero y el socialismo", documento del IV Congreso del PRT, Argentina.
- SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (2003), "Informe sobre Santiago del Estero", Ministerio de Justicia de la Nación.
- TASSO, Alberto (1999), "A favor y en contra del ferrocarril. Discurso y práctica en la historiografía santiagueña del siglo XX", Revista de Ciencia y Técnica, N° 3, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- TASSO, Pablo (2003), "Todos somos el Santiago de Juárez", ACILBUPER. Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- VILLALBA, Miguel Ángel (1993), "La revolución radical de 1933 en Paso de los Libres", Todo es Historia, N° 311, Buenos Aires.
- ZURITA, Carlos (1994), "El incendio y las visperas", Santiago del Estero, mimeo.

Apéndice fotográfico



Una celebración patria hacia principios del siglo XX en la Plaza Libertad, de la ciudad de Santiago del Estero. A kilómetros de la fiesta, se estaba produciendo la destrucción del bosque provincial.



Tala de un ejemplar de quebracho. La dureza y resistencia de este árbol lo convirtieron en preciado tesoro para la producción de postes de alambrado y durmientes de ferrocarril.



Más de veinte años después de su primer gobierno, en el mítico 1973, Carlos Juárez vuelve a la gobernación provincial luego de derrotar a López Bustos, el candidato de Perón. Atrás, una joven Nina entre los presentes.



16 de diciembre de 1993: arde la Casa de Gobierno durante el Santiagueño.



1995: luego de la intervención federal de Juan Schiaretti, Carlos Juárez, acompañado por Nina, jura por cuarta vez como gobernador.



Mobilización de la rama femenina del Partido Justicialista de Santiago del Estero. La rama era la fuerza de choque de Nina.



Movilización popular por el esclarecimiento de los crímenes de la dársena. Las marchas recorrían largos kilómetros desde La Banda hasta el centro de la ciudad de Santiago del Estero.



Movilización campesina en la ciudad de Santiago. La intervención federal tuvo una activa política de protección del bosque en alianza con el MOCASE "histórico".